**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES ANDINOS
MAESTRIA EN DESARROLLO AGRARIO**

**LA POLÍTICA AGRÍCOLA VENEZOLANA: APROXIMACION
REVOLUCIONARIA
(TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL
TITULO DE MAGISTER SCIENTIAE EN DERECHO AGRARIO)**

www.bdigital.ula.ve

Autor: Geog. Ramón Alexis Ramírez Márquez

Tutor: Dr. Elys Gilbrando Mora Belandria

Mérida, Octubre 2015

c.c Reconocimiento

**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES ANDINOS
MAESTRIA EN DESARROLLO AGRARIO**

**LA POLÍTICA AGRÍCOLA VENEZOLANA: APROXIMACION
REVOLUCIONARIA
(TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL
TITULO DE MAGISTER SCIENTIAE EN DERECHO AGRARIO)**

www.bdigital.ula.ve

Autor: Geog. Ramón Alexis Ramírez Márquez

Tutor: Dr. Elys Gilbrando Mora Belandria

Mérida, Octubre 2015

c.c Reconocimiento

**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES ANDINOS
MAESTRIA EN DESARROLLO AGRARIO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS
MERIDA ESTADO MERIDA**

APROBACION DEL TUTOR

Quien suscribe, en mi carácter de Tutor del Contenido del Trabajo de Grado:
**LA POLÍTICA AGRÍCOLA VENEZOLANA: APROXIMACION
REVOLUCIONARIA**, presentado por Geógrafo Ramón Alexis Ramírez
Márquez, **C.I.N°V- 12.487.071**, para optar al grado de **Magíster en
Desarrollo Agrario**; considero que dicho trabajo reúne los requisitos y
méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación
por parte del jurado examinador que se designe.

En la Ciudad de Mérida, a los 8 días del mes de mayo de 2015

Dr. Elys Gilbrando Mora Belandria

C.I: 8.036.501

**<<Los Hombres no se hacen en el
silencio, sino en la palabra, en el
trabajo, en la acción, en la reflexión>>**

(Paulo Freire)

www.bdigital.ula.ve

**A la Memoria del Comandante
Eterno Hugo Rafael Chávez Frías**

www.bdigital.ula.ve

**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES ANDINOS
MAESTRIA EN DESARROLLO AGRARIO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS
MERIDA ESTADO MERIDA**

La Política Agrícola Venezolana: aproximación Revolucionaria

RESUMEN

La tesis tiene por finalidad analizar las políticas públicas que en el área agrícola se implementan en Venezuela en diferentes etapas históricas, conforme al papel del Estado, al rol de las instituciones del sector público y al papel del gobierno revolucionario. Se trata de un estudio de caso, tomando en cuenta la heterogeneidad y la experiencia genérica de los programas agrícolas hacia los cuales han sido dirigidos los recursos públicos y la inversión financiera. La finalidad concreta está en formular una propuesta que desde el horizonte teórico permita fortalecer el debate y la crítica objetiva en el marco de la democratización de la política de tierras, todo en el transcurso histórico de la democracia participativa y protagónica que debe llevar hacia un nuevo modelo hegemónico de desarrollo.

Palabras clave: política agrícola, territorialización, democracia, participación, inclusión social, soberanía alimentaria, revolución.

INDICE GENERAL

	Pág.
Introducción.....	1

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.1.- El problema en su contexto general.....	5
I.2.- Objetivos.....	5
I.2.1.- Objetivo general.....	5
I.2.2.- Objetivos específicos.....	6
I.3.- Justificación de la investigación.....	6
I.4.- Alcances de la investigación.....	9
I.5.- Limitaciones de la investigación.....	10
I.6.- Antecedentes de la investigación.....	11

CAPÍTULO II

LA CUESTIÓN AGRARIA EN EL ESPACIO SOCIAL

II.1.- La cuestión agraria en el espacio social.....	20
II.2.- Balance latinoamericano.....	21
II.3.- Determinantes sociopolíticos.....	31

CAPÍTULO III

ENSAYOS DE INTERVENCIÓN

III.1.- Experiencias inconclusas y expectativas frustradas del sistema agrario venezolano.....	36
---	----

III.2.- Concepción actual de la problemática, otras formas de recorrer la democracia.....	47
III.3.-Institucionalización de las nuevas formas de dirección de la política agrícola.....	53

CAPITULO IV

DIALECTICA REVOLUCIONARIA DE LA POLITICA AGRARIA

IV.1.- La política pública agrícola en el nuevo esquema de la democracia social.....	68
IV.2.- La particularidad revolucionaria de la política agraria en la Venezuela del Proyecto Político Bolivariano.....	74
IV.3.- El INTI como unidad operativa de la nueva política agrícola.....	82
IV.4.- Entre la violencia de la oligarquía y la urgencia de los cambios socioeconómicos.....	102
IV.5.- Política agrícola y su atención en los Foros Sociales.....	103
IV.6.- La opción distributiva centrada en la gente.....	105
IV.7.- Política agrícola y desarrollo sustentable.....	106
IV.8.- Política agrícola y desarrollo sustentable.....	108
V.- CONCLUSIONES.....	115
VI.- BIBLIOGRAFÍA.....	125

INTRODUCCIÓN

La política agrícola es un tema de referencia constante en el estudio de las ciencias sociales y de mucha actualidad en el análisis económico de las políticas de Estado y de gobierno. Por lo general este asunto también está presente en los debates geopolíticos sobre los procesos territoriales y de reforma administrativa de la gestión pública en América Latina. En este sentido, las investigaciones van desde el institucionalismo clásico o tradicional hasta el nuevo institucionalismo organizacional reciente.

Por su parte en Venezuela esta política se analiza en función de los cambios que tienen lugar en las estructuras sociales dentro de las fuentes históricas del poder económico y político, todo en momentos diferentes y bajo características específicas según las estrategias de gestión de las políticas públicas de cada gobierno. Desde este punto de vista, se abordan a continuación un conjunto de temas, tras los cuales se adelanta una política agrícola que no es homogénea porque tiene sus altibajos. En este sentido existen asimismo particularidades en el formato de la administración, ejecución y control de la política agrícola, producto de las decisiones que llevan a resultados diferentes, con su impacto respectivo en la propia legitimidad de dicha política.

Asimismo la política agrícola venezolana se arraiga en el pasado y se muestra ahora como tarea especial en la exploración académica, institucional y política dentro de las nuevas tareas de la Revolución Bolivariana, proceso singular e iniciado en el año 1998 de la mano del Comandante Hugo Chávez, quien entre sus dimensiones y alcances se trazó un proyecto político como fuerza de poder histórica para darle forma a una nueva arquitectura institucional, en medio de alternativas exigentes para la democracia participativa y protagónica, alrededor de la cual gira el

posicionamiento de formas de justicia social inéditas, destinadas a transformar la condición del trabajo y de los trabajadores en el medio rural venezolano.

Teniendo presente los aspectos referenciados y a efectos de conducir la investigación, el trabajo delinea como propuesta inicial que: *la política agraria en el marco de las relaciones de poder en Venezuela tiene su espacio de legitimidad mayor en momentos cuando la acción revolucionaria interviene a favor de los sectores sociales excluidos.*

Entre las opciones prospectivas de la investigación se asumen criterios de tipo analítico descriptivo, en medio de una caracterización cualitativa y valorativa del objeto de estudio, así como la relevancia documental de las políticas de desarrollo agrario, subrayando la importancia estratégica de las políticas revolucionarias en el marco del nuevo proyecto nacional venezolano.

De manera descriptiva entonces, el primer capítulo enmarca el planteamiento del problema en un contexto integral, describiendo metodológicamente los objetivos generales y específicos, presentando la justificación, los alcances, las limitaciones, y los antecedentes de la investigación, siendo que la política del desarrollo agrario tiene como telón de fondo una caracterización y unos atributos discernibles conceptualmente dentro de las relaciones de poder y en medio de las condiciones del tiempo histórico y político.

El capítulo dos analiza la cuestión agraria en el espacio social latinoamericano y nacional, enfatizando en la realidad de los movimientos revolucionarios engendrados al fragor de las demandas populares, en un proceso guiado por la radicalización de las disputas contra la oligarquía

terrateniente, lo cual lleva a invocar soluciones a través de la lucha de clases. Algunos de estos movimientos, que también reafirman la idea de liberación nacional, se convierten en referentes e inspiración de primera línea para promover una política agraria con el sentido revolucionario y darle fuerza al proceso que se vive en Venezuela.

El tercer capítulo plantea algunos ensayos de intervención de la política agrícola, revisando ciertas experiencias y expectativas de cambio, en medio de las estructuras institucionales de la democracia venezolana que determinan o condicionan esta política pública.

Por su parte el capítulo IV es prácticamente el centro y objeto principal del análisis, pues se circunscribe a los ejes medulares de la política agrícola, que está sujeta a la discusión y a la crítica, pero llamada asimismo a convertirse en un área estratégica del desarrollo y en un elemento clave a la hora de legitimar los resultados de la Revolución Bolivariana en la gestión pública socio productiva.

Finalmente en las conclusiones se contrastan algunos aspectos análogos a los objetivos inicialmente planteados en la investigación, además de formular líneas de importancia para futuras investigaciones, destacando temas de actualidad e interés para el estudio prospectivo de la política agrícola venezolana. En general la tesis finaliza exaltando el interés académico sobre varios puntos de conjunto inmersos en la política agraria venezolana, a los cuales se supone debe atender ineludiblemente el gobierno revolucionario con ética política, exigencia y responsabilidad de gestión, elementos clave para instrumentar acciones eficientes, tendientes al modelo socialista de país, instrumento guía y de dirección popular para la Venezuela futura.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

www.bdigital.ula.ve

CAPÍTULO I

I.1.- El problema en su contexto general

La política pública de desarrollo agrario tiene una importancia, vigencia y validez incuestionables. En este panorama la investigación aquí planteada exige como necesidad para orientar el análisis del contenido de la tesis la tarea de abordar sistemáticamente el objeto de estudio respondiendo a interrogantes centrales como las siguientes:

1.- ¿Una política de desarrollo agrícola en Venezuela puede ser implementada como un mecanismo del gobierno revolucionaria para fortalecer a los sectores sociales excluidos?

2.- ¿Qué condiciones, actores, y variables, influyen sobre los resultados y la calidad de las políticas públicas de desarrollo agrario?

3.- ¿Cómo interviene la gestión de las instituciones tradicionales y del nuevo institucionalismo sobre la legitimidad de la política agrícola venezolana?

I.2.- Objetivos.

I.2.1.- Objetivo general

Analizar las políticas públicas en el sector agrícola venezolano considerando la importancia territorial de los espacios rurales, la influencia de las relaciones de poder, y el marco institucional dentro del cual operan los actores de la democracia participativa y protagónica.

I.2.2.- Objetivos específicos

1. Analizar la política agrícola venezolana como estudio de caso.
2. Investigar la experiencia genérica de los programas agrícolas en función de la gestión de diferentes gobiernos.
3. Determinar los efectos sociales de las políticas de desarrollo agrario siguiendo el formato de la experiencia revolucionaria.
4. Revisar el impacto de las políticas de desarrollo agrario en diferentes momentos y etapas de la vida nacional.
5. Destacar los alcances institucionales de las políticas de desarrollo agrario, enfatizando en los objetivos de la gestión política del gobierno bolivariano en la lucha contra la exclusión y la pobreza.

I.3.- Justificación de la investigación

Las políticas de desarrollo agrario son un asunto de actualidad mundial, pero de asimilación lenta en el análisis integral del desarrollo, a lo cual se agrega una operatividad y funcionalidad sociocultural crítica que exige atención, revisión, análisis, estudios e investigaciones coherentes e integrales, entendiendo que sobre la misma política inciden también factores naturales, físicos, económicos y poblacionales.

En América Latina la política agrícola es un tema vivo y palpitante que en las diferentes realidades nacionales y de manera particular en Venezuela, a consecuencia de las posibilidades de consolidar una agenda revolucionaria sustentable de Estado y de gobierno, se constituye en un foco de atención, más cuando se trata de visualizar alternativas a la agricultura dependiente del subsidio y el financiamiento de la renta derivada de la economía petrolera.

Desde este punto de vista, son escasos los estudios que en términos comparados y en perspectiva revolucionaria promuevan el análisis de estas políticas. De allí que la propuesta fundamental de la tesis se afiance en la necesidad de realizar un abordaje de las políticas de desarrollo agrario en Venezuela, entendiendo la importancia del papel institucional del Estado y la relevancia de la gestión del gobierno revolucionario para promover su inserción en el marco de la democracia participativa y protagónica.

En este sentido el trabajo se presenta con sus atributos económicos y políticos como un desafío para la discusión fecunda y el debate crítico, sobre todo a la hora de analizar y proponer alternativas a las posibles debilidades, las necesidades y los problemas observando las políticas agrarias en Venezuela.

Se trata en todo caso de unas políticas de Estado y de gobierno enfocadas a precisar los elementos de una nueva ruralidad, la cual está determinada a su vez por la urgencia de abordar transformaciones estructurales conducentes a cambiar la cultura reflejada en la composición poblacional y las necesidades de alimentación cada vez crecientes, donde los programas alternativos se inspiren en innovaciones transversalizadas por acciones de corresponsabilidad, sobre todo en materia ambiental, que deben ser de referencia obligatoria en un sistema de planificación tendiente a hacer más eficientes las estrategias diseñadas para los espacios territoriales donde se focalizan las actividades productivas en materia agrícola.

En este sentido la nueva ruralidad, sin ser la panacea del desarrollo, es asimilada por las políticas revolucionarias en el despliegue estratégico de la soberanía y la seguridad agroalimentaria. Ello se formaliza como una propuesta de cambio en la caracterización de la propiedad de la tierra, y en la posibilidad de construir sistemas productivos sustentables pero a la vez

con una visión inclusiva dentro accionar del gobierno nacional para reducir la pobreza.

Visto así, el trabajo tiene su justificación en la nueva orientación del Estado, de la agricultura y del desarrollo rural, temas de hondo calado en las normas constitucionales y en las leyes especiales destinadas a garantizar la seguridad alimentaria, y donde además se declara la producción de alimentos como parte fundamental del interés nacional, además de privilegiar la producción agropecuaria interna, siguiendo patrones guía como el de la llamada agricultura sustentable dirigida y hacia un desarrollo rural integral.

Por ello, la motivación central del trabajo deriva entonces de la posibilidad de explicar académica y políticamente el horizonte teórico de la nueva ruralidad y la territorialización, formulando propuestas de alcance revolucionario para comprender la nueva política de tierras y reimpulsar la legitimidad de las políticas públicas distributivas destinadas a darle sentido humano y a fortalecer a la democracia, cuyo objetivo debe ser mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano, siendo que por desdicha la democracia representativa, ya desplazada, difícilmente logró impactar en los resultados a los cuales se aspiraba, mientras que la Revolución Bolivariana, coherente con la política de inclusión social, ha venido revalorizando desde hace 16 años una formulación sistemática de opciones para consolidar y democratizar la política de tierras bajo criterios más humanos, entendiendo que los espacios de poder deben ser instrumentos efectivos de decisión socialista en el despertar de la nueva conciencia popular que referencia simbólicamente la posibilidad de hacer realidad los mecanismos participativos, protagónicos del pueblo y las tareas de consolidar un nuevo modelo de desarrollo socio productivo.

En este sentido, el trabajo tiene como fundamento central, entonces, abordar la naturaleza de la política agrícola venezolana, en un escenario revolucionario de cambios en la conducción nacional dentro del proceso revolucionario que recorre varias etapas del jalonado proceso político del país, donde el énfasis va desde la intervención del Estado, la revisión del papel de los actores políticos en las distintas fases de tiempo bajo estudio y el abordaje de la naturaleza económica, social y política, que mueven los intereses en las relaciones de poder en este espacio de la geopolítica nacional.

1.4.- Alcances de la investigación

Los estudios de sobre las políticas agrarias tienen un recorrido importante en la literatura sobre la acción gubernamental y su interés viene determinado por la necesidad de reflexionar acerca de las condiciones y las contradicciones presentes en los distintos procesos marcados por la búsqueda del desarrollo. No obstante es necesario aseverar que por sus dimensiones y amplitud este tema ha sido objeto de estudio según las necesidades del orden político interno en cada país y bajo la premura de ofrecer respuestas a los problemas humanos de alimentación. Asimismo esto lleva a pensar en construir formas democráticas de acceso a la tierra y a los bienes de primera necesidad, como se observa en la integración de las agendas institucionales y políticas de los gobiernos en Venezuela, principalmente del que se inicia en el año 1998.

Todo lo anterior permite señalar que el tema en estudio tiene un carácter amplio y sus expectativas un radio de análisis global, lo cual se refleja en el papel institucional y en los roles gubernamentales que mueven a considerar la relevancia de la política de desarrollo agrario como un eslabón de los planes de la nación y donde los procesos de organización determinan

las alternativas para avanzar hacia el desarrollo y luchar contra la exclusión y la pobreza.

I.5.- limitaciones de la investigación

En la construcción del objeto de estudio del trabajo se han encontrado limitaciones de carácter teórico, básicamente en lo referente a teorías de carácter comparativo que permitan un abordaje homogéneo para sacar conclusiones convincentes y determinantes. De igual forma, aunque se admite que la política agraria debe ser integral, sostenible, e impactar en los hechos, son escasas las fuentes empíricas de los datos que permitan reflejar en los resultados del muestreo descripciones convincentes, objetivas y de largo alcance para analizar la realidad histórica de las políticas de desarrollo agrario y explicar con mayor certeza su proceso y aplicabilidad.

Ello conduce a la necesidad de un abordaje desde una perspectiva crítica, lo cual exige una selección de la información considerando la organización de teorías de alcance medio, que en sus dimensiones históricas, geográficas, sociológicas y políticas, considera los aspectos sustanciales de esta política pública y por esta vía abordar los objetivos propuestos en la investigación, donde el Estado, el gobierno, los sectores políticos, económicos y sociales, constituyen actores fundamentales del tejido de las relaciones de poder, y quienes influyen o determinan el accionar de la política de desarrollo agrario en Venezuela.

Por otra parte hay factores externos con influencia decisiva e impacto potencial en este campo de estudio, que generan complicaciones en la investigación y que son igualmente importantes, por ejemplo: el cambio en la composición demográfica, el atraso en las decisiones políticas tomadas por los gobiernos para el sector rural, la diferenciación en el espacio ocupacional,

etc. Agréguese a ello la falta de estudios coherentes sobre estadísticas agrícolas para explicar las condiciones productivas de la población rural activa, y las variables para el control de la pobreza de quienes permanentemente hacen su trabajo en este ámbito social.

I.6.- Marco teórico metodológico

I.6.1.- Antecedentes de la investigación

La política agrícola venezolana es un tema de amplia aceptación en el mundo académico y en perspectiva de las ciencias de gobierno su interés se mueve entre la teoría crítica de la lucha de clases y las alternativas de las realidades históricas y culturales, explicables dentro de los modelos de la economía política. En base a la formación del conocimiento se considera que la Ciencia Regional, junto a la Geografía Económica y la Economía Agrícola son disciplinas orientadas a plantear teórica y metodológicamente el análisis de las políticas del desarrollo agrícola dentro de la nueva ruralidad y a potenciar la agricultura, que como sistema “constituye un conjunto finito de relaciones entre elementos que son constantes tales como los suelos, el clima y los cultígenos, y otros elementos variables tales como los medios e instrumentos de producción y la fuerza de trabajo, que se objetivan formando un sistema agrario” (Sanoja Obediente, 2011: Pág. 78).

Ahora bien, a nivel de la sociología política es importante resaltar el legado marxista que llena los estudios acerca de la estratificación social, la lucha de clases, la alineación social, así como la necesidad de superar los mecanismos opresores de la cultura económica capitalista. Recuérdese que el trabajo intelectual de Marx fue bastante prolífico. Su legado científico y político es de gran interés e importancia, y su trascendencia extraordinaria está en haber permitido construir, desde las condiciones materiales de la

existencia social, un sistema de pensamiento coherente contra la alienación y centrado en la satisfacción de las necesidades humanas.

Siguiendo este paradigma teórico, la piedra angular del pensamiento organizado de Karl Marx está en su teoría materialista de la historia, en la aplicación del método dialéctico, en el análisis de la lucha de clases, en la crítica de la economía política capitalista, en la teoría de la alienación, en el pensamiento revolucionario, y en la teoría de la ideología, asuntos sobre los cuales gravita la visión reformista y progresista de la sociedad.

Desde esta perspectiva, el marxismo bien mirado comprende entonces una forma de pensamiento abierto para el examen y el análisis de las formas de dominación económicas que generan relaciones sociales antagónicas y contradictorias. Por ello, Marx ha inspirado una ideología política de vanguardia y una forma de pensamiento progresista, especialmente concebido para la lucha revolucionaria, locomotora de los cambios radicales en la historia, por medio del cual se busca transformar la realidad social.

Bajo este legado marxista de la historia se inscribe nuestra propuesta de tesis, entendiendo que la historia de la lucha por la emancipación social ha sido una constante en la búsqueda por liberarse socialmente de los sistemas de opresión. No obstante, en contextos diferentes se ha abordado de manera desigual esa dicotomía, y en Venezuela se da a través de la búsqueda de la articulación del Estado y la sociedad para lograr algunos fines acordes al siempre buscado proceso de modernización. Ello permite hablar en el plano de las estructuras económicas y sociales de la formulación de una política de producción agrícola, lo cual apunta en el plano georreferencial al análisis territorial. Ello permite hablar de generar las condiciones idóneas para cubrir las necesidades básicas de la población, en este caso las de alimentación.

En este sentido y como se puede observar, el tema en estudio tiene un recorrido histórico importante, que por lo demás hunde sus huellas en la firmeza revolucionaria de nuestros pueblos originarios contra la colonización y la conquista territorial, lo cual en las “Venas Abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano tiene un antecedente brillante, siendo una de las exposiciones más agudas y mejor elaboradas por retratar en un imaginario político magistral las relaciones de desigualdad y de dominio expresadas en una relación asimétrica, donde los latinoamericanos, según él, hemos perdido mientras otros han ganado en medio de la constelación imperialista.

Con su sabiduría socialista y una prosa de altura e iluminada por la mente de intelectual crítico y socialista, Eduardo Galeano decía: “América Latina es la región de las venas abiertas. Desde la independencia hasta nuestros días todo se ha transmutado siempre en capital europeo, o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos, y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se le ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y manos de obra” (1982).

A través de esta cita extensa, pero necesaria, se percibe una expresión de la prosa latinoamericana, ideal para traducir los problemas de nuestros

pueblos, quienes recorren una historia jalonada y larga de contradicciones ante las debilidades de una política de tierras, que constituye una constante en el ejercicio conceptual acerca de las condiciones bajo las cuales se producen y avanzan tanto el poder de la oligarquía terrateniente como los intereses de los latifundistas.

Ahora bien, la política agrícola venezolana incluye la comunidad campesina y la geografía económica, ejes fundamentales dentro de las estructuras que sustentan las dimensiones participativas de las políticas públicas territoriales y alimentarias. Conforme a ello “la tierra es el lugar geográfico que por determinadas aptitudes naturales provee ubicación, espacio de uso y una base de apoyo para la edificación y la infraestructura necesaria a cualquier género de actividad humana. De esta forma se ratifica que en su efectividad, lo natural y lo cultural son componentes de un complejo físico y humano mutuamente influenciados, y ambos a la vez interdependientemente desempeñan papeles congruentes en el lugar donde coexisten” (Espinoza, 1992: Pág.15).

Siendo así, y como factor de interés capitalista la propiedad de la tierra funciona para la cultura imperialista como una fuente de legitimación del poder y se convierte en un elemento justificador del individualismo y el reparto particular de beneficios. Sin embargo es a partir de las declaraciones de independencia de las naciones latinoamericanas en el Siglo XIX, cuando los estudios que cruzan el horizonte teórico sobre el tema se hacen más necesarios, básicamente si se toma en consideración que se trata de un momento histórico de despunte del análisis sistemático, porque “van a proliferar denuncias y defensas, consideraciones de la propiedad como derecho o como robo, como bandera revolucionaria o como arma política, cuya utilización en uno u otro sentido por diferentes partidos es uno de los reflejos más importantes de la ideología de estos, de sus polos de atracción y del sentido de sus reformas” (Sánchez Jiménez, 1982: Pág. 6).

En adelante y entre los siglos XIX y XX los estudios se enmarcan en la sociología del poder, la estratificación social, y el análisis de clases, lo cual se produce en función de revisar y darle sentido a la dinámica del desarrollo, que a su vez puede ser afianzado por la capacidad productiva de la tierra. De allí la importancia de algunos aportes recogidos aquí para fortalecer la investigación desplegada a lo largo del trabajo.

Siendo así, las condiciones asociadas al medio rural y a la producción agrícola, son parte de una preocupación central que viene siendo enfocada dentro de la economía política y se valora en las investigaciones de la sociología política y la geopolítica del Estado. Desde estas perspectivas se analizan acontecimientos históricos, determinantes sociales y pautas culturales, que se mueven en la investigación de los actores políticos, institucionales, económicos y sociales.

Ahora bien, para un acercamiento histórico al objeto de estudio se puede señalar que antecedentes remotos refieren, según análisis bien fundamentados, el surgimiento del *homo economicus* en la Tierra, lo cual ocurre asociado a la agricultura. Al forjarse una producción de alimentos, por encima de los requerimientos domésticos, se generaba un excedente posible de ser intercambiado a través del trueque. Nace así una incipiente actividad comercial tendiente a localizarse dentro de los asentamientos humanos (Gabaldón, 2006: Pág.247).

En la misma historia del pensamiento económico, desde los estudios clásicos hasta los más recientes hay una tendencia necesaria a relacionar la actividad agrícola y la satisfacción de las necesidades humanas. Siendo así, la agricultura, en perspectiva socioeconómica, puede ser entendida “como una actividad productiva en la cual los hombres y mujeres, a través de la utilización de un instrumental apropiado y la acumulación de un cuerpo de

experiencias relativas al crecimiento y desarrollo de determinadas plantas útiles, el conocimiento sobre la forma de reproducir artificialmente los ciclos naturales y de la fuerza de trabajo para llevar a cabo toda la secuencia de actividades tecno económicas para el apoyo y mejoramiento de esa actividad productiva, logran obtener la cantidad necesaria de energía para reproducir su existencia y romper la dependencia del grupo social” (Sanoja Obediente, 2011: Pág. 78). Ello conduce a establecer criterios de vinculación entre el crecimiento poblacional y el manejo óptimo de la tierra, todo lo cual implica hablar de las bondades de la naturaleza y el uso óptimo de los recursos.

Ahora bien, aludiendo a tiempos no muy lejanos se considera entre los antecedentes científicos de la política agrícola la aparición de la Escuela de Pensamiento llamada “Fisiocracia”, que surge en Francia en el siglo XIX, y tiene como punto de partida el principio elemental de que la generación de riqueza es parte de las leyes naturales, asumiéndose que la prosperidad tiene sus inicios en la renta de la tierra, básicamente en la agricultura, único sector, al parecer de esta Escuela, idóneo para formar el llamado “producto neto”, e impulsar asimismo la fuente natural de la riqueza.

De hecho y según Gabaldón, la agricultura como proveedora de alimentos para una población creciente en el mundo, pasó a convertirse en la principal actividad económica. Su papel como factor asociado al progreso humano es imputable hasta el propio inicio de la “revolución industrial”, en el siglo XVIII. En consecuencia son varias y muy importantes las funciones que ella cumplió en este contexto” (Gabaldón, 2006: Pág. 248).

En un examen razonable aunque la Fisiocracia tuvo en su momento mucha influencia como Doctrina Económica, su duración fue muy corta (años 1758-1768), y entre otros motivos su decadencia se produce debido al impulso de la economía liberal clásica, y las aproximaciones científicas de

Adam Smith y David Ricardo primordialmente, quienes exponen la teoría del valor trabajo, en contra de la agricultura como única fuente de generación de riqueza. Como alternativa, estos paradigmas del pensamiento económico clásico abrieron el espacio de las libertades económicas, que se analizaban asociadas impulsas a lo que ellos mismos llamaron la “mano invisible del mercado”, donde la especialización de la producción, la división social del trabajo y la libre competencia, se mueven como las causas y las razones fundamentales de la producción de bienes y servicios, siendo a la vez que estos factores determinan las causas de la riqueza de las naciones.

Sin embargo y como se deduce del análisis de las políticas públicas en Venezuela, una verdadera política rural equitativa es una deuda pendiente en las estrategias agro productivas, donde hay sin dudas una situación de larga espera. De allí la posibilidad de resituar la cuestión agraria en un primer plano, pues se trata de un “conjunto de problemas sociales y económicos que atañen al sector primario de la economía, y especialmente a los que se refieren a los trabajadores del campo” (Ambrosoli, 1988: Pág.5)

Ahora bien, en la literatura acerca de la lucha de clases es donde parece estar un aporte fecundo para el abordaje marxista del problema en estudio. En este sentido es posible observar desde la perspectiva señalada que “en la Venezuela Colonial, en el contexto de una muy singular formación económico-social precapitalista se desarrolló una estructura social de clases y castas; clases plenamente consolidadas, unas, y otras en vías de desarrollo o estado de transición. Clases sociales, castas, grupos estamentales, estratos y capas sociales intermedias, categorías socioeconómicas y socio profesionales, todas en permanente lucha, soterrada y/o violenta según los intereses y aspiraciones de cada grupo en particular. Esta es la dialéctica de la historia colonial venezolana” (Brito Figueroa, 1991: Pág.230)

De esta forma y en la misma línea de argumentación están muy bien identificados los trabajos que recorren el análisis de la política rural venezolana, donde la pobreza producto de la inconsistente distribución de la tierra se pone de manifiesto, además de ser una variable central a la hora de analizar las debilidades históricas del desarrollo equitativo en el campo venezolano.

Más allá de estas consideraciones expuestas, hoy se habla conceptualmente en la teoría de la geografía económica de una ruralidad de nuevo tipo, entendiendo en este contexto y en medio de la encrucijada y los problemas del desarrollo, la realización de tareas que no estaban muy presentes en la política tradicional del desarrollo agrario, ante lo cual un nuevo institucionalismo y una visión diferente de abordar las políticas agrarias viene surgiendo, sobre todo porque se trata, en términos puntuales, de ofrecer “una mayor apertura para la democracia local, buscando generar una nueva dinámica de gobernabilidad que priorice el balance entre el acceso a los recursos y la distribución de éstos a través de sistemas locales de cooperación social e integración económica” (Clemens y Rubén, 2001: Pág.69).

CAPÍTULO II

LA CUESTIÓN AGRARIA EN EL ESPACIO SOCIAL

www.bdigital.ula.ve

CAPITULO II

II.1.- La cuestión agraria en el espacio social

En los medios socios políticos las relaciones de poder son parte de una dinámica normal, y cuando se trata de democratizar los espacios de acceso a determinados medios de producción encontramos una visión unidimensional de la economía capitalista que a todas luces resulta ser un elemento crítico. Ahora bien, el tema del desarrollo agrario se viene haciendo cada vez más importante, y sobre ello se construyen teorías que ayuden a fundar estrategias de cambio, considerando la existencia de experiencias de gestión para potenciar el desarrollo.

Ahora bien, la realidad de la política agro productiva está inmersa en un proceso de cambio que han venido experimentando los países en tendencias hacia el desarrollo, especialmente después del inicio de la Revolución Industrial, donde la agricultura se muestra como una estrategia, una necesidad y una actividad socio económica fundamental, aunque frente a otros espacios productivos tiene una importancia relativa menor, esto si contamos su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de cada nación como unidad territorial.

En términos estadísticos los indicadores muestran una tendencia promedio donde el ingreso per cápita, especialmente como consecuencia de la industrialización y la expansión del sector servicios, en los distintos países presionan a la baja porcentual de la agricultura en la conformación del PIB” (Gabaldón, 2006: Pág.250). Pero cada región tiene sus especificidades, siendo que “una región constituye sobre la tierra un espacio preciso pero no inmutable, inscrito en un marco natural dado que responde a tres características esenciales: los vínculos existentes entre sus habitantes, su

organización en torno a un centro dotado de una cierta autonomía y su integración funcional en una economía global” (George, 1966: Pp. 326-327).

Ahora bien, la historia es importante a la hora del análisis y en este sentido se debe mencionar, que después de la Independencia las exportaciones agrícolas y en ciertos casos mineras continuaron representando hasta bien entrado el siglo XX, la fuente más importante de divisas para adquirir del exterior bienes de consumo y de capital necesarios, que apalancaron sus respectivos procesos de crecimiento económico” (Gabaldón, 2006: p.249).

En adelante es necesario aclarar que toda reforma en el sector agrícola implica adecuar las instituciones a la realidad del contexto geopolítico donde se insertan las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales, vinculadas a los supuestos del desarrollo y sobre los cuales convergen los factores productivos, por ejemplo: la tierra, el capital, la mano de obra, el progreso tecnológico, etc., así como agentes formales de justicia social y gestiológicos de eficacia, eficiencia, economía, igualdad y distribución, todo de conformidad con el objetivo de romper las tendencias oligárquicas y recomponer el significado de la democracia horizontal y participativa en sentido amplio.

II.2.- Balance latinoamericano

La historia regional de América Latina indica la existencia de una correlación de fuerzas desigual en el tema de la política agraria, contándose obstáculos para el progreso democrático y el avance hacia el siempre buscado y escasamente logrado momento de una posible modernidad económica y social. Según el análisis de Ugo Pipitone, hay por lo menos dos aspectos del universo de historial que llamamos América Latina sobre las

cuales la contundencia es inevitable: el fracaso a lo largo de casi dos siglos de vida independiente en los territorios del Estado y la agricultura. Obviamente, fracaso es una palabra demasiado estruendosa, pero tal vez no del todo inadecuada para sintetizar recorridos históricos que nos depositan, en estas partes del mundo, instituciones públicas y estructuras agrarias capaces de sostener (e interactuar con) procesos de desarrollo de largo plazo. Hace ya muchas décadas Latinoamérica se ha vuelto símbolo mundial de aquello que, con fina ironía, el lenguaje diplomático define como “países en vías de desarrollo” (Pipitone, 2001:Pág.81)

Por otra parte América Latina ha sido también un laboratorio para la discusión sobre el desarrollo, y no caben las equivocaciones. Vivimos en un espacio geopolítico de muchos recursos naturales, pero a la vez tenemos una población con grandes carencias. Asimismo en orden a los intereses nacionales la exclusión del sector rural aparece como un problema subyacente en la discusión sobre la actividad productiva en América Latina y hoy lo es sobre el papel y los alcances de la democracia.

Ahora bien, y siguiendo con el recorrido histórico en el subcontinente se tiene, que en América Latina la cuestión agraria es insistentemente señalada en las llamadas “Bulas Alejandrinas”, promulgadas por el Papa Alejandro VI (1493) que, en cierta forma, fueron categóricas en la formación de la propiedad territorial de la tierra “desde arriba”. Estas prerrogativas moldearon la propiedad territorial en América Latina (Véase Delahaye, 2001 Pág.22).

Esto significa en la historia de las relaciones sociales la existencia de un dominio imperativo de un orden racional en lo económico. Asimismo la concentración del poder de la propiedad territorial ha sido una variable determinante en este proceso, por lo que diferentes fuerzas sociales, políticas e intelectuales, han reaccionado en atención a la posibilidad de

enfrentar esa forma de supremacía que le resta posibilidades a la igualdad dentro de la generalidad de las personas, y así mismo va en contra de una mejorar condición humana al aumentar la pobreza y la frustración a consecuencia de las carencias en el campo.

Bajo este punto de vista debemos aludir a un tema de alta controversia como el “latifundio”, un asunto impostergable de abordar y que como extensión del dominio territorial ha sido en América Latina uno de los frenos a la equidad, y como diría Carlos Rangel, un lastre casi mortal, o mortal cuando tiene su origen en una sociedad esclavista, como sucedió en el Imperio Español en América, por las consecuencias que ello tiene en la formación de actitudes y comportamientos tanto en los amos como en los esclavos y en sus descendientes (Ránel,1982:Pág.253)

Dentro de estas inquietudes, el proyecto socialista engendrado en el horizonte del ideal revolucionario, ha implicado la necesidad de la lucha antiimperialista, antifeudal y, a la vez, la búsqueda de un régimen de igualdad frente a la hegemonía de las élites dominantes del estatus quo. La realidad es que en América Latina, como lo refiere Villegas, el carácter feudal de la propiedad constituyó el eje del problema económico, político y social. La gran hacienda semifeudal es improductiva, propicia la servidumbre e imposibilita la democracia” (Ránel, 1982:Pág.253)

En este sentido, la encrucijada de las estructuras de poder ancladas en formas de dominación capitalista, y el latifundio como uno los lastres más nefastos, han avivado los fuegos del conflicto en esta parte del mundo, y generan pugnas entre las clases dominantes y las clases dominadas, que han impulsado en América Latina importantes procesos revolucionarios desde la época de la conquista, en defensa de la solidaridad colectiva, hecho que se produce en medio de las contradicciones de clase, y de las

voracidades externas e internas por generar un sistema de opresión clasista propio del espíritu señorial y del lucro.

Por ello, es ineludible el repaso a la memoria histórica de una región avasallada y como decía Roberto Mesa, jamás descolonizada. No en balde, lo refiere este internacionalista, el Pacto Colonial introduce prácticas bastardas en los intercambios comerciales y no produce ningún tipo de estratificación social; todo lo que hace es crear grupos oligárquicos de poder económico que desempeñan funciones de intermediarios (Mesa, 1974: Pág.99)

Una variable adicional con influencia en el tema aquí tratado ha sido el problema de la violencia, asunto muy bien resumido por el Profesor Cristóbal Kay al destacar, que la violencia rural ha sido endémica y persistente a lo largo de toda la historia de América Latina y probablemente su episodio más dramático y violento haya sido la conquista y colonización impuesta por los países ibéricos. El sistema agrario que surgió de esa colonización ha sido una fuente primordial de conflicto y violencia en las zonas rurales (Kay, 2001: Pág.106).

El problema no es nuevo, la emancipación se forma al calor de la propia cultura libertaria del hombre americano. Obviamente y según la tesis de Arciniegas, La Colonia tuvo en América su Edad Media; duró un siglo: el XVII. En el XVI se hizo la conquista: se produjo el choque brutal entre los europeos golosos y atrevidos y los indígenas que apenas salieron de la sorpresa para caer en la servidumbre. En el XVIII la dominación española llega a su período otoñal: entonces la colonia es y no es al mismo tiempo; los gérmenes de la emancipación empiezan a reventar y hay cierta inquietud que anuncia la muerte del imperio donde hubo un tiempo en el que el sol no se ponía (Arciniegas, 1990: Pág.330).

De allí que la imagen sobre la formación del nacionalismo latinoamericano es la de un proceso accidentado en el marco organizacional desigual, y en razón de ello la emancipación ha quedado inconclusa. Desde luego aquí se formaron diversas concepciones de imperialismo, y en consecuencia, dice Roberto Mesa, América latina en varios años recorría el camino entre el viejo colonialismo ibérico y el neocolonialismo capitalista europeo que le conduciría finalmente, hasta el imperialismo norteamericano. Y todo este proceso corruptor, en función de un mecanismo que disimularía, bajo la pseudo-independencia política, la más absoluta servidumbre económica (Mesa, 1974: Pág.106).

Es cierto también que la polarización entre un sistema opresivo e injusto, y una sociedad despojada de sus derechos elementales tiene además en la experiencia espléndida del país galo una anticipada iniciativa. “A partir de la Revolución Francesa (1789), el fenómeno de la reforma agraria ha estado sujeta a tres principales corrientes de pensamiento: el liberalismo, el socialismo, y el neo-reformismo, ocupando cada una de ellas un lugar muy diferente: en el primer caso aparece rechazado; en el segundo se asimila hasta convertirse en un instrumento fundamental para la lucha; en el último caso se presenta de manera atenuada” (Le Coz, 1976: Pp.28-29).

Varios de esos factores, por difusionismo cultural, se combinan en los itinerarios de las reformas agrarias hechas en países como Rusia a partir de 1917, tanto que para muchos estudiosos, en medio del análisis de un desarrollo planificado sería la prueba de la superioridad de un "modo de producción" socialista. Otras tendencias se manifiestan en China, Yugoslavia, Polonia, Japón, Italia, etc., en algunos casos con un sentido de autogestión y cooperación, o en otros de planificación centralizada.

Pero en esta parte del mundo, donde se cuenta un mosaico de naciones, según Irving Louis Horowitz, el concepto de América Latina se hizo plausible merced al surgimiento de la dominación colonial extranjera y de una historia de esa dominación que es común a la América del Sur y a la central (Horowitz, 1966:Pp.28)

En todo caso, un primer trazado de expectativas para intentar romper con esa dominación del campo, más allá de las rebeliones civiles, militares e independentistas prodigas en hazañas liberadoras, como la encabezada por nuestro Libertador Simón Bolívar en el siglo XIX, es el de la Revolución Mexicana (1910-1917). Evidentemente ello se produce a través de un esquema que no estuvo ideológicamente sustentado en el pensamiento marxista-leninista. De manera que la Revolución Mexicana, iniciada en el año 1910 al grito de ¡Tierra y Libertad!, se hizo desde las bases sociales. En consecuencia, este proceso es un modelo de referencia que inspira a una parte importante de los movimientos de liberación del pueblo en América Latina, e influyen en forma progresiva en sus programas políticos, sobre todo cuando se explica la inculcable problemática social del campesinado. Como se sabe, este levantamiento interpretó las demandas sociales en el sentimiento campesino contra las injusticias, la esclavitud y las miserables formas de imposición dominante, expresadas en el capitalismo extranjero.

Aquella misma insurrección mexicana sobresale por haber sacudido unas estructuras oligárquicas complejas de miseria y explotación, guiadas por las clases dominantes en el país azteca. No obstante a aquel proceso se le considera como el primer movimiento popular, democrático, antiimperialista y antifeudal realizado en el subcontinente latinoamericano. Esta es en definitiva una importante corriente turbulenta de liberación que los mexicanos promovieron bajo el liderazgo de Emiliano Zapata Salazar frente a

las estructuras opresoras, derivadas del poderío del General Porfirio Díaz, primero, y después contra Victoriano Huerta.

Ahora bien, la revuelta de los campesinos mexicanos, según la apreciación de Paolo Groppo, fue asimismo la reacción de una población esclavizada contra los daños causados por el sistema de plantaciones creado en beneficio de la dictadura o del capitalismo extranjero: fue, pues, una reacción espontánea de un proletariado envilecido y de un sentimiento nacional de humillación (Véase Groppo, 1997).

Desde luego, bajo el manto de esta efervescencia popular nace asimismo la Constitución promulgada en 1917, en la ciudad mexicana de Querétaro, cuyo contenido incluye varios temas agrarios, entre los cuales estaban los expresados en el famoso *Plan de Ayala*, decretado por los zapatistas. Sus políticas son consideradas entre expertos y analistas sociopolíticos del tema agrario latinoamericano en niveles respetables, básicamente por los cambios introducidos en toda la estructura productiva agraria mundial.

En un balance ponderado y al considerar el éxito de esta reforma agraria, Eduardo Galeano agrega, cómo se proponía destruir de raíz y para siempre el injusto monopolio de la tierra, para formar un Estado social que garantice plenamente el derecho natural que cada hombre tiene sobre la extensión de tierra necesaria a su propia subsistencia y a la de su familia (Galeano, 1982:Pág.199).

Asimismo y al paso del tiempo, bajo el llamado efecto “bola de nieve” el ejemplo del mencionado movimiento emancipador centroamericano se difundió por toda América Latina y la noción de la Reforma Agraria gestada allí fue adoptada de hecho por los sectores sociales avanzados, quienes

pretendían llevar a sus propios países los lineamientos ideológicos, a los fines de crear modelos productivos más modernos, equitativos y justos.

Como contrapartida, las clases poseedoras y partidarias del *estatus quo* iniciaron una campaña de satanización del reparto de la tierra, arguyendo que se trataba de una intromisión del comunismo internacional que ponía en peligro la "libertad" y la existencia de la propiedad privada¹.

Más tardíamente los efectos de esa tendencia revolucionaria encontraron seguidores en pequeños movimientos de liberación social y de corte nacionalista, que darían lugar incluso a la formación de partidos políticos de tendencia izquierdista, como los de El Salvador (1932), Guatemala (1952) y Bolivia (1953), organizaciones políticas aglutinantes de seguidores para la revuelta adelantada por un campesinado insurrecto y movilizado ante el poder latifundista en América Latina. De cualquier manera la reforma agraria, como estrategia de cambio y de transformación del campo, se convertía en un icono para tratar de modificar las carencias de sectores sociales mayoritarios, y hacer valer sus intereses frente a una fracción económicamente poderosa y excluyente, como la oligárquica y la latifundista.

Entre quienes defendieron esta idea de cambio están Víctor Paz Estensoro (Bolivia), Jacobo Arbenz Guzmán (Guatemala), Augusto César Sandino (Nicaragua) y Hugo Blanco (Perú), por solo hacer mención a algunos de los más efusivos defensores del sector agrario. Asimismo están quienes desde posiciones de compromiso intelectual han hecho lo suyo, como por ejemplo José Vasconcelos, Domingo Faustino Sarmiento, Víctor Raúl Hay de la Torre, José Carlos Mariátegui etc.

Desde otra óptica vale la pena referirse al papel desarrollado en esta materia por la Revolución Cubana (1959), régimen político declarado

¹ Fuente: <http://veneno.com/1997/v-1/fran-01.html>

socialista en 1961, y que también trata de hacer realidad la utopía transformadora en los espacios urbanos, rurales, educativos, sanitarios, otorgándose al tema agrícola una relevancia significativa bajo los postulados del marxismo leninismo. En este caso se pueden admitir ciertos fracasos propios de toda empresa humana, pero no cabe la menor duda, que la reforma agraria emprendida en Cuba aportó soluciones a una sociedad en crisis, y además con un bloqueo económico. Las alternativas se deben en buena parte al liderazgo y a la entrega militante del Che Guevara, “quien decidió un cambio táctico: sacrificar la oligarquía de los grandes propietarios para poder disminuir tensiones agrarias y evitar que las sublevaciones populares no fueran el inicio de movimientos de mayor amplitud” (Le Coz, 1976: Pág.35).

Lógicamente esta situación despertó polémicas que hicieron muy difícil luchar contra la corriente capitalista norteamericana y la alta burguesía cubana, sobreviniendo un bloqueo económico que valorado en términos éticos constituye una injusticia, pero en términos objetivos sirvió para el avance revolucionario y el aprendizaje de nuevas vías de transformación social. En este sentido: “Las ideas del Che sobre la construcción del socialismo se pusieron a prueba en el peor de los escenarios posibles: en un país subdesarrollado; bloqueado económica, comercial y financieramente por el país más poderoso del planeta, con el cual, además, tenía en 1959 el 72% de sus exportaciones e importaciones; con escasez de técnicos, agravada por la política estadounidense de ofrecerles a estos, altos puestos en los Estados Unidos con el fin de dejar a Cuba sin el personal calificado necesario para dirigir la economía –por ejemplo, la mayoría de los administradores y dirigentes técnicos de las fábricas de azúcar, la principal industria del país, emigraron a Estados Unidos y a otros países de Centroamérica, donde los norteamericanos les nombraron al frente de las fabricas-, y en el instante en que se iniciaba el comercio con los países del

campo socialista, en los que muchas materias primas tenían medidas, nombres y calidades diferentes a las que Cuba importaba de Estados Unidos, o simplemente no la tenían” (Tablada,2001:Pp.19-20).

Las peculiaridades históricas mencionadas describen el grado tan alto sobre el cual la moral del liderazgo revolucionario de la sociedad cubana sobrellevó las adversidad producto de las agresiones externas, en medio de una cruzada que hoy es vivo ejemplo de entereza superación, liberación, y sobre todo de inspiración para la construcción de un modelo de sociedad solidaria, y que de manera altruista exporta sus experiencias sociales a otros países del subcontinente latinoamericano, como a Venezuela². Son también los tiempos de la Alianza para el Progreso, estrategia lanzada por los Estados Unidos como reacción para contrarrestar los efectos revolucionarios de la tendencia socialista de la revolución que se difunde por América Latina.

Siendo así, y cualquiera sea la valoración que se haga, la revolución agraria en Cuba “en realidad fue un verdadero icono, en el sentido de haber estremecido la estructura agraria de diferentes países de la región, por lo que significaban las acciones radicales que se estaban diseñando y ejecutando (Soto, 2006: Tomo II, Pág. 131).

Otro aspecto clave en este balance latinoamericano es la Reunión de Punta del Este (Uruguay), en cuyos debates la ideología socialista encuentra gran acogida. Allí se promulga la “Carta de Punta del Este” 1960), documento considerado de innovación para la época, en cuanto se proponía

² Un dato interesante a partir de aquel momento estelar de las revoluciones en América Latina, es el inicio en los estudios sociológicos y de la investigación sistemática sobre los problemas agrarios en la región. Pero también de los organismos y las reuniones internacionales (Carta de Bogotá,1960; Carta de Punta del Este,1961, etc.) surgen puntualizaciones referidas a la distribución defectuosa de la propiedad, y se empieza a hablar con mayor insistencia de la reforma agraria y el desarrollo agrícola, se crean nuevos organismos de investigación en el área, y se promueven por vez primera los proyectos legislativos de reforma agraria en casi todos los países de América Latina (Véase Martínez Ríos,1970: Pp.86-87).

“impulsar programas de reforma agraria integral orientados a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia de la tierra, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que la tierra constituya para el hombre que la trabaja en base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad”(Carta Citada en Barraclough y Collarte,1972: Pág.10).

II.3.- Determinantes sociopolíticos

Entre los problemas arduos de la sociedad democrática está el de cómo resolver las continuas discrepancias entre economía y sociedad, en medio de lo cual están las crisis políticas que ello genera. Bajo esa realidad el análisis histórico de la política agraria ha tendido diferentes significados en el contexto social, por lo que la discusión de la problemática se debe considerar en atención a dos marcos de adecuación de las estructuras sociales.

Por una parte a nivel macro político se observan la inserción de la política agrícola en las proposiciones teóricas de la economía política y el desarrollo del poder en diferentes espacios y contextos. Por la otra está el nivel micro político circunscrito a la política agrícola en medio de condiciones específicas de cada país, por ejemplo en Venezuela existe una dirección gubernamental impresa por cada gestión en particular, con sus respectivos atributos de rendimiento, logros, resultados, etc.

Como dato adicional, en medio del proceso de transformación que define un cambio de roles en las estructuras sociales se valora el papel del llamado “Estado de Bienestar”, que ha permitido formalizar las respuestas a las necesidades básicas de alimentación, en razón de enfrentar con parámetros institucionales de carácter público las contingencias de primera

necesidad, institucionalizando derechos sociales y garantizando formalmente su cumplimiento.

En muchos país latinoamericanos se ha venido desarrollando desde la década de los años sesenta un debate amplio y fructífero en las ciencias sociales, acerca de las formas de dependencia y del intercambio desigual, discusión matizada en algunos casos por el fulgor académico, y en otros por posiciones políticas militantes, pero ambos puntos de vista han permitido generar conclusiones o comentarios importantes, y donde aparece como fuerza impulsora un espectro revolucionario resultante de las luchas sociales, que cuentan con un significado particular y rasgos específicos expresados en cada uno de nuestros países, dando lugar a un reacomodo de las estructuras sociales y del aparato político en el poder, y lo más importante, a la gestión pública de reformas agrarias, como se puede captar en las tendencias que defienden una mayor igualdad social.

A ello cabe añadir, dentro de la orientación socialista de las reformas, la idea de que “el objetivo es la realización de la armonía social, donde se consideran ante todo los principios particulares de la participación en una obra colectiva y la búsqueda de la igualdad de categoría de los trabajadores” (Le Coz,1976: Pág.290) .

Como se puede observar entonces, América Latina ha sido un laboratorio para la discusión sobre las reformas agrícolas; pero aun así y con todas las revoluciones reivindicadoras de este derecho, persisten problemas de larga espera por operadores políticos que impulsen el verdadero sentido democrático de estas propuestas.

Desde otro plano de los acontecimientos, y dado el carácter neoliberal que adquirió el capitalismo latinoamericano, sobre el cual se apoyaron las democracias representativas en la década de los años ochenta, del Siglo XX, se mencionan las políticas dirigidas por el llamado “Consenso de

Washington”, que a través, de un recetario inducido por los órganos multilaterales, defensores del capitalismo neoliberal, profundizaron el atraso de la economía social, sometiéndose las instituciones del Estado y al pueblo a una relación desfavorable y desigual, donde figuran las llamadas “clases subalternas”, y los campesinos, principal soporte de la producción agroalimentaria.

Aquel sistema excluyente, como lo refiere una analista latinoamericana, se caracteriza por el predominio del capital financiero sobre el capital productivo, la orientación de la producción de punta hacia la exportación, el establecimiento de bajos salarios y bajos costos de las materias primas agropecuarias, una fuerte concentración y centralización del capital, combinación de formas flexibles de explotación con sobreexplotación de la fuerza de trabajo, una distribución regresiva del ingreso, el aumento del grado de monopolio, una elevada cuota de explotación y mecanismos autoritarios de poder con fachadas democráticas (Rubio, 2001: Pág.55) .

Esto significa sin lugar a dudas la presencia de un esquema de dominación, destinado a sobredimensionar las medidas del crecimiento económico, y por lo mismo la acumulación del capital entre pequeños grupos, pero a la vez una forma de separación clasista y una reducción de las posibilidades de supervivencia del sector social agrícola. Un punto central en la discusión del tema, según Rolando Franco, está además vinculado al hecho de que, el proceso de globalización también pone en jaque a las instituciones y organizaciones. El Estado es superado cuando trata de adaptarse a la nueva situación, lesiona los intereses sectoriales que hasta entonces protegía, con lo cual se enajena el respaldo de los grupos afectados que tienen voz e influyen de manera especial en el estado de ánimo de la opinión pública (Franco,2000:Pág.67).

No obstante, las consecuencias de este anclaje capitalista, que en las relaciones sociales tiene efectos negativos, van desde la especulación, el desempleo, y la separación de los productores rurales de los circuitos económicos internos y externos, hasta los diferenciales esquemas de costos y beneficios que amplían la brecha entre ricos y pobres, debilitando los niveles de confianza en las propias capacidades nacionales, aun cuando es justo reconocerlo América Latina cuenta con el potencial natural y humano a través del cual se podrían superar buena parte de las deficiencias agro productivas y de alimentación, observadas en muchos de nuestros países.

www.bdigital.ula.ve

CAPITULO III

Ensayos de intervención
www.bdigital.ula.ve

CAPITULO III

III.1.- Experiencias inconclusas y expectativas frustradas del sistema agrario venezolano.

Es menester destacar aquí, como bien lo subraya Ramoneda, que no obstante la democracia haber triunfado, su alma política –la política- continúa fallando. No sólo porque sus resultados en el campo social y de defensa de derechos civiles y libertades públicas exhiben aún muchos saldos en rojo, sino porque claudica frecuentemente frente a los embates siempre contundentes del poder económico (Ramoneda, 1999).

Sin pareceres deterministas se han destacado entonces una serie de fenómenos negativos en las estructuras productivas agrarias. A título ilustrativo, y en un bosquejo general hecho por el investigador Ugo Pipitone, se describe como sigue esta frágil realidad. El atraso social y productivo de la agricultura recorre el cuerpo de las naciones latinoamericanas como una falla geológica sobre la cual se han construido instituciones fatalmente frágiles. Las tareas incumplidas permanecen como un fondo de fallas sistémicas que impiden a lo nuevo desplegar sus potencialidades positivas. Una vieja enfermedad que contagia lo nuevo reclamándole, silenciosa o estruendosamente, sus problemas irresueltos. Una enfermedad que no impide lo nuevo, simplemente lo deforma. En una palabra: el subdesarrollo (Pipitone, 2001:Pág.84).

A contracorriente, y para entender parte de la dinámica de los cambios tendientes al desarrollo es necesario consolidar los objetivos de formación de una conciencia colectiva sobre el papel de la sociedad en la estructura de poder en Venezuela, de modo particular en cuanto al problema de la tenencia de la tierra, su manejo colectivo, la productividad y el principio de la

igualdad. Pero de hecho, es necesario admitir que la política agrícola venezolana tiene unos antecedentes no muy bien definidos, y la experiencia nacional es variable frente a otros casos latinoamericanos, pero tal vez una de sus fuerzas impulsoras ha sido la de la lucha contra el atraso. Aunque frente a ello surge en las expectativas un proceso de desarrollo, en medio de condiciones débiles y en las cuales las masas sociales van adquiriendo conciencia de su sentido de pertenencia al campo, pidiendo organizarse para hacer valer sus demandas ante el Estado y variar la relación frente a las clases dominantes, en este caso conformada por la llamada “burguesía agraria”.

De manera puntual, en los antecedentes del problema agrario en Venezuela pesan una herencia colonial y unas características de poder caudillista y latifundista, que han influido en la estructura sociopolítica, retardando el paso del subdesarrollo al desarrollo agrario, y promoviendo una idea difusa de unidad nacional. De hecho y según Villegas, la unidad nacional fue la conciliación de varios intereses oligárquicos, representados por los partidos liberales y conservadores, los de los latifundistas, que se afiliaban a ambos partidos cuando se encontraban cerca de los focos políticos y los intereses de los capitales extranjeros que venían a llenar el vacío dejado por el monopolio económico español (Villegas, 1972: Pág.37) .

Por otra parte, al acercarse al panorama histórico de la formación de la propiedad territorial, Federico Brito Figueroa, con su conocimiento admirable sobre el tema de la producción agrícola, refiere que “En Venezuela el latifundio y el campesinado se forman en el período colonial, en el seno de la conquista realizada violentamente por el Estado Metropolitano español en el Continente Americano. La tierra, condición natural de la producción, fue incorporada al dominio privado mediante el sistema derivado de las

capitulaciones, repartos, mercedes, ocupación y composición” (1981: Pág.265).

A partir de entonces, ocupación, esclavismo, monopolio y explotación de la tierra se van a convertir en ejes claves del problema agrario en Venezuela, explicables a través de las continuas rebeliones y conflictos entre grupos sociales, que recorren nuestra jalonada historia durante el Siglo XIX como reacción civil ante una forma de poder derivado de la incorporación a los dominios latifundistas“, como las de las tierras comunales indígenas, de las tierras baldías nacionales y municipales y de la expropiación de los medianos y pequeños productores rurales”(Brito Figueroa, 1981,p.270). La realidad social del latifundio como base de la economía agraria lleva implícito así un sistema de opresión y explotación social.

Obviamente no se puede esperar la promoción de unas políticas equitativas para el área Social agrícola, en medio de un país desarticulado, atravesado por la violencia, sumiso ante las montoneras, con gobiernos despóticos pero a la vez carentes de autoridad nacional en el sentido moderno del término, como los del Siglo XIX.

Lógicamente, “En el siglo XIX, la falta de cohesión de un pueblo campesino, hundido en la miseria y la ignorancia, impidió que surgiese un movimiento revolucionario popular, diferenciado de los planeamientos puramente formalistas de la oligarquía liberal. Apenas la corriente encabezada por Ezequiel Zamora durante la Guerra Federal se aproximó a un verdadero proyecto revolucionario-democrático, pero la muerte de este líder popular impidió su pleno desarrollo” (Boersner, 1988:Pág.24).

En todo caso, ni la Independencia, menos las revoluciones posteriores eliminaron las contradicciones derivadas del sistema injusto de la apropiación

y distribución de la tierra, la función social del trabajo, y la cobertura de las necesidades de subsistencia, y menos se llegó a la autosuficiencia en la producción agrícola nacional. Ello ha conducido a las crisis sociales determinadas por un esquema contradictorio en lo económico, social, demográfico, organizativo y cultural, que a la vez de injusto, y atrasado en los modos de producción, está determinando por relaciones productivas sin plataforma democrática.

Ahora bien, el siglo XX en Venezuela se inicia en medio de un agitado movimiento de caudillos que todavía mantuvieron una concepción cerrada de las libertades sociales, en medio de unas estructuras de poder donde resulta muy difícil diferenciar entre el patrimonio público, los intereses privados, y el uso equitativo de la propiedad agrícola. También está ausente una concepción moderna del significado del Estado con sus elementos básicos, sus redes de articulación, y la interdependencia de esta estructura de poder con formas democráticas de asociación, participación y de coordinación constitucional, herencias de las grandes revoluciones mundiales.

Con la reformulación del llamado proyecto nacional venezolano se trata de dar los pasos iniciales para revertir la situación, pero justo es reconocerlo, es una versión oficializada y con una dimensión social de escasa o ninguna trascendencia práctica, como la realizada en el año 1924 durante el régimen del General Juan Vicente Gómez, quien asomó, aunque en forma contradictoria con sus propias prácticas gubernamentales y su sistema de mando férreo, la idea de un plan de carácter agrarista, dentro del cual “proponía la reforma de la ley de tierras, Baldías y de cualquier otra que pueda tener relación con el bien, para introducir en ellas disposiciones tendientes a conceder fácil, inmediata y gratuitamente, un lote de tierra en propiedad innegable a cada venezolano que carezca de bienes y lo abonen

condiciones morales para merecer este beneficio. La medida además habría de ser justa y oportuna” (Oropeza, 1944: Pág.119).

Terminada la dictadura y el silencio del estatus oficial del General Gómez, y abiertos algunos canales de legalidad y sobre la base de los cambios en el constitucionalismo en 1936, cobran auge los estudios agraristas en Venezuela. Ello ocurre en paralelo a la promoción y aspiración de una visión y formas de vida diferentes, aunque continúa la supremacía de la concepción burguesa de la propiedad de la tierra.

En el alba de las libertades obtenidas en 1936, hay una preocupación, no solo acerca de lo que habrá de ser el modelo desarrollo en Venezuela, sino en reconocer la existencia del problema latifundista y las deficiencias del sector agrario como obstáculos a las estrategias nacionales de modernización. De cara a las soluciones en esta materia surge una experiencia importante. Se empieza el trabajo a través del nuevo “Ministerio de Agricultura y Cría”. Además, son los tiempos, según Luis Ricardo Dávila, del gobierno de López Contreras quien desarrolla una política agraria de carácter intervencionista donde la acción estatal está dirigida a: 1) proteger la agricultura y la cría mediante la exoneración de impuestos a la importación de materiales necesarios, concesión de subsidios a la producción y materias primas de exportación; 2) colonización y reparto de tierras baldías de propiedad estatal; 3) créditos para satisfacer las necesidades financieras de los agricultores y ganaderos (Dávila, 1988: Pp..254-255. Referido por Naudy Suárez Figueroa).

Sin embargo, la realidad pareció ser otra, pues los intereses de muchos personeros del gobierno y pequeños círculos agrarios de terratenientes, según Dávila, no permitía ir más allá del incentivo y la protección estatal, a pesar de las disposiciones incluidas en la Constitución de 1936 sobre la

expropiación como causa de utilidad pública y social, y sobre la conservación y difusión de la pequeña y mediana propiedad rural; disposiciones éstas que de suyo contenían los medios necesarios para una tal transformación (Dávila, 1988: Pág.256-257).

Entre tanto, la sociedad venezolana continuaba sumergida en las carencias, la resignación y el pesimismo, “mientras que las haciendas y los hatos se entregan a la rutina de capataces ignorantes, las mejores tierras por su ubicación y fertilidad, van a alimentar la ansia latifundista, jamás satisfecha de los personeros del régimen (Oropeza, 1944: Pág.130). Lógicamente la situación no podía ser diferente en una sociedad incapaz de levantar su voz, al verse limitada por la represión, sin tomar posición aunque fuera para distinguirse en términos de sociedad civil consciente de sus demandas, y sin asumir posiciones reflexivas ante el gobierno. Se trataba de una forma muy particular de alineación, no ante una ideología dominante, sino ante una férrea, opresiva e infalible forma de mando.

Para conocimiento del tema, es fundamental y relevante observar en un conjunto de datos y de cifras reveladoras la situación económica y social del agro venezolano en el quinquenio postgomecista. Helos aquí:

- 1) El 4,4% de los propietarios rurales controla 2.705.888 hectáreas
- 2) El 95,6% de los propietarios rurales controla 731.795 hectáreas.
- 3) El 10,6% del campesinado posee tierras en propiedad.
- 4) El 89,4% del campesinado carece de tierras y para renta en el trabajo, especie y circunstancialmente en dinero.
- 5) La población total del país ascendía a 3.850.771 habitantes y la rural a 2.272.786 personas (Referido por Luis Troconis Guerrero, en Brito Figueroa, 1981: Pág.278).

Asimismo, Salvador de la Plaza, en un trabajo pionero acerca de la problemática en el país, y en el momento de la definición institucional postgomecista, expone en categórica conclusión que, “las contradicciones inherentes al régimen capitalista, las contradicciones entre la ciudad y el campo, se han agudizado en perjuicio de la mayoría de la población, por la supervivencia de las formas de acaparamiento latifundista de la tierra y por las formas de producción correspondientes” (De la Plaza, 1959:Pág.24).

Desde otra óptica, los intentos de integración a la economía internacional y el acceso a determinadas condiciones de modernización del Estado son hechos tardíos. Sin embargo, “en 1936, la creación del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) dio una señal clara de un cambio de las políticas públicas hacia la agricultura: saliendo de su histórica pasividad al respecto. El Estado tomó directamente las riendas de la modernización agrícola” (Delahaye, 2001: Pág.71).

Ahora bien, como paradigma de gestión es de mencionar a un importante ideólogo en esta lucha, como es el caso de Alberto Adriani a quien, a pesar de su corta vida, se le reconoce de su gran “Labor Venezolanista”, al propiciar la llamada “siembra del petróleo”, a través de la agricultura y el desarrollo del campo. En esta lucha por mejorar la situación antes descrita, Adrianni ayuda a conformar todo un marco regulatorio por primera vez destinado a dar un piso de legalidad al sector agrícola, De forma particular, Señala Delahaye, la promulgación de textos legislativos orientados a la implementación de la mercantilización de la tierra (el inicio de la realización del catastro se dispuso en la ley de tierras baldías y ejidas de 1936), y también de la fuerza de trabajo (la ley del trabajo de 1936 determinó las condiciones del pago del salario) así como del capital (ley de creación del Banco Central de Venezuela, en 1940, estableció las modalidades de la fijación de la tasa de interés por este último). De tal manera que los años

1936-1940 marcaron claramente el inicio de la transición: correspondieron a la implementación legislativa de la regulación por el Estado del mercado de los factores de producción (Delahaye, 2001: P.76).

No obstante, un dato preocupante llama la atención, es decir que si bien desde el año 1936 se impulsaron políticas públicas para intentar cambiar los patrones de producción y propiedad agrícola, hasta 1958 “la agricultura para la exportación perdió su importancia en el comercio exterior (el conjunto café – cacao no llegó nunca más a representar 5% de del valor de las exportaciones); sin embargo siguió siendo relevante como producción campesina” (Delahaye, 2001: Pág.76).

Por otra parte, en forma dispersa se admiten los intentos de cambio que llevan consigo una codificación propicia para un plan agrarista, según el cual, “la nación favorecerá la conservación y difusión de la pequeña y mediana propiedad rural; y podrá, mediante los trámites legales y previa indemnización, expropiar tierras no explotadas del dominio privado, para dividir las o para enajenarlas en las condiciones que fije la ley” (Oropeza, 1944: Pág.134).

Pero al paso de tiempo, tratándose de romper con el pasado, los grupos de poder afinan las condiciones de acceso a determinados bienes, con el agravante de generar otras formas de conflicto, en medio de lo cual están los nuevos propietarios de grandes extensiones de tierra, el acelerado cambio de las condiciones de vida de una sociedad que de ser eminentemente rural se hace notablemente urbana. Ello genera unos mecanismos de dominio de tierras, transculturación, manipulación y despliegue de recursos que van a terminar en la formación y consolidación de nuevos grupos oligárquicos interesados en introducir formas de dominación al conformar clases

capitalistas agrarias, limitantes del carácter social y colectivo de la propiedad de la tierra.

Más adelante y bajo diferentes criterios se aprueba la “Ley de Reforma Agraria” (13 de septiembre de 1945), surgida de la convocatoria a diferentes tendencias políticas a deliberar sobre las condiciones de distribución de las tierras. Sin embargo esta será una herramienta legal de muy corta vida, además de haber sido vetada en la Cámara Alta del extinto Congreso Nacional, por afectar a los latifundistas, a quienes muchos Senadores debían favores, o sentían ser representantes de sus intereses. Esta Ley, luego de ser invalidada por los sucesivos gobiernos, es reformada en el año 1948, y para dar mayor sustento a la propuesta se funda el “Instituto Agrario Nacional”.

Adicionalmente en el año 1949 se promulga el Estatuto Agrario, con la finalidad de iniciar una política de reformas en el sistema de las relaciones semi-feudales de explotación latifundista (Soto, 2006: Tomo II, Pág. 7). No obstante en la trayectoria seguida desde los años cuarenta, hasta los años sesenta del siglo XX se oficializa la reforma agraria, pero se trata de una reforma agraria poco compatible a las condiciones explicadas por Di Tella, en lo concerniente a las posibilidades de: “un proceso de reorientación del poder económico, político y social, que se lleva a cabo en zonas rurales, esencialmente a través de programas estatales de redistribución de tierras, aguas, crédito, capacitación y cooperación técnica, en beneficio de trabajadores rurales y pequeños agricultores. Por lo general sus objetivos consisten en elevar los niveles de empleo, ingreso, condiciones de trabajo y de vida de grupos sociales con escaso o nulo control de recursos y decisiones; asimismo, en aumentar los niveles de productividad con recursos subutilizados” (Di Tella, 1989: Pág.507).

De igual importancia es el factor petrolero que actúa como un agente potencialmente favorable a la aventura de la atracción poblacional hacia los centros urbanos. Así los campos dejan de cautivar de modo efectivo a aquellos sectores dispuestos a vivir en las ciudades, quienes en muchos casos se hacen marginales, llenando inmensos cinturones de miseria y de pobreza, pero quienes no están dispuestos a regresar a las condiciones conmovedoras del campo.

Además en Venezuela con la reforma agraria se reparten algunas tierras a los campesinos y se les otorgan créditos, pero la contrapartida es un esquema de repartos y beneficios tremendamente injustos, errados en sus procedimientos, sin seguimiento adecuado y que a la larga resultó alineado con formas económicas improductivas en materia agrícola, y opresoras en cuanto al lugar en el esquema de dominio de la oligarquía latifundista.

Para ser justos se supone entonces que el interés debe estar orientado hacia el equilibrio, evitando la rigidez, las inercias y las ineptitudes de una economía asociada exclusivamente en la competencia, al juego de las fuerzas libres de la economía de mercado, y a los monopolios que impactan negativamente en el trabajo agrario.

Ahora bien, en forma basta resumida se ha dicho que la política de reforma agraria entre los años 1936 y 1958, se caracterizó por la expansión de la frontera agrícola con el establecimiento de colonias, dejando la estructura agraria sin mayores cambios (Soto, 2006: Tomo II, Pág. 7). De hecho la Ley de la Reforma Agraria promulgada el 5 de Marzo del año 1960, es un instrumento que busca justificar el carácter político, de la corrección de la injusticia social y económica que pesaba sobre nuestros campesinos, a consecuencia de la estructura latifundista, prevaleciente en el campo desde el período colonial. Como antecedentes legales de esta medida se mencionan la “Ley de Reforma Agraria” impulsada durante el gobierno del

Presidente Isaías Medina Angarita, que no pudo aplicarse debido al Golpe Militar del 18 de octubre del año 1945; y la “Ley de Reforma Agraria” durante la gestión del Presidente Rómulo Gallegos, que tuvo igualmente vigencia efímera debido al golpe del 24 de noviembre de 1948 que derrocó al gobierno³.

Ahora bien y como dato adicional algunas cifras provenientes del viejo Instituto Agrario Nacional (IAN) señalaban que durante su vigencia repartieron 11,5 millones de hectáreas entre 230.000 familias, lo cual representa un promedio de 44 hectáreas por familia. Esto significó que el 72% de las tierras entregadas por el IAN en sus 40 años de historia, no favoreció a los pequeños agricultores⁴.

A contra corriente, el sentido de comunidad rural debería dar lugar entonces a una forma de asociación bajo nuevos esquemas de carácter cultural, económico, urbano, y a ciertas formas de pensamiento progresistas, influidos por corrientes ideológicas emergentes en otras partes del mundo, que se abren paso en medio de la construcción de formas de convivencia y socialización política, e impactan en buena parte de la estructura social excluida en el país.

Otra forma de ver las cosas radica en el hecho de que para la visión de la democracia venezolana el interés sobre condiciones de estabilidad política, y la necesidad de inducir exclusivamente hacia la participación electoral, contribuyeron a reforzar un modelo atípico de desarrollo en función

³ Véase la página on line: <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZkuykkyubpClbIrH.php>, P.11

⁴ Véase la página on line: <http://WWW.noticias.com/articulo/18-01-2006/arelis-guaramato-avella/Venezuela-ley-tierras-vs-ley-reforma-agraria-51m7.html>

de la economía de las ciudades y los centros urbanos de amplia base poblacional.

De esta manera, la actuación concreta del sistema político redujo la participación al sólo hecho electoral, lo cual a la larga demostró la ineficiencia para resolver los problemas sociales de la gestión pública, como los relativos a la pobreza y al acceso a bienes y servicios, actitud asumida por los partidos hegemónicos del sistema puntofijista en una indiferencia traducida luego en términos de legitimidad decadente para los mismos actores políticos, quienes se vieron desplazados a la larga por reducir la democracia a sus propios intereses.

III.2.- Concepción actual de la problemática, otras formas de recorrer la democracia

Gran parte de los referentes de la ingobernabilidad del sistema político venezolano está en las deficiencias de la gestión institucional, que han reducido las posibilidades de construir asociaciones con carácter participativo, y redes sociales con carácter igualitario. En este sentido, a lo largo del proceso político venezolano, las reformas agrarias han sido anuladas por condiciones inversas a las mismas promesas democráticas, y en el mejor de los casos los resultados han sido precarios en muchos de los cambios para seguir el paso hacia un eventual proceso de desarrollo integral.

Desde otra perspectiva, además de existir un vacío en la continuidad de la política agraria, pesa una herencia oligárquica colonizadora de todo intento de modificación en el *estatus quo*. De acuerdo con estudios bien fundamentados se ha reconocido, por ejemplo, que la reforma agraria iniciada después del año 1958 propició la capitalización del latifundio, y por extensión el empobrecimiento de las masas campesinas. De hecho para

todos los gobiernos la solución no les parecía muy complicada, “el camino de las importaciones aparecía más fácil que impulsar un aumento de la productividad mediante la ayuda técnica para los sectores desatendidos de la agricultura y la iniciación de imprescindibles cambios estructurales en este campo” (Relenberg y otros, 1979:Pág.57).

Con base en este argumento se sugiere una exploración clara de las vías de respuesta acerca de cómo ha sido acometida la política agrícola en el pasado, cuáles son sus variaciones sustantivas y qué influencia tiene sobre la calidad de vida de la población.

Obviamente y a título ilustrativo hasta fines del siglo XX los resultados obtenidos en el manejo de la economía agraria implican la incorporación de señales de alerta acerca de fenómenos como la pobreza en el área rural, tema que poco ha persistido en las agendas de los gobiernos de la llamada Cuarta República, llegando a poner en duda la campaña del modelo distributivo del Estado y el sistema del bienestar propiciado por esta estructura interna de poder. Entre tanto, lo ideal habría sido conjugar el desarrollo del medio rural, la estructura poblacional, el equilibrio ambiental, y la producción equitativa para hacer realidad la calidad de vida de gran parte de los venezolanos, ello en afinidad con el llamado “Paradigma de la Sostenibilidad del Campo”, donde la distribución de la riqueza y la equidad deberían estar estrictamente relacionadas.

Sobre este punto se puede afirmar, que los actores gubernamentales de la democracia representativa y del Pacto de Punto Fijo (1958-1998), comparten un alto grado de responsabilidad en la indiferencia, la deshumanización, los desequilibrios que caracterizan la situación del agro venezolano y el consiguiente impacto precario en el nivel de vida de amplios estratos de la población venezolana.

Aunado a ello, el control de pequeños grupos de poder sobre el medio rural ha sido un emblema obstaculizante de los ensayos de transformación, o de cualquier iniciativa de convertir este sector en una estructura de producción más estable y próspera. Algunos indicadores económicos y sociales referidos a Venezuela por diferentes órganos de investigación, incluidos tanto los nacionales como los de interés bilateral, finalizado el siglo XX, mencionan el relativo al crecimiento del sector agrícola entre los más deprimidos, con un rendimiento insatisfactorio en cuanto a propiedad y equidad, formando perturbaciones en los niveles de pobreza, y constituyendo un alarmante síntoma de desconfianza para la seguridad alimentaria de la sociedad venezolana.

Ahora bien, en cifras generales del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y tierras se describe, que en Venezuela existen 11 millones 360 mil hectáreas de superficie agrícola, y 14 millones 716 mil hectáreas con vocación pecuaria, de las cuales muchas de ellas son subutilizadas, y la misión del Estado es su aprovechamiento al máximo. Sin embargo, otros datos derivados del censo agrícola realizado en el año 1998, elaborado por el actual Instituto Nacional de Estadísticas (INE), enuncian que el 5% de los propietarios agrícolas acaparan el 75% de las tierras. Señalan además que las fincas con 50 hectáreas o menos ocupan en total unas 3,2 millones de hectáreas, lo que significa que el 8,3 millones de hectáreas están en manos de personas no sujetas a la reforma agraria, y que menos del 30% de quienes recibieron tierras han podido legalizar sus títulos de propiedad o contar con algún documento legal que los respalde⁵.

Asimismo, la sociedad venezolana al mantener como base de apoyo la economía petrolera, la producción agrícola nacional ha contado poco en el

⁵ Véase la página on line: <http://WWW.noticias.com/articulo/18-01-2006/arelis-guaramato-avella/Venezuela-ley-tierras-vs-ley-reforma-agraria-51m7.html>

total de los alimentos de consumo humano producido en el país, además de tener una economía agrícola de base social atrasada y que sólo ha servido para agravar la crisis del sistema productivo. No obstante se supone que en vez de vincular el excedente petrolero a la producción de la tierra y fortalecer a los pequeños productores para ampliar las bases de la distribución, los gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana privilegiaron el poder de las clases con mayores posibilidades en el circuito de la economía capitalista y que muchas veces distorsionaron los fines específicos de la ayuda económica otorgada por el Estado a las iniciativas del campo, invirtiendo en sectores ajenos al indicado.

De igual forma, un balance general permite señalar la existencia de una marcada dependencia en la producción de bienes agropecuarios, y según lo revela Carlos Rangel, la estructura social del país acumula dificultades y frustraciones, el espíritu feudal sigue vigente, las formas de producción siguen siendo primitivas, los resultados decepcionantes. Las culpas pueden ser repartidas entre malos gobiernos, malos ministros en el área agrícola, la insuficiencia en las ayudas, de créditos, y de mercadeo de las cosechas (Véase Rangel, 1982:Pág.254).

Matizando este juicio nos encontramos entonces frente a limitantes y errores cometidos en medio de reformas agrarias, que carentes de impacto positivo, marginaron el sentido básico de la modernización del agro, manteniendo inalterado el esquema rentista importador, bajo una filosofía tendiente a dispersar las transferencias de tierras, recursos, propiedad, tecnología, y cualquier otro tipo de asistencia requerida, lo cual impide hablar de un verdadero cambio, bajo mecanismos de inclusión, atención y fortalecimiento a los estratos sociales del área rural, perdiéndose asimismo oportunidades valiosas de preparación en niveles superiores de organización para la productividad agrícola.

Ahora bien, desde hace varios años el desarrollo económico del campo venezolano ha tropezado también con las inconsistencias de los diferentes planes gubernamentales y de la nación. Como un hecho real hay tentativas con escasos logros significativos, y diversos balances muestran que la implementación de las políticas agrícolas han estado bien lejos de ser satisfactorias. En este sentido las carencias han dado lugar a expectativas frustradas y los aspectos sociales del campo no fueron pensados como estrategia política de avanzada.

Igualmente los cambios estructurales en la formulación e implementación de las políticas públicas agrícolas han sido poco coherentes con las dimensiones sociales esperadas. Directamente se pueden atribuir algunas fallas a los gobiernos como artífices de la política agrícola, y a sus órganos administrativos por burocratizar las expectativas y distorsionar los objetivos iniciales sobre el manejo de las tierras.

En este sentido, y tomando como referencia el aporte de Delahaye es necesario entender también que: la reforma agraria no modificó sustancialmente la estructura de tenencia de la tierra. No parece haberse producido algún fortalecimiento de la pequeña explotación; el abandono de su parcela por parte de los beneficiarios fue, por lo menos, del mismo orden de magnitud que el de las dotaciones. Por otra parte, el control de su patrimonio territorial por parte del Estado siguió siendo deficiente, el catastro rural a pesar de las medidas tomadas a partir de 1960, no alcanzó a abarcar todas las zonas agrícolas del país.

Además la orientación hacia una mayor mercantilización de la tierra fue escalando progresivamente. Por último se menciona, la forma casi clandestina de las dotaciones a los empresarios, y las divergencias entre el IAN y el Registro referidas a la inscripción de las transacciones sobre las

bienhechurías (Véase Delahaye, 2001: Pp.106-107) Siendo así, las políticas agrícolas han tenido la influencia de sectores heterogéneos, y la política económica aplicada al campo representa un elemento secundario y diferenciado si se le compara con el dispositivo petrolero nacional.

Ahora bien, aparte de que la reforma agraria no logró modificar la estructura de la tenencia de la tierra, el número de beneficiarios quedó sustancialmente inferior a lo indicado por las cifras oficiales. Sin embargo, y desde otro punto de vista, la superficie realmente dotada a los beneficiarios correspondía solamente a una fracción de la superficie total afectada por el Instituto Agrario Nacional (IAN). La diferencia podía tener dos causas, probablemente complementarias: una parte de los terrenos de IAN no resultaba explotable por la agricultura, y otra parte estaba ocupada informalmente por agricultores que no son campesinos beneficiados (Delahaye, 2001: Pp.97-98).

www.bdigital.ula.ve

Otros hechos pueden aportar revelaciones dramáticas, por ejemplo, en los años del auge neoliberal, la agricultura venezolana experimentó una profunda crisis, cuyas manifestaciones más visibles han sido la caída de la producción, el deterioro de la balanza comercial agrícola y el aumento de los precios de los alimentos por encima del promedio inflacionario, lo que agravó los problemas alimentarios y nutricionales del país (Véase Hernández y Martel, 1993: Pág.225).

Para romper los eslabones de esta cadena de problemas y emprender cambios en profundidad no se debe dudar en la importancia de liquidar ciertas prácticas que separan lo económico, lo cultural, lo ético, y lo democrático en la administración pública. Teniendo como referencia esta posibilidad, “El tipo de consolidación democrática y su relación con la extensión de la ciudadanía, basada en el funcionamiento efectivo de los

mecanismos de canalización de demandas colectivas, no podrá darse si no se resuelve la tensión entre un crecimiento económico incapaz de generar trabajo para todos y la marginación de millones de individuos” (Repetto, 1994: Pág.143).

De este modo una alternativa fundamental consiste en la articulación del proyecto de la Revolución Bolivariana con lo social. Ello conduce hacia un modo diferente de ver el problema, más cuando existe el desafío de las desigualdades económicas, que privaron a buena parte de la sociedad y al país durante décadas de las condiciones necesarias de acceso al disfrute de bienes alimenticios.

III.3.-Institucionalización de las nuevas formas de dirección de la política agrícola

Pocas veces la materia agraria se ha prestado a grandes polémicas como en el presente. De su relevancia se ha hablado, bien sea en circunstancias electorales, al momento de la definición de los programas nacionales, o como medidas de emergencia cuando las circunstancias de la expectativa económica de la periferia campesina así lo ameritan.

Desde hace varias décadas en las ciencias sociales en América Latina se viene señalando el lento desarrollo de la agricultura entre los puntos críticos para responder a las necesidades básicas de la población, y los indicadores muestran bajos niveles de la producción del campo, que muchas veces no alcanza para cubrir el consumo interno de la población en nuestros países.

En Venezuela también están develadas las grietas sociales por donde se han filtrado las contradicciones de clases, producto de las desigualdades,

el atraso, y el mal manejo del agro. De allí es posible deducir la urgencia de encarar tan precaria situación en un sistema agrario tan desigual y que genera conflictos permanentes. Para expertos en el área, como el ya mencionado Cristóbal Kay, un primer paso importante para encarar la violencia rural implica resolver la cuestión de la tierra, de manera que los campesinos pobres y desposeídos puedan acceder a tierras y recursos económicos suficientes para garantizarles un nivel de vida sostenible y una participación apropiada en la sociedad. Por otra parte, las estrategias de desarrollo y los procesos de modernización tienen que volverse incluyentes, lo cual es difícil de alcanzar dentro del contexto de la globalización que tiende a excluir a los pobres del campo (Kay,2001:Pág.119).

Siendo realistas nos encontramos frente a una situación difícil, y en medio de un escenario con posibilidades factibles para el desarrollo de una buena parte de nuestros países, y donde la estabilidad y el orden interno son asuntos esenciales que demandan nuevas formas de pensar estrategias coherentes, exigiendo además la solidaridad, la cooperación y la participación como motores esenciales de la marcha popular contra los intereses privados, que enrolados en el capitalismo vienen generando consecuencias de alto riesgo para el devenir de la humanidad.

De allí la tarea por redefinir el papel del Estado en la sociedad. Ello como reacción ante las insuficiencias del libre mercado, lo cual pasa por la búsqueda de mejores señales de supervivencia, empezando por la agricultura en condiciones propias del mundo que vivimos. A contracorriente y bajo la visión ideológica del socialismo democrático, por ejemplo, se vienen haciendo serias advertencias sobre tales limitaciones. Así lo evidencia Ana Ruiz Tagle cuando insiste en que, vivimos un período histórico ciertamente crítico, quizás de esos momentos de la historia en los que la constatación de las graves consecuencias del actual estado de cosas, como riesgo colectivo,

tiene que forzar el surgimiento de soluciones concretas y eficaces a problemas que se agravan aceleradamente con el paso del tiempo (Ruiz Tagle, 1996: Pág.26).

Ahora bien, los agentes de desarrollo, los decisores de la política pública y la propia sociedad como destinataria de la ayuda del Estado, están inmersos en Venezuela dentro de una nueva experiencia basada en un proyecto de desarrollo humano. Para ello se ha diseñado una agenda en respuesta al estilo tradicional sobre el cual se sustentó el retraso de muchos años en ese sector, con la esperanza de abrir y ampliar las oportunidades del pueblo venezolano, en consonancia con una relación justa de intereses democráticos, como los recogidos en el nuevo formato de la política institucional del país.

Sin embargo, los espacios de poder donde se mueven los servicios sociales agrarios siguen estando cargados de obstáculos burocráticos y de prácticas administrativas débiles. Los problemas también se cotejan en diversos indicadores como los del gasto público en nuestro país, que se ha incrementado buscando fortalecer los programas destinados a consolidar el desarrollo agrario, lo cual también significa la urgencia de modernizar la infraestructura en este sector.

Actualmente hay la necesidad de remarcar el sentido económico, social y participativo de la administración pública, bajo criterios éticos, empezando por la viabilidad funcional de las instituciones creadas por la ley, el control en la aplicación de la ley, de los criterios del uso de la tierra y los predios afectados, de los actores comprometidos, de los organismos responsables, y de los entes relacionados con el Estado, principal promotor del desarrollo agropecuario.

Como escenario alternativo entonces hay que superar limitaciones del orden informativo, la lentitud en los procedimientos, organizar y manejar mejor el adiestramiento de los recursos humanos, y superar las barreras culturales de la dependencia para no seguir modelos de desarrollo extraños a nuestras realidades específicas. Además se debe superar la pasividad social y el pretender que solo los agentes externos pueden apalancar democráticamente el desarrollo agrícola.

El dilema de fondo está, en todo caso, en priorizar el carácter nacional y la identidad propia de la política agrícola, hacer operativo el nuevo modelo de desarrollo destinado a sembrar el “petróleo en el campo”, y conferir viabilidad al sentido social y económico de las reformas políticas emprendidas por el gobierno revolucionario, cuya expresión en la participación exige de la intervención conjunta entre las instituciones del Estado y el rol protagónico activo del pueblo venezolano, sin ignorar la intervención de los particulares, llamados también a cumplir eficiente y responsablemente el acompañamiento en esta tarea.

Ahora bien, desde las elecciones del año 1998, en Venezuela se vienen desplegando importantes reformas sociales orientadas a promover las coberturas de las necesidades básicas. El factor agrícola simbolizado en la redefinición del papel del Estado en la economía y en el contexto rural, aparece descrito entre los cinco polos de equilibrio trazados inicialmente en el Plan Nacional de Desarrollo Simón Bolívar. La propuesta también incluye una dimensión ética, y dentro de ella la posibilidad de promover la seguridad alimentaria, sin descuidar el valor de la justicia social y la participación considerando factores primordiales a la hora de asumir responsabilidades. En el momento actual esta materia es tema esencial como se revela en la “Ley del Plan de la Patria”, que reivindica en sus grandes objetivos históricos la responsabilidad ineludible del gobierno y el pueblo en formar una política

agrícola homogénea, sólida e integral en su concepción, en sus objetivos y en sus resultados.

Resulta obvio entonces, y así lo recalca Pipitone, que ninguna democracia puede construirse sólidamente sobre la exclusión de grandes grupos sociales. Todo proceso de desarrollo es de integración social, o no lo es. El primer paso hacia la construcción de los tejidos sociales capaces de moverse en dirección de una creciente integración interna, es, justamente, la modernización de la agricultura y la activación de nuevas energías productivas en las economías locales. Fallar ahí es poner las condiciones para fallar sobre todo lo que sigue (Pipitone, 2001: Pág.82).

Otro aspecto significativo en el análisis de la pertinencia social de esta política agraria, está en promover, como se ha dicho, formas de desarrollo endógeno e integrado, para compensar las necesidades derivadas de la ausencia de estrategias de buena gestión pública para el sector agrícola. Por ello, la relevancia de esta política viene asociada substancialmente al problema de los excluidos debido a las condiciones perversas del mercado, de la liberalización de los productos, etc., que relegan la sociedad de los medios de inclusión y aumenta los intereses de los más poderosos, lo cual responde términos sociológicos al término estratificación de clases dominantes.

Ahora bien, no se olvide que en el neoliberalismo el mercado condiciona y asiste la reforma agraria, pero las políticas de tierras se ven cada vez más influenciadas por las llamadas “recetas”, de las instituciones multilaterales, cuyo papel se hizo más relevante debido a su importancia en el tratamiento de la deuda externa (Véase Delahaye,2001: Pág.128). A tono con ello y en el contexto venezolano en el Puntofijismo no se observa una clara y eficiente política agrícola. Sin embargo, y ante ello una de las críticas

internas ha sido la exigua continuidad estratégica de las condiciones reformistas de la política agrícola intentada y nunca lograda por el modelo de la política representativa.

Además y a través de la conducción neoliberal de la política agrícola se forja el carácter monopólico, así como grandes espacios vacíos dejados por la relación latifundista, que son cubiertos por la empresa capitalista agraria, constituyéndose en un grupo de poder y de privilegios (Véase Soto, 2006: Tomo II, Pág. 12). Las consecuencias han sido el incremento en la pobreza entre la población rural que traducida en cifras se estimaba antes del año 1998 en un 80%.

Frente a ello, las políticas públicas iniciadas en el año 1998, permiten abrir un marco de expectativas claro, en aras de recuperar el tiempo perdido. Así se proponen vías y procedimientos como por ejemplo: el Plan Integral de Producción y Desarrollo Agrícola Nacional, Plan de siembra, Plan de Desarrollo Rural Integral, Plan Nacional de Consumo de Alimentos, Plan de Expansión del Banco Agrícola de Venezuela, Plan de financiamiento especial y recursos propios, Plan de Requerimiento Financiero de Insumos Agrícolas, Plan de viabilidad agrícola a nivel nacional, Plan integral de construcción y mantenimiento de infraestructura rural nacional, Plan Nacional de Acuicultura, Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, Plan Nacional de producción de semillas, Plan Operativo Anual Institucional del MAT y sus Organismos Adscritos, Plan de acción para el aprovechamiento integral del recursos, etc.

No obstante, la dependencia agroalimentaria tradicionalmente ha sido un factor perverso para nuestra economía, y cuando el modelo liberal sentaba las reglas de juego el dominio de las empresas transnacionales, en alianza con los latifundistas nacionales, excluye a los pequeños productores

campesinos de las posibilidades por mejorar la situación. En espacios más extensos, “Los cambios en el contexto macroeconómico y en el modelo de desarrollo afectó significativamente al sector agropecuario regional. La política sectorial quedó subordinada a las necesidades de la política macroeconómica y las medidas de política a menudo fueron interpretadas como la puesta en práctica del programa global de desmontaje de las distorsiones surgidas en el pasado y no constituyeron políticas específicas para los sectores agropecuarios enmarcados en una nueva estrategia para su desarrollo”⁶.

La respuesta como parte de la redefinición de la concepción del bienestar, que busca fortalecer la política de alimentación en Venezuela, reside entonces en atacar la subordinación, la explotación económica, los monopolios, las oligarquías, y el modelo capitalista centralizador, que han sido causas de una monumental marginación social, traducida en términos de pobreza para amplios sectores de la población, fenómenos contradictorios con los postulados democráticos de la equidad, o el ya mencionado programa de la justicia social.

En estos términos, hoy se piensa en un proceso nacional integral donde el ser humano, el hábitat y la supervivencia permitan abrir una visión más optimista del desarrollo, porque a decir verdad se estaría lejos de esta aspiración si no se cubren las necesidades básicas y se privilegia la condición humana sobre otras variables más circunstanciales y exiguas.

Desde este punto de vista, se trata de uno de los problemas más arduos por resolver. Pero sin dudas bajo el ideal progresista estimulado por

⁶ Véase Maximiliano Cox y Oscar Cismondi, “Nuevas tendencias de la política agrícola en América Latina y el Caribe: consolidación y Cambio”, Disponible en On Line: **Varios Archivos Ref Ag\Nuevas Tendencias de la Política Agrícola en América Latina y el Caribe.htm**

los procesos de cambio en los cuales se ha venido involucrando el gobierno de Venezuela en los últimos años, se busca una salida respondiendo a un entorno crítico de inconformidad, y de dependencia, que ha dado lugar a la informalidad en el conjunto del sistema social venezolano.

No obstante, las circunstancias democráticas de la Revolución Bolivariana han llevado a promover una nueva forma de dirección de la política agrícola, y con ella un acercamiento al núcleo sociopolítico de la soberanía alimentaria, concebida como la teoría de la intervención del Estado en el campo de la economía agrícola (Napoleoni, 1993, Pág.1339). A la vez se trata de abrir la discusión hacia formas de participación vinculadas al bien de nuestro pueblo, perfilándose de este modo una política en las áreas predilectas de intervención en la agenda del gobierno venezolano en la época actual.

De cualquier manera, las estrategias de este modelo de gestión impulsadas dentro del nacionalismo revolucionario, están fundamentadas en la búsqueda de instituciones eficientes, ágiles en su desempeño, y con capacidades y recursos bien orientados, todo en un esquema tendiente a reordenar las relaciones de producción, para frenar las formas depredadoras de la dependencia capitalista, superar la importación innecesaria de productos agrícolas que privilegia la llamada economía de puertos, todo en desmedro del interés nacional y la producción interna.

Por otra parte, se trata de llenar las expectativas de distribución de tierras y la redistribución de sus beneficios, con un objetivo bastante claro: luchar contra la resistencia de los principios latifundistas y de las tendencias oligárquicas tradicionales, catalogadas como parte de los agentes histórico sociales y del esquema contradictorio en el cual las relaciones de producción se han mostrado antagónicas, estructurándose bajo el arbitrio de intereses

privados, en menoscabo del beneficio general, lo cual ha sido un agravante de regresión en el acceso a los bienes de primera necesidad provenientes del agro, en perjuicio de la producción nacional de bienes, en desmedro de la cohesión de los productores, de la estabilidad y de la continuidad de la política agrícola, así como de la búsqueda de una democratización efectiva en el acceso a la economía de naturaleza agraria.

La visión inclusiva actual de una verdadera Revolución Agraria busca entonces modificar el orden perverso enraizado en el clientelismo injustificado y en el oportunismo de pequeños grupos económicos. La alternativa es la democratización de la tierra, y la fórmula para acompañarla es la producción nacional, de un crecimiento serio en esta materia. Como se sabe, hubo de esperarse varias décadas para tratar de superar las limitaciones derivadas de un sistema injusto, de usufructo de recursos y monopolizador de tierras de uso agrario, que determinaba algunos atributos de la *alienación* social y condicionaba las expectativas sociales a futuro, al desdibujarse todo criterio de solidaridad colectiva.

De manera que la elaboración de soluciones por tanto, viene requiriendo de propuestas concretas elaboradas bajo un liderazgo presidencial de nuevo tipo, con el objetivo de romper con el esquema precedente integrado por una situación endémica de una política agrícola no deseada.

En razón de lo expuesto las ideas revolucionarias sustentadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV: 1999), tienen gran apoyo en una sociedad con grandes necesidades, y en la receptividad de quienes se sienten identificados con una transformación a fondo, cuyo sentido incluyente busca activar proyectos, apoyarlos con importantes

recursos e involucrar a las bases sociales en la implantación y el avance de políticas públicas para este sector.

Desde luego y como referente ideológico la corriente socialista en el caso de Venezuela es la fuente doctrinaria que viene fomentando un planteamiento de solidaridad y justicia de alcance amplio, por medio de categorías afines con un nacionalismo bien entendido, que debe estimular la reforma agraria para reemplazar un modelo monopólico, excluyente y fracasado. En conjunto las argumentaciones socialistas buscan evitar las contradicciones de clase y las mismas se inspiran en el aporte de Carlos Marx, a quien la teoría política y la historia del pensamiento económico, le reconocen el mérito de haber concebido la realidad económica y la estructura social en un todo inseparable, además de haber arrojado luz para el uso efectivo de recursos para cubrir las necesidades de la comunidad y la población dedicadas a la actividad agrícola.

Además, un aspecto importante de la doctrina marxista ha sido el haber obtenido sus mayores logros en países subdesarrollados, y manera particular en los de base predominantemente agraria. De hecho, en el panorama de la lucha de clases, aquel revolucionario alemán, sostenía los riesgos, como lo subraya Barber, de que el imperialismo sujeta a las colonias como grupo al proceso de explotación y empobrecimiento que había experimentado anteriormente el proletariado en los países industriales. Por último, el fermento revolucionario entre los explotados llegaría al punto en que fueran rotas las cadenas imperialistas (Barber, 1980: Pág.145).

En este orden de ideas, aunque no hay precedentes de un modelo realmente exitoso y conocido en Venezuela, y con el ensayo del reciente proyecto revolucionario se busca superar la pesada carga negativa en cuanto al déficit de gestión de la reforma agraria intentada por los gobiernos anteriores, quienes orientaron las políticas por un camino distinto al

inicialmente planteado, desvaneciendo el propósito democrático de las políticas públicas, al privilegiar unas condiciones de poderío clasista, claramente capitalista, y al excluir a las mayorías populares de las verdaderas intenciones sociales del modelo de desarrollo.

Considerando estas deficiencias, la reforma agraria de la revolución bolivariana ha entrado en un escenario que puede ser analizado recurriendo a varias tendencias, es decir: como acto de justicia social, como factor de desarrollo y como acto de planificación (Cf. Le Coz, 1976: Pág.35). Una articulación satisfactoria de los tres ejes mencionados resulta prioritaria, en relación con los objetivos del gobierno revolucionario. Varias razones lo explican: tenemos un gobierno empeñado en situar la justicia social en el centro del debate, ampliando los alcances de la democracia, y se cuenta con estructura institucional que impulsa reformas políticas, económicas y sociales, todo dentro de un Estado con un territorio y unas condiciones geomorfológicas propicias para el desarrollo agrícola, unas estrategias de planificación ampliamente defensoras de los criterios redistributivos de la riqueza y una concepción de la democracia solidaria desde el punto de vista económico, nacionalista en su apreciación de la soberanía alimentaria, y libre de toda injerencia de dominación imperialista o colonizadora.

En forma simplificada entonces se considera que este es un plan referido a la democracia social y encaminada, como señala Boersner, hacia el socialismo democrático que es su forma de mayor florecimiento futuro, y no significa la estatización de la economía sino el desarrollo cada vez más determinante del control social sobre la producción y distribución de la riqueza (Véase Boersner, 1988:Pág.265).

Asimismo, en atención a los cometidos de la revolución venezolana⁷, de tomar las riendas de nuestro propio desarrollo, la política de avance en el sector agrícola se concatena con una inclinación por la inclusión bajo consideraciones filosóficas, sociológicas, políticas y económicas de la gestión pública, guiadas por un nuevo marco institucional, según lo propuesto en la CRBV (1999), y ratificado en el esquema de la legalidad aprobada para cumplir con este cometido. Un buen ejemplo está en la promulgación de la “Ley de tierras y Desarrollo Agrario”, instrumento legal adaptado a las nuevas realidades del país, en procura de extender la democracia participativa y el derecho a la posesión de la tierras, tratando de resolver las dificultades del campo, por medio de planes oficiales en apoyo a la producción agrícola del país, con sentido de permanencia y de progreso efectivo para quienes conviven en esos espacios geográficos.

En concreto y partiendo del ordenamiento jurídico vigente y en lo relativo a la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario” del año 2001, se declara la intención de promover el desarrollo agrario con base en la justicia, la distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática, participativa, asegurando la biodiversidad y la seguridad alimentaria⁸.

Obviamente, la legitimidad de la política agroalimentaria está implícita en las consideraciones del proyecto socio productivo del país, deducido así mismo del mandato de la CRBV (Art.305), y que nos remite a la **seguridad alimentaria** donde se entrelazan recursos naturales, materiales, humanos, en la capacidad de los venezolanos para abastecerse de alimentos, eliminando las situaciones de riesgo, imprevistas o de incertidumbre. En términos institucionales, según el “Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria”, esto se refiere al grado de garantía que tiene cada país de

⁷ Una revolución es un cambio rápido, fundamental y violento en los valores y mitos dominantes en una sociedad, en sus instituciones políticas, su estructura social, su liderazgo y la actividad y normas de su gobierno (Huntington, 1997, p.237).

⁸ Sobre este mismo punto se puede ver el trabajo de Juan José Pérez, 2005.

disponer oportunamente y bajo cualquier circunstancia de los rubros alimenticios e insumos necesarios para la producción, asegurándole a la población el acceso a los alimentos que constituyen su dieta cotidiana, tomando en consideración la preservación del ambiente para las generaciones futuras.

De allí surge también la idea de la **soberanía alimentaria** esto es, desde la perspectiva de las políticas públicas y la afectividad del Estado, la capacidad institucional para ponerlas en práctica y generar autoabastecimiento en materia de bienes agrícolas, tratando los obstáculos derivados de unas relaciones puramente mercantilistas, donde la economía de mercado impone las condiciones sin importar el impacto social.

Como elemento adicional, de manera operativa y precisa el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología instituyó formalmente el Programa Soberanía y Seguridad Alimentaria en el año 2005. Su objetivo ha sido elevar el nivel de desarrollo científico-tecnológico del país para contribuir a disminuir la dependencia del sector agrícola nacional, tanto en lo relativo a la producción de rubros básicos, como para el procesamiento, conservación y disponibilidad de alimentos que aseguren niveles óptimos de alimentación y nutrición de la población⁹.

Con ello se trata de reorientar los objetivos de esa política estratégica, para lograr una agricultura socialmente justa, tomándola como un área de preferente atención, con la idea de cubrir la demanda interna a través de la producción amplia de bienes agrícolas, más allá del principio de la simple subsidiaridad, por medio de una participación extensa de la sociedad,

⁹ Informe Nacional de Seguimiento de la Aplicación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación. República Bolivariana de Venezuela, Caracas, Mayo de 2008

rompiendo con las barreras que tradicionalmente han convertido esta política en un fracaso, debido a fallas evidentes, como por ejemplo: la incapacidad de los gobiernos para ordenar las relaciones productivas y regular la propiedad de la tierra.

Ahora bien y en un sentido general, se entiende por política agrícola, “el conjunto de objetivos, metas y pautas de estrategia propuesto por el gobierno a los agentes que participan en el proceso de desarrollo agropecuario; los patrones o esquemas, que establecen las reglas del juego o regulan el comportamiento de los agentes del sistema agropecuario; y, finalmente, los conjuntos de acciones consideradas óptimas para alcanzar algunas de las metas propuestas (programas y proyectos). En esa acepción, la política planificada de desarrollo agropecuario se expresa a través de la totalidad de los mecanismos utilizados por un gobierno y que son formulados, controlados y evaluados por el sistema de planificación agropecuaria” (González y otros, 1977: Pág.219).

CAPITULO IV
DIALECTICA REVOLUCIONARIA DE LA POLITICA AGRARIA

www.bdigital.ula.ve

CAPITULO IV

IV.1.- La política pública agrícola en el nuevo esquema de la democracia social

La plataforma para el lanzamiento de los cambios en la política agrícola tiene conexión a la historia del pensamiento económico, desde los estudios clásicos hasta los más recientes, donde existe una relación entre la actividad agrícola y la satisfacción de las necesidades humanas, entre el crecimiento de la población y el manejo óptimo de la tierra, entre la producción agropecuaria y el consumo, entre la disponibilidad de recursos y el desarrollo sustentable o de equilibrio entre lo ecológico, lo económico, lo social y lo político.

Considerando esos planteamientos, han surgido ejes temáticos relevantes que tocan de cerca la política agrícola, donde uno de los objetivos es la creación de un orden socialista, cuyo resultado sea una mayor justicia social y la no discriminación, para superar las políticas equivocadas de las administraciones anteriores. De manera que en el modelo de la sociedad de bienestar, guiada por criterios revolucionarios, la sección agraria es tal vez un ejemplo claro del perfil distributivo y redistributivo de las políticas públicas a seguir, De hecho, “la política distributiva va al fondo del problema y es esencial para tener mayor equidad. Las políticas redistributivas corrigen (de acuerdo con el criterio predominante) la distribución primaria, con medidas de transferencia de ingresos, bienes y servicios” (Cf. Kliksberg, 1993: Pág.64).

Es cierto además que las dificultades económicas y sociales, producto de la acumulación de demandas sociales no atendidas en el campo venezolano, evidencian que la alternativa de la actividad agrícola, fomentada a través de políticas públicas con un sentido de permanencia en el tiempo,

puede ser una opción revolucionaria. Ahora bien, en una visión objetiva de la gestión pública se considera que en ninguna área tuvieron los planes originarios de Chávez tantos tropiezos como en el proyecto de la revolución agraria. Allí estuvo presente, desde el comienzo de su gobierno, un complejo mecanismo de frenos, abanderado, desde luego, por un sector amplio de latifundistas siempre dispuestos a utilizar la violencia paramilitar, hecho complementado por el boicot de la burocracia estatal, la connivencia de algunos militares terratenientes y, sobre todo, por la ausencia de una organización autónoma campesina, lo cual ha demorado la realización de esa transformación de la cual depende en gran medida la marcha del conjunto del programa revolucionario (Bilbao, 2008: Pág.128).

No obstante, las grandes coordenadas del proyecto del Presidente Hugo Chávez, una vez asumido su gobierno en el año 1998, se agruparon en el proyecto ideológico la tarea de: eliminar de raíz el sistema latifundista, la exaltación del valor colectivo de la política, la aplicación de la tributación agraria y la estatización de los medios de producción. El principal reto fue superar la crisis de la producción agroalimentaria, no por la vía de la ampliación de la frontera ni por un proceso de colonización; el objetivo fundamental era rescatar la tierra que se encontraba irracionalmente explotada por el sistema latifundista o por la empresa capitalista. El latifundio se define con distintas escalas de valores: a) la desproporcionada posesión territorial; b) la ineficiencia de la explotación; c) el irrespeto a la legislación laboral; y d) la estructura social cerrada de baja permeabilidad (Véase Soto, 2006: Tomo I, Pág. 13).

En paralelo las tendencias marchan hacia el uso colectivo de la tierra, como elemento esencial para la vida y el desarrollo de nuestra población, y la orientación a fortalecer las capacidades de las personas vulnerables, prestándoles la debida asistencia con micro créditos, para transitar hacia una seguridad alimentaria, teniendo el trabajo primero de las cooperativas entre

los entes rectores para un buen aprovechamiento de las iniciativas de inversión emprendidas por el gobierno nacional. Sin embargo se han presentado debilidades, entre ellas el hecho inocultable de que muchas organizaciones cooperativas fracasaron al perder sus objetivos fallar en el compromiso de direccionalidad estratégica en el sector agrario.

Ahora bien, la nueva óptica política venezolana se centra en impulsar cambios revolucionarios en la democracia, involucrando en la dinámica agroalimentaria el mayor número posible de actores para superar las poderosas y resistentes formas de explotación, mantenidas y arraigadas por décadas, en el esquema dominante del sector privado. De allí derivan conflictos de intereses, que en el pasado impidieron garantizar la reconversión agroalimentaria. De manera que ahora en el nuevo formaro revolucionario “la amplia disponibilidad de tierras de carácter público preponderante en su propiedad debería hacer posible que el costo de este recurso sea significativamente bajo y, por tanto, más fácil su incorporación” (Hernández y Martel, 1993: Pág.255).

Más allá de lo expuesto, y conforme a la realidad que se ha vivido tradicionalmente de las políticas agrarias mercantilistas, y de un agrarismo sagaz en la búsqueda exclusiva de la ganancia y de la competencia (acciones propias del capitalismo liberal), la opción democrática que se sigue hoy día, en el camino hacia el socialismo, tiende a regular la tenencia de la tierra, aplicando políticas distributivas de alto impacto social en el campo y generando alternativas contra la explotación oligárquica en el sistema de producción.

En el marco de la arquitectura del poder revolucionario se tiende así a superar las dificultades arraigadas en el institucionalismo clásico y desde el plano del neoinstitucionalismo organizacional del poder se reorienta la

cobertura de las expectativas de los campesinos interrelacionando lo humano, lo político y lo económico. De allí que para legitimar la política del desempeño en las acciones de gobierno, el impulso de las fuentes del poder busca impactar los espacios agrarios, con base en la nueva democracia participativa y protagónica, donde concurren alternativas para un accionar diferente en el abordaje de una problemática que por décadas se descuidó injustificadamente.

Ha sido entonces la necesidad de enfrentar la progresiva pauperización y la pobreza de muchos venezolanos, el punto de arranque para concebir el nuevo proyecto de transformación socialista, esto en medio del llamado a la responsabilidad institucional de la democracia y de la dimensión ética en los marcos de acción administrativa para hacerla efectiva a través de políticas públicas, entendiendo que el capitalismo, como estructura de dominación, ha erosionado de manera considerable los eslabones solidarios del pueblo, y que las contradicciones del mismo capitalismo, sin mayor desvelo por lo social, llevó a perder la fe en la democracia y el respeto por los derechos del pueblo campesino..

Por su parte, las dificultades económicas y sociales existentes en el campo y en el agro venezolano, plantean a la concepción socialista de la política y al gobierno revolucionario nuevas opciones de gestión pública, en el marco de estrategias y alternativa en la formulación y el diseño de políticas públicas, para orientarlas al manejo equitativo de la tierra y tender puentes para mejorar la calidad de vida de la población rural del país. El gobierno revolucionario tiene en este sentido la misión prioritaria de generar alternativas prioritarias a la crisis productiva, y por ello urge sin retardos fortalecer un sistema de acuerdo no sólo para transferir créditos, sino también para el suministro o equipamiento técnico y la transferencia

tecnológica y de conocimiento experto, donde las universidades deben tener un papel apreciable.

Ahora bien, existen datos reveladores de los cambios en la política agrícola en esta etapa neoinstitucional y revolucionaria que se vive en Venezuela. Por ejemplo:

- Durante la gestión de la Revolución Bolivariana la superficie cosechada ha pasado de 1.638.923 hectáreas en 1998 a 2.433.943 hectáreas en el año 2010, lográndose un incremento del 49%.
- Luego de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en octubre del año 2001, pasamos de 1.655.766 hectáreas para el 2002 a 2.433.943 hectáreas en 2010, logrando un incremento del 32%.
- En el año 1998 se producían en Venezuela 17.160.577 toneladas de rubros agrícolas lo que representaba un incremento de sólo el 8% con respecto al año 1988 en donde se produjeron 15.915.235 de toneladas.
- En los 12 años (1998-2010) de Revolución se ha incrementado la producción agrícola vegetal y pecuaria alcanzando para el año 2010 una producción de 24.686.018 toneladas, Representando un incremento del 44% con respecto al año 1998 (*Fuente: Ministerio del Poder Popular para Agricultura y tierras*).

Bajo la tendencia referida, la política agrícola puede decirse tiene hoy la ventaja de afianzarse en una importante disponibilidad de recursos, contándose un apoyo gubernamental que sirve de guía a las estrategias transformadoras en el campo venezolano, buscando incluir extensos sectores poblacionales, a quienes toca de cerca un modelo de desarrollo articulado en la concepción socialista del poder, y alineado a los grandes objetivos históricos definidos en la Ley del Plan de la Patria, donde si bien el Estado tiene una gran intervención como gran inversionista, se exige suprimir

las barreras burocráticas, buscado “delegar poder en la gente”, favoreciendo la perspectiva de una administración y una gestión de recursos bajo la primacía de los valores de la participación del pueblo. Aquí está centrado el discurso político e institucional, organizado constitucionalmente y recogido en las leyes diseñadas y aprobadas por la Asamblea Nacional para atender el desarrollo de las áreas rurales.

Vistas de esta manera, las políticas públicas según disertación reciente de Ocampo, permiten ordenar, entorno a su finalidad o propósito, leyes, metas ministeriales, prácticas administrativas y partidas presupuestarias. Ellas pueden entregar al gobierno los principales criterios de análisis estratégico, así como la evacuación de la gestión pública (Ocampo, 2005: Pág.124).

El desafío toca también de cerca a los agentes del desarrollo, quienes están llamados a impulsar la nueva experiencia, ayudando a perfilar todo el potencial del Estado y a orientar el plan de gobierno hacia el objetivo mayor de superar la pobreza, y así ayudar a levantar un puente sólido por donde transiten las demandas sociales y las respuestas del gobierno.

En esta perspectiva dentro de la política pública agrícola se concatenan diversos sectores de la actividad económica y social, de manera que la actividad agropecuaria constituye un sistema complejo, donde se comprometen al gobierno, al Estado (como promotores de las políticas), y a la sociedad como actora y receptora de las mismas. Además la cobertura amplia es un factor frecuentemente revisado en detalle, y una de sus aristas importantes se observa en el hincapié de la organización, que debe llevar al buen diseño y puesta en marcha de la referida política, bajo parámetros de eficiencia, eficacia, calidad y equidad.

Aunado a lo anterior, y moverse a contracorriente de la pobreza y el atraso, implica entonces ir más allá de las difundidas y aplaudidas proclamas de la democracia formal y del simple reconocimiento constitucional de ciertos derechos elementales que conectan al hombre y la naturaleza en el medio rural. Entonces la idea y el espíritu que animan el nuevo proyecto de país está en superar el reduccionismo en el agro, relacionando sin mayores refinamientos teóricos, el capitalismo y la democracia con un verdadero sentido social.

De manera que en el actual gobierno se intenta modificar el carácter tradicional del manejo de una política agrícola tradicionalmente signada por la ineficiencia. En revolución es posible entonces, demostrar de modo categórico la importancia de incluir la mayor cantidad de población posible en un gran proyecto sustentable, con una visión estratégica de larga duración, en la búsqueda de romper las barreras restrictivas de la producción, distribución y consumo de alimentos. Pero ello se logra mediante la responsabilidad institucional, la ética revolucionaria y el compromiso colectivo.

IV.2.- La particularidad revolucionaria de la política agraria en la Venezuela del Proyecto Político Bolivariano

Todavía está fresco en la mente de los venezolanos el debate sobre el fracaso de unos modelos de desarrollo montados sobre el privilegio de la clase política y económica, así como en las restricciones orgánicas del poder durante la IV República (1958-1998). Esa era la visión dependientista, sustentada en la concepción de un modelo de desarrollo desigual y excluyente. No obstante y en atención a esta caracterización, una frase llegó a describir la realidad de los venezolanos en aquel momento de repunte del neoliberalismo y de reversión de los indicadores sociales, “Venezuela era un

país con pocos ricos, con una importante clase media, con muchos pobres y con pocos miserables. De ahí se pasó a un país con pocos ricos, muy ricos, con una disminuida clase media, con una pobreza aceleradamente creciente y con muchos miserables” (Véase Febres y otros, 1993: Pág.10).

Ahora bien, esto es plausible en el tratamiento de los antecedentes de la política agraria en Venezuela, donde ha persistido la ausencia de un planteamiento integral entre la economía, el desarrollo, la participación y la equidad social, además de la presencia de contradicciones derivadas de la acumulación económica en manos de poderosos capitalistas y reducidos grupos de terratenientes, que sitúan sus privilegios en la explotación a los pobres, quienes son la mayoría. Otra deficiencia de carácter estratégico estuvo en que durante mucho tiempo el Estado no mantuvo políticas permanentes y continuas para desarrollar la capacidad y la destreza del trabajador campesino.

www.bdigital.ula.ve

Siendo realistas, una pregunta matizada de incertidumbre permite afirmar: por qué durante tanto tiempo de la democracia representativa en Venezuela, la política agrícola no fue promovida como parte del desarrollo integral del país, aun cuando el nivel de vida era deficiente en el sector agrícola. Ello llevó a las deficiencias conocidas en el sector agrícola, lo cual constituyó un elemento potencialmente crítico al acelerar los niveles de pobreza y deslegitimar el régimen político puntofijista.

Muy grave además es que esto ocurriera en un país en condiciones económicas favorables, ello si lo vemos en términos comparativos con otros países del área latinoamericana y en el contexto de una democracia, que vendida por analistas de la derecha internacional, estaba entre las de menor problema y de mayor duración. Sin embargo, la realidad expresaba el carácter cerrado de pequeños grupos de poder para tomar decisiones, contándose la presencia de sectores poderosos, con posibilidades

innegables de obtener beneficios en un sistema perverso de reparto económico y de clientelas políticas controladas por dos partidos políticos, que según Juan Carlos Rey, consolidaron el llamado “Sistema Populista de Conciliación de Elites”.

En este contexto del pasado poco grato (1958-1998), la política social rural significaba únicamente un tema marginal en la agenda de las políticas públicas, y el sector agrícola se contaba restringido en el diseño y la gestión de los planes gubernamentales. Además el predominio de la dependencia externa de este sector, alimentó en el tiempo los intereses de una clase política dirigente que privilegiaba el negocio clientelar y las ganancias en las comisiones, por encima de cualquier concepto de adhesión a una democracia de igualdad y amplitud, hecho que a la vez impidió avanzar en una evaluación seria de la situación para evitar las debilidades y por este medio generar oportunidades para tener una política agrícola como pilar estratégico de combate a la pobreza. Siendo así, “en la exclusión rural del campo se encuentran tanto las claves del carácter perverso del neoliberalismo como la resistencia social que lo enfrenta” (Rubio, 2001:Pág.64).

A contracorriente es necesario señalar que, el comienzo del siglo XXI es propicio para reconocer en Venezuela una incompatibilidad de las instituciones deficientes con la realidad de las estructuras agrarias, y en consecuencia esa debilidad ha sido un obstáculo para el impulso de la intervención del gobierno y el Estado en las diferentes áreas sociales, incluido el aspecto agrario con sus expresiones espaciales de la tierra, y las medidas económicas de inversión en la producción. En conjunto la primacía agraria del nuevo proyecto nacional, con la especificidad propia del contexto venezolano, habrá de empezar entonces a operar desarticulando las prerrogativas de una oligarquía ineficaz e injusta.

En términos cuantitativos, revertir los indicadores sociales de la inequidad y producto del déficit en la distribución de tierras y la baja producción agrícola interna, lleva su tiempo, pero el énfasis del gobierno nacional, a lo largo de tres lustros, en difundir el aprovechamiento óptimo del potencial natural de nuestro territorio, y el hecho de poner a disposición del pueblo venezolano las tierras ociosas con el apoyo institucional y económico respectivo, vislumbra en el horizonte aspectos positivos en la tendencia a dinamizar este sector.

Ahora la concepción revolucionaria tiende a ser distinta, y la correlación entre economía, sociedad y Estado se explica en función de valores éticos, entendiendo que la cobertura de las necesidades básicas de la población, se debe tratar con un sentido democrático verdaderamente humano, trascendiendo el determinismo capitalista de la ganancia, y la competencia.

Por ello, el siglo actual se ha abierto con una propuesta de revolución para Venezuela, que plantea un modelo de democracia alternativa, cuyas implicaciones han llevado a numerosos pensadores a reflexionar, y a algunas estructuras populares a la necesidad de aliarse en el proyecto de inclusión social en contra del orden tradicional. Ahora la integración social, la corresponsabilidad, la cohesión social, la participación social, la ciudadanía, la progresividad, la intersectorialidad, la familia, y el desarrollo humano integral, suponen requisitos básicos entre las líneas estratégicas de cara a la construcción de un país diferente.

Desde este punto de vista, el impulso de las líneas estratégicas de la política estatal, plantea en sentido estrictamente colectivo cristalizar estrategias de desarrollo, mediante políticas específicas para garantizar la seguridad agroalimentaria y luchar contra el latifundio, dando importancia a la democratización de las tierras.

En las líneas señaladas hay elementos de análisis necesarios para ayudar a comprender la transformación socialista, avalada por el potencial revolucionario y el papel del gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y tierras, los cuales exigen resultados concretos en cuanto a:

1. Mejorar la distribución de ingresos y la riqueza, con desarrollo de procesos y articulación entre la política social y económica, para el impulso de las acciones de la economía social, democratizando la propiedad de la tierra y generando empleo productivo.

2. Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa con la disminución progresiva de las inequidades sociales, priorizando las necesidades sociales y profundizando la descentralización y una educación de calidad.

3. Fortalecer la participación social y generar poder ciudadano, en espacios públicos de decisión, con la articulación del proceso de descentralización, el cual permita la participación en las políticas sociales¹⁰.

Desde este punto de vista en el nuevo paradigma de la política agrícola y dejando atrás la visión descentralizadora del estado, se supone que una de las condiciones para que la democracia funcione con éxito reside en la integración de valores como los de justicia social, equidad y libertad, los cuales se deben poner a prueba para luchar contra las carencias generadoras de la pobreza, condición representada por la minusvalía socioeconómica debelada en múltiples causas, y que obliga a la intervención ineludible del poder del Estado.

¹⁰ Informe sobre la Misión Zamora: gestión 2005. Caracas, Ministerios de Agricultura y Tierras, Instituto Nacional de Tierras, Diciembre (MIMEO).

El movimiento revolucionario de Venezuela se ha convertido entonces en un proyecto emancipador, a través del cual el pueblo busca el camino del cambio, y donde se supone deben resultar favorecidos los sectores sociales desposeídos. Adicionalmente es necesario destacar que estos avances buscan superar las contradicciones sociales derivadas de la propiedad privada. Evidentemente para la agregación de intereses la Reforma Agraria se constituye en un objetivo fundamental de lo que se persigue para superar el atraso campesino y democratizar el reparto de la tierra, fijando en el horizonte de las condiciones materiales, humanas, técnicas y de producción, la posibilidad de hacer realidad la utopía socialista de liberación del pueblo, y en la cual se asume que solamente será posible superar los efectos perturbadores del atraso, si se modifican las estructuras de propiedad, uso y dominio agraria¹¹.

De allí que un paso fundamental en la dirección deseada en este propósito, está en modificar los elementos que obstaculizan las estructuras agrarias, partiendo de la intervención responsable y eficiente del Estado, por medio de una acción del gobierno capaz de gestionar e introducir los elementos necesarios para una radical modernización del sector en referencia. En tal sentido, se requiere estimular las políticas públicas y controlarlas a través de los medios administrativos a disposición, ayudando a promover los planes y proyectos como demanda la gerencia socialista, sin caer en los reduccionismos tecnocráticos.

En paralelo el proceso revolucionario enfatiza un planteamiento de independencia ante la injerencia externa, dentro de lo cual está la descolonización antiimperialista, en función de resolver las dificultades y los problemas de la producción de alimentos, que como lo demuestran varios

¹¹ Acerca de la relevancia de la este aspecto se puede ver la posición de Francisco Molina en: <http://veneno.com/1997/v-1/fran-01.html>

acontecimientos, entre ellos los paros petrolero y empresarial de los años 2002 y 2003, que fueron particularmente sensibles para un pueblo que antes del año 1998, estaba en altos niveles de pobreza.

Ahora bien, las contradicciones en las estructuras de poder agrarias, ha forzado en Venezuela a introducir un cambio radical para superar las inconsistencias del sector, y a la vez ha abierto un camino para que los gobiernos el Hugo Chávez (1998-2013) y Nicolás Maduro (2013-?), aceleren la marcha en su responsabilidad de cambiar la estrategia a seguir, pensando no solo en disminuir la tensión social, sino a la vez limitando el monopolio, uno de los componentes más perversos tanto de las cadenas de comercialización como en el acceso a los bienes agrícolas por la mayoría de la población.

En este escenario se dinamizan las fuerzas sociales del campo, y en tal sentido la dirección del proyecto político socialista estimula un cambio importante en todos los planos productivos del país. De manera que la utopía del cambio revolucionario en Venezuela implica avanzar en contra de “la crisis del modelo económico, que podrá ocurrir cuando la separación del capital financiero y productivo afecte a las grandes potencias, y será una gran oportunidad histórica para transformar la correlación de fuerzas a favor de los oprimidos. Para fundar un nuevo modo de producción comunitario, socialista, democrático, pluriétnico y con igualdad que genere la vida” (Rubio, 2001: Pág.64). Ello requiere construir categorías de análisis a los fines de formular políticas de nuevo tipo y repensar lo público en sus dimensiones revolucionarias, a través de la sociedad.

En este horizonte de estudio, la política agraria se inspira en las dimensiones culturales y políticas de las grandes gestas revolucionarias, y entre los núcleos centrales de la simbología de esta política no caben dudas de la importancia de movimientos como los encabezados por Ezequiel

Zamora en el siglo XIX. Básicamente esta es una rebelión contra la exclusión social, que pasa por el carácter revisionista en cuanto a la tenencia, el uso, la ocupación, la distribución, y producción de la tierra, piezas fundamentales del horizonte revolucionario actual.

Ahora bien, es necesario tener presente asimismo que “hay un problema de tierras en la sociedad venezolana: algunos poseen tierras habiéndoselas apropiado indebidamente y, en muchos casos, sin ningún uso o sin el uso al cual debería orientar su vocación; mientras que, de otro lado, hay multitud de campesinos sin tierra que, por esa razón son víctimas de una extrema injusticia social” (Blanco, 2002: Pág.121).

Para cumplir los cometidos de la justicia social y conciliar punto de encuentro entre el desarrollo económico y el desarrollo social, hay que apartarse de unas prácticas políticas fracasadas, y frente a ello la tarea de la formulación y el manejo de una política de reforma agraria eficiente y responsable se considera imprescindible, todo dentro de “un intento para crear una adecuación entre las estructuras de producción y el entorno socioeconómico” (Le Coz, 1976: Pág.329).

Tales actividades deben buscar asimismo introducir la participación y la acción colectiva en los sistemas de observación y control de las políticas públicas, para el aprovechamiento de recursos, contando la importancia de los valores revolucionarios en el camino hacia el éxito de los grupos humanos en el campo, por medio de la reciprocidad, la cooperación y la confianza, atributos de la *Misión Zamora*. La revalorización de lo social tiene sentido así por tratarse de una vinculación entre la sociedad y las instituciones en procura de una mejor calidad de vida, eliminando las condiciones de subordinación, explotación, y favoreciendo los puntos centrales de la agenda alternativa del gobierno nacional.

IV.3.- El INTI como unidad operativa de la nueva política agrícola

La incapacidad de formular estrategias tendientes a disminuir la pobreza ha estado estrechamente vinculada a la falta de decisiones de gobierno eficientes, a la hora de reducir la concentración de la tierra en pocas manos. Esto ha permitido la existencia y prevalencia de relaciones con determinadas características feudales, y donde se explota al hombre bajo formas tradicionales de dominio, semejante al siervo de la gleba (Soto, 2006: Tomo I, Pág. 29).

Por ello los cambios desatados en el esquema de funcionalidad del sistema político venezolano, lleva implícita de alguna manera la exigencia de nuevos referentes de desarrollo. Lo cual exige ampliar los marcos de confianza en el nuevo sistema de la justicia social. En este marco de referencia se habla del socialismo como “construcción histórica que depende, fundamentalmente, de la comprensión del proceso democrático nacional en la totalidad de sus aspectos, para lo cual se necesita el esfuerzo armónico de las diversas fuerzas sociales” (Sanoja Obediente y Vargas-Arenas, 2008: Pág. 229).

Dadas las circunstancias del agotamiento del modelo político anterior, del deterioro coyuntural de la agricultura, y la frustración popular por la pésima conducción de la política social, desde el año 1998, el Presidente Hugo Chávez fue en busca del tiempo perdido, con medidas específicas en post de la reconversión del aparato productivo nacional, en un esfuerzo sostenido y coherente con la exigencia de mejorar el sistema de distribución de oportunidades, y hacer más expedita la pesada carga de inequidad que acarrea la pobreza.

En consecuencia, la necesidad de reformar la política agrícola del Estado para superar la crisis y las amenazas que derrumban los derechos

sociales y buscar mejores condiciones de vida, hacen del paradigma socialista una interpretación valiosa, sobre todo al tratarse de reforzar los procedimientos de la gestión pública y reivindicar el lugar ético de la economía agrícola en el procesos de cambio que se viven en Venezuela.

No obstante, una visualización general de la formulación de la política agrícola, entre los años 1958 y 1998, puede ser evaluada con indicadores tendientes a ofrecer resultados óptimos según estimaciones de diversos analistas. De hecho se evidencia las presiones capitalistas externas, en medio de los cambios intentados por el modelo neoliberal, que afectó y alteró los principios democráticos de la gestión pública, limitando el modelo de desarrollo. De allí que los intentos de reemplazar el modelo de desarrollo agrario no estuvieron encaminados hacia la sustitución de las importaciones, ni a modificar positivamente los indicadores de la producción interna, predominando más bien las presiones mercantilistas del capitalismo liberal y el predominio del individualismo del mercado, en medio de conductas importadoras, maximizadoras de la riqueza y sin una contraprestación social integral.

Así operaba la retirada del Estado respecto a las instituciones de la democracia ocurrida durante el superado proyecto puntofijista, donde el espacio de actuación gubernamental se planteaba bajo una escasa participación, más allá del plano electoral, dejándose a los centros del poder económico la libertad de formular políticas de inclusión. Además se ignoraba la centralidad del problema agroalimentario, y se trazaban las estrategias para la explotación clasista en los predios de las tierras rurales. Contra la tendencia referida, la directriz de corresponsabilidad emprendida desde año 1998 consiste en mejorar la inversión en el medio rural, especialmente en el agrícola, donde hay un núcleo de reservas naturales, que bien manejados con un sentido de cooperación sirve para atender las demandas en el

presente y en el futuro, agregando un mejor abastecimiento para cubrir la demanda y el consumo interno de la población venezolana.

Ahora bien, son extensos los estudios que describen el potencial geopolítico de Venezuela, en función de lo cual, podrían esperarse ampliaciones en las potencialidades del agro. Así, las condiciones naturales para desarrollar políticas públicas son favorables, y en ello son claros los argumentos de Hernández y Martel, al señalar como, la condición de país tropical del hemisferio norte le confiere ciertas ventajas comerciales que surgen de la disponibilidad de energía solar durante todo el año, que acorta los ciclos de crecimiento en los cultivos permanentes, le permite un uso intensivo de la tierra y la posibilidad de incursionar en el mercado internacional cuando las condiciones climáticas de los países templados no permiten la producción agrícola” Hernández y Martel, 1993: Pág.255).

Venezuela parece privilegiada en ese sentido, pero hay países que han avanzado más rápido en el mejoramiento de la condiciones de vida. Las reservas naturales indican las enormes potencialidades que deben ser aprovechadas, y el énfasis particular está en poder hacer de la producción agrícola un medio para consolidar la inversión económica del Estado. La experiencia revolucionaria significa, desde luego, un adelanto de políticas dirigidas prioritariamente a superar la pobreza, diseñándose programas sociales que buscan la incorporación del componente humano como condición indispensable para la inclusión y el fortalecimiento de los valores éticos de la democracia.

En un sentido amplio, la supervivencia de la democracia, y la superación de los problemas de ingobernabilidad durante el Pacto de Punto Fijo (1958-1998), obligaba a plantear con urgencia la recuperación de la confianza en los incentivos para el desempeño de una nueva economía agrícola. Ahora, bajo el nuevo proyecto de país, las propias instituciones

surgidas en medio de la ola revolucionaria, en acuerdo con los ciudadanos organizados tienen el compromiso de orientar las experiencias concretas del poder hacia una política social más comprometida con el área agrícola. En este escenario el Presidente “Chávez firmó la Ley de Tierras el 9 de noviembre de 2001. Un mes después tuvo el primer lock out general, prólogo del golpe de Estado y la escalada posterior” (Bilbao, 2008: Pág.128).

Es razonable entonces que en el tiempo presente del gobierno Bolivariano, se conciban otras formas de interpretar la realidad rural, y del medio agrícola, donde la interdependencia de sectores llamados a tener protagonismo en el medio campesino, lleven a buscar la identidad ideológica que permita colectivizar la forma y los medios de producción.

En líneas generales, el *objetivo* de esta política, propuesta del Gobierno del Presidente Hugo Chávez, para ser ejecutada por Ministerio de Agricultura y Tierras, a través del INTI, consiste inicialmente en: incrementar las áreas de siembra y producción, introduciendo metas de autoabastecimiento. En una primera etapa, de aquellos rubros que formen parte de la cesta alimentaria familiar, que impactan de manera negativa la balanza comercial y que dificultan el acceso al público consumidor. Ello dentro de una visión holística e integradora de la economía agrícola venezolana, que incluye de igual forma el uso racional de las tierras entregadas por el Instituto Nacional de Tierras a los campesinos, así como la incorporación de todos los productores en la construcción de la Quinta República, y por esta vía garantizar:

- Un aumento y diversificación de la economía no petrolera.
- Fortalecimiento de las cadenas agro productivas.
- Incorporación y adopción de nuevas tecnologías.
- Aumentar y fortalecer la pequeña y mediana industria.
- Desarrollar la economía social.

- Democratizar el capital y legitimar el mercado, fortaleciendo las micro-empresas y cooperativas.
- Consolidar el territorio incrementando la superficie ocupada por la población.
- Incrementar la infraestructura de apoyo a la producción.
- Democratizar la propiedad de la tierra.
- Garantizar la seguridad alimentaria.
- Acelerar la internacionalización de la economía con una visión multipolar¹².

Con base en esta experiencia, la asignación de recursos, el énfasis en el papel social del Estado, el incremento en la capacidad de gestión en la dirección de los programas, y la participación de la sociedad civil en las redes de apoyo a las estrategias de respuestas frente a la crisis de campo, indican que es imprescindible el trabajo compartido para enfrentar la inequidad y sacar la sociedad venezolana de los patrones esclavizantes y dependientes, cuyos costos han sido enormes desde el punto de vista económico y hasta moral inclusive.

De manera que en el centro del debate están las oportunidades de redefinir la autoorganización de la sociedad, considerando que las metas a lograr dependen de la efectividad del poder popular, de la estructura comunal, de la capacidad distributiva y el monitoreo estatal efectivo hacia los proyectos endógenos para llegar al progreso socioeconómico, y en buena medida a la realidad de un nuevo modelo de democracia que se involucre con mayor énfasis en la recuperación de los niveles de vida los estratos sociales más débiles.

¹² Informe sobre la Misión Zamora: gestión 2005. Caracas, Ministerios de Agricultura y Tierras, Instituto Nacional de Tierras, Diciembre (MIMEO).

Ahora bien la ventaja de la propuesta bolivariana para la revolución y recuperación del campo venezolano, consiste de esta forma en seguir una vía socialista en el desempeño gubernamental, admitiendo que el socialismo por su propia naturaleza lleva consigo movimientos populares que persiguen el objetivo de elevar el nivel de los trabajadores y campesinos (Soto, 2006: Tomo II, Pág.16).

Desde otro punto de vista, y ante el compromiso asumido por la nueva corriente política revolucionaria, la modificación del marco jurídico de la tenencia de la tierra exige ampliar los derechos sociales, y regularizar la propiedad agraria a nivel nacional. Ello busca mejorar el acceso al crédito estatal y a las inversiones financieras en actividades relacionadas con el establecimiento de programas de agricultura sostenible, y en tierras que por décadas han estado abandonadas, subutilizadas, o simplemente ligadas a la ocupación ilegal por reducidos grupos de propietarios.

En el plano de los hechos, la afirmación de este proceso de cambios revolucionarios, implicó el 1ro de Febrero del año 2004 el nacimiento de la Misión Zamora, con el objetivo de avanzar en la “*REVOLUCIÓN AGRARIA*”, que plantea, entre otros aspectos, el acceso de los campesinos y campesinas a las tierras, en condiciones dignas de tenencia y financiamiento a proyectos de desarrollo socio-productivo, enarbolando las banderas históricas de Ezequiel Zamora, quien esgrimiendo las consignas "Tierras y hombres libres" y "Respeto al campesino", se reveló el 07 de Septiembre del año 1846, ganando así la devoción popular y el nombre de “General del Pueblo Soberano”.

La Misión Zamora nace desde como una iniciativa del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, para avanzar en la *LUCHA CONTRA EL LATIFUNDIO*, garantizar la soberanía agroalimentaria

del país (Art. 305 y 307 de la CRBV) e impulsar el desarrollo agro-productivo, mediante la redistribución y aprovechamiento de la tierra de acuerdo a su vocación de uso y en concordancia con los requerimientos alimenticios del pueblo venezolano¹³.

Con esa finalidad y guiado por la necesidad de mejorar el desempeño de las políticas públicas se opta por un proyecto encaminado a lograr un desarrollo social digno, acorde con los derechos humanos y alcanzar el objetivo de disminuir la pobreza. Bajo esta concepción, y en el marco de una definición estratégica para contribuir al desarrollo social del país, según fuentes del INTI, la Misión Zamora avanza en la seguridad y soberanía alimentarias, revirtiendo progresivamente la crisis en el campo. Asimismo, se incorpora al pequeño productor a un sistema de producción y comercialización (enlazándose con la Misión Mercal). Se plantea como meta a cubrir, que en el mediano plazo el país se podría beneficiar del fortalecimiento de la producción agropecuaria, gracias a la consolidación de las cooperativas (con las cuales los/as productores/as del campo podrían acceder a tierras cultivables y entrar al aparato productivo nacional), a través de los fundos zamoranos¹⁴, incluyendo a los pequeños y medianos productores. En el aspecto social, se aspira a la estructuración de las familias campesinas y a construir un modelo de vida digno y diverso, que apueste al trabajo y a un futuro próspero.

¹³ Véase Gobierno Bolivariano de Venezuela (2006), “Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social para la Consolidación de los Fondos Estructurados”, Caracas, Ministerio de Agricultura y Tierras, INTI. (MIMEO).

¹⁴ **Fundos Zamoranos:** Son unidades individuales o colectivas socio productivas, localizadas en tierras con vocación agraria. Están enmarcados en un desarrollo agrícola sustentable en términos ambiental, técnico, social, económico y político. Se inician con la participación espontánea de las comunidades y avanzan con la instalación de una agenda compartida en la cual participan los productores, los campesinos y las instituciones comprometidas, de manera de garantizar el concurso de un conjunto de acciones y recursos de todos los componentes necesarios para el desarrollo rural. La creación de los Fondos Zamoranos, permite la integración de la investigación y la formación académica con el trabajo agropecuario. Fuente en el documento “Misión Zamora 2”, Caracas, INTI (MIMEO), 2006.

Muy al contrario de los procesos anteriores, actualmente se dispone de un gran aporte por parte del Estado para beneficiar a las personas carentes de tierras, lo cual se apoya a una legislación agraria de corte socialista basada en las posibilidades de convertir la reforma agraria en una estructura institucional efectiva.

Todo ello involucra un proceso, que sin pretender tener la última palabra en estrategias del desarrollo, ha despertado un enorme interés entre los observadores y analistas políticos, dentro de la cual se reinterpretan las categorías de la democracia y la participación directa de la ciudadanía en un proyecto estratégicamente concebido para mejorar progresivamente las condiciones de los campesinos agricultores en medio de circunstancias de espacio y tiempo.

Siendo así, el amplio apoyo recibido a este enfoque socioeconómico, ha derivado en el enorme capital político ostentado por el Presidente Hugo Chávez, quien a lo largo de su gobierno demostró su disposición a involucrar cantidades importantes de recursos materiales en la gestión pública.

Como se ha visto, el reconocimiento de los retos y oportunidades impresos en el nuevo diseño constitucional de Venezuela, permiten la protección social por el Estado, reglamentando los derechos de la ciudadanía y los factores condicionantes de las desigualdades. De hecho, la Constitución del año 1999, establece que el Estado debe desarrollar la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria y en el mismo sentido, afirma taxativamente que “el régimen latifundista es contrario al interés social”, definiendo el latifundio como toda extensión de tierra mayor a cinco mil hectáreas que esté ociosa e inculca y sea de sexta o séptima clase” (Bilbao, 2008: Pág.129).

El cambio del estatus formal se declara en reglamentos, leyes y ordenanzas, para obligar a las unidades ejecutoras del gobierno venezolano a fomentar las condiciones para transformar y elevar los medios democráticos destinados a fomentar mejores niveles de vida para los pobres. Un balance adicional sobre la realidad del agro venezolano, implica adecuar el socialismo democrático a nuestra realidad, lo cual ha sido intentado por el Presidente Chávez, con el apoyo de la Asamblea Nacional, donde prevalecen el esfuerzo y creatividad de un equipo de trabajo, que ha dictado importantes actos administrativos para crear, organizar y controlar esta política, siguiendo determinados planes para fortalecer la inclusión del campesinado en la nueva gestión pública.

Recuérdese asimismo, que “hasta mediados del año 2002 el proceso de recuperación de tierras para la actividad agrícola había avanzado apenas sobre 59 mil hectáreas. Luego hubo un salto considerable hasta llegar a casi 1,5 millón de hectáreas en el año 2003 y algo menos de 2 millones en el año 2004. Hasta esa fecha habían sido beneficiadas unas cien mil familias. Poco menos de la totalidad de las tierras entregadas era propiedad del Estado. Desde entonces la tendencia se afianzó, duplicando el área recuperada para el año 2006. (Bilbao, 2008: Pág.130).

En este sentido se exponen a continuación algunos de los *objetivos específicos* de las políticas públicas, emprendidos por el Ministerio de Agricultura y tierras, referidas actividades como las siguientes:

- Incrementar las áreas de siembra y producción de aquellos rubros históricamente deficitarios.
- Mantener y consolidar las áreas de siembra y producción tradicionales.
- Disminuir las importaciones de rubros agrícolas susceptibles de ser producidos en el país.

- Establecer mecanismos de cooperación intra e inter-ministerial para el uso racional y oportuno de recursos materiales y humanos.
- Operacionalizar las leyes vigentes en materia agrícola en el marco del Plan de Seguridad Agroalimentaria.
- Asegurar los recursos para el financiamiento de capital de trabajo (insumos, semovientes, agroquímicos), infraestructura productiva y maquinaria y equipos.
- Promover la organización de los productores agrícolas orientados hacia la consecución de los servicios básicos necesarios que permita mejorar la calidad de vida del habitante rural.
- Brindar capacitación, apoyo tecnológico y financiero al pequeño y mediano productor para mejorar la actividad agrícola y su comercialización; a través de las Instituciones correspondientes.(MERCAL)
- Identificar a cada una de las Instituciones corresponsables en el financiamiento de los componentes del desarrollo de las unidades socio productivo rural.
- Conocer el monto de la inversión a ser aportada por cada una de las Instituciones involucradas en cuanto a los sub-proyectos a establecerse.
- Generar acuerdos y/o convenios con Gobernaciones, Alcaldías, Sector Público y Privado y las Asociaciones que contribuyan a fortalecer el desarrollo de las unidades socio productivas rurales¹⁵.

Otra forma de entender estas políticas públicas, es en función del respeto por el espacio territorial común de las poblaciones indígenas, excluidos, explotados y expulsados de su hábitat natural desde tiempos coloniales. Frente a ello, en la actualidad y luego de muchos años se ratifican sus derechos, como pueblos originarios ancestrales y su carácter de

¹⁵ Informe sobre la Misión Zamora: gestión 2005. Caracas, Ministerios de Agricultura y Tierras, Instituto Nacional de Tierras, Diciembre (MIMEO).

poseedores legítimos de tierras en los predios de sus comunidades. Esto junto a otros derechos ampliamente reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana del año 1999, que buscan situar a Venezuela como un país de vanguardia en reconocer el carácter ancestral de los derechos culturales, territoriales y autonómicos del sector indígena. Como parte de este intento por revertir la situación, el propio Estado ha venido ofreciendo garantías tendientes a fortalecer este principio fundamental.

En orden a la consecución de los objetivos propuestos, en la aplicación de los medios institucionales concernientes a la eliminación del latifundio, la afectación de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la actividad agroalimentaria, la propiedad agraria especial o *sui generis*, entre otros, el Ejecutivo Nacional dicta el “Decreto de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario” (el 9 de Noviembre del año 2001), y en forma análoga se crean tres entes administrativos, bajo la forma de institutos autónomos. Dichos entes son el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), y la Corporación Venezolana Agraria (CVA), a los cuales se les atribuye un objetivo fundamental, más un conjunto de competencias que tienden a lograr dichas metas (Un análisis bien fundamentado sobre el tema se puede ver en Faría, 2005: Pág.94)

La reforma propuesta en el nuevo sistema institucional de tierras, no es una reforma agraria a secas para el acomodo opulento de la clase capitalista, anclada en la pura racionalidad económica, cuyos efectos negativos para el pueblo son repudiados. Se trata de una propuesta firme, entendiendo como dato significativo que “Solo el 14 % de la población venezolana vive en zonas rurales. A comienzos del presente siglo XXI un 5% de los propietarios tenía en su poder el 80% del área cultivable; el 75% de los campesinos contaba con el 6% de las tierras y más de 30 millones de hectáreas estaban improductivas” (Bilbao, 2008: Pág.129).

Por otra parte, y en virtud de ello, según información especializada, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) crea la figura de los llamados “Fundos Zamoranos”. Se trata de unidades colectivas socio productivas, localizadas en tierras con potencialidades agrícolas, cuyas actividades a realizar se enmarcan dentro del modelo de Desarrollo Endógeno para construir un nuevo modelo de producción social, fomentando valores de solidaridad comunitaria, impulsando la participación, la autogestión y generando un proceso de interacción entre los actores sociales comprometidos, mediante la justa y equitativa distribución y tenencia de la tierra, además de su uso racional, para garantizar la seguridad, la soberanía agroalimentaria y la producción de bienes y servicios¹⁶.

Estamos por lo tanto ante reformas inspiradas en transacciones solidarias, y subsidiarias, en donde los “agentes sociales de base”, tienen en el pueblo su principal protagonista, y no el mercado excluyente que condiciona el funcionamiento de la actividad agrícola. En su lugar el Estado es el garante de los derechos sociales, y el gobierno nacional el principal responsable y agente promotor fundamental de esa política pública que se promueve inicialmente a través de una **Carta Agraria**: instrumento jurídico, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), donde acredita la ocupación a campesinos o grupos de campesinos (Colectivo y Cooperativas), en espacios de tierras solicitado para desarrollar la producción agrícola – pecuaria.

De acuerdo a lo expresado al respecto, entre las justificaciones de carácter democrático está la voluntad de planificar bajo términos de conciencia ideológica esta perspectiva de desarrollo. De allí, el “principio de

¹⁶ Véase Gobierno Bolivariano de Venezuela (2006), “Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social para la Consolidación de los Fondos Estructurados”, Caracas, Ministerio de Agricultura y Tierras, INTI. (MIMEO).

la propiedad colectiva de los medios de producción que concede a las autoridades el poder de asegurar una autentica coherencia del espacio rural y, más aún, de emprender auténticas políticas de ordenación basadas en las unidades de producción agrícola” (Le Coz, 1976: Pág.330). En este caso se ha tratado de ser selectivos en la definición de la aptitud y la calidad de las tierras en cuanto a su uso, tipo de cultivos, y utilidad específica. Las metas esperadas parten asimismo de una **Declaratoria de Permanencia**: documento otorgado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante el cual se garantiza la ocupación a los campesinos y cooperativas, en tierras definidas establecidas según el artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Ambos instrumentos promueven las condiciones inmediatas de actuación del sector campesino, según lo previsto en el **Plan Zamora**, por medio del cual, según lo referido por Neritza Alvarado Chacín, se prevee la adjudicación de tierras y créditos agrícolas a los campesinos, así como maquinarias, obras de infraestructura, capacitación y asistencia técnica, con el propósito de transformar las tierras en unidades económicas productivas, e integrar todo ese proceso a las políticas agroalimentarias previstas en el plan de desarrollo nacional (Alvarado Chacín,2004:Pág.33).

Para tal fin se siguen las pautas de una revolución que tiene en Venezuela un carácter inédito, y la alternativa es guiada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), creado en enero del año 2002, siguiendo como hemos referido los principios de la nueva “Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario”. Esta última auspiciada a la vez por la “Ley Habilitante” del año 2001, que permitió al Presidente Chávez adelantar en forma concatenada otras leyes.

Al atribuir al instituto Nacional de Tierras lo relacionado con la propiedad agraria, la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, le confiere amplia competencia en procedimientos de **ADJUDICACION DE TIERRAS**, referidas según mandato expreso, al procedimiento establecido en el artículo 59, donde se prevé que las tierras propiedad del Estado podrán ser otorgadas en adjudicación a aquellos sujetos dedicados a la actividad agraria rural que demuestren aptitud para transformarlas en fundos productivos, mediante el título de adjudicación otorgado por el Instituto Nacional de Tierras.

Además está clara la existencia de las revocatorias, rescates y clasificación de suelos para uso agrícola. Por ello el INTI maneja un sistema de entrega de certificados de finca, atendiendo a criterios de vocación y uso de la tierra. Siendo estos los casos: 1) **Certificado de Finca Productiva**: Es el procedimiento establecido en el artículo 41 y siguientes. de la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, donde los propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrario que se encuentren en producción, deberán solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierras un Certificado de Finca Productiva, siempre y cuando esté ajustada a los planes de seguridad agroalimentaria.

En el segundo caso está la entrega de un **Certificado de Finca Mejorable**: procedimiento establecido en el artículo 49 y siguientes de la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, donde los propietarios u ocupantes de tierras con vocación de uso agrario que no se encuentren productivas, o estén infrautilizadas, deben solicitar por ante Instituto Nacional de Tierras un Certificado de Finca Mejorable, por medio del cual se comprometan a efectuar el mejoramiento y adaptación de su propiedad durante un término perentorio de dos (2) años.

De allí se derivan las **funciones principales del INTI**, que se pueden simplificar en líneas substanciales como las siguientes:

- 1) Adoptar las medidas que estime pertinentes para la transformación de todas las tierras ubicadas dentro de las poligonales rurales, en unidades económicas productivas.
- 2) Otorgar, renovar y revocar certificados de clasificación de fincas, en los cuales se determinará su condición de finca productiva, finca mejorable, o finca ociosa.
- 3) Determinar el carácter de ociosas o incultas que tengan las tierras ubicadas dentro de las poligonales rurales e intervenir las tierras que tengan tal carácter, de conformidad con lo previsto en el Decreto de Ley.
- 4) Conocer, decidir y revocar la procedencia de la adjudicación de tierras, así como otorgar títulos de adjudicación permanente.
- 5) Establecer proyectos de mejoramiento de las tierras adjudicadas que deben cumplirse a los fines de hacerlas productivas, con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional.
- 6) Iniciar de oficio o por denuncia el procedimiento de rescate de las tierras de su propiedad que se encuentren ocupadas irregularmente.
- 7) Ordenar la apertura de procedimiento de expropiación y solicitar la expropiación forzosa por ante el respectivo tribunal.
- 8) Llevar el Registro Agrario de tierras y aguas.
- 9) Levantar el censo de aguas con fines agrarios.
- 10) Expedir la Carta de Registro.
- 11) Las demás que le atribuyan las leyes y reglamentos (Véase el extenso trabajo de Soto, 2006, Tomo II: Pp.148-149).

En atención a los intereses nacionales y al fortalecimiento del nuevo modelo de la democracia, el INTI cumple un cometido esencial, en atención a las capacidades del gobierno nacional, definidas en la Ley del plan de la patria, buscando impactar en la justicia distributiva y la eliminación de la

vulnerabilidad humana. Ahora bien, en esta línea es fundamental destacar el criterio equitativo de la perspectiva socialista en las políticas públicas. Por ello en la lucha por el latifundio se parte de lo previsto en la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, donde se entiende por **Latifundio**, toda aquella tenencia de tierras ociosas o incultas, en extensiones mayores al promedio de ocupación de la región en la cual se encuentran ubicadas, en el marco de un régimen contrario a la solidaridad social.

Frente a ello la tarea de transformación de la gestión del uso y propiedad de la tierra, persigue asimismo el ejercicio óptimo del presupuesto, y según estos parámetros se requiere de una evaluación del avance en la calidad de vida y en el cumplimiento de los planes. Buscando consolidar el sentido de responsabilidad democrática, el compromiso revolucionario y el acceso no discriminatorio a los bienes agrícolas.

De acuerdo a lo señalado, el INTI prevee tres procedimientos donde están implícitos sociedad y gobierno, en un primer momento, pasando por los trámites institucionales luego, hasta la aprobación del caso. El proceso comprende:

- 1) **Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas:** es el procedimiento mediante el cual cualquier ciudadano o ciudadana podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva Oficina Regional de Tierras, cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o incultas.
- 2) **Procedimiento del Rescate de Tierras:** El Instituido Nacional de Tierras tiene derecho a rescatar las tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente. El mismo se puede iniciar de Oficio (ORT) o por denuncia.
- 3) **Procedimiento de Expropiación Agraria:** Este procedimiento se aplica a los fines de la Ley de tierras. Allí se declaran de utilidad pública o interés

social, las tierras con vocación de uso agrario, las cuales quedan sujetas a los planes de seguridad agroalimentaria de la población.

Es bueno hacer la salvedad que el Estado e instituciones como el INTI actúan sujetas a un marco constitucional general y legal particular, y con esta finalidad se suelen seguir unos trámites específicos. Así, mediante la solicitud interpuesta por ante la Oficina Regional de Tierras, el Instituto Nacional de Tierras, otorgara la debida “Autorización de Traspaso”, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la sustanciación del expediente. Cabe destacar que sobre la parcela y estructura productiva queda excluida cualquier negociación a terceros no autorizada por el INTI, a través de acta de transferencia.

Por otra parte la apertura hacia la democracia social está impulsada por una dinámica de acceso al capital natural (tierras), al capital financiero (inversiones, créditos, ahorro), al capital humano (educación y formación para el trabajo), etc. En términos de Clemens y Rubén, tomando en cuenta la heterogeneidad de las comunidades rurales, la apertura para la democracia local busca así generar una nueva dinámica de gobernabilidad que priorice el balance entre el acceso a los recursos (disponibilidad) y la distribución de éstos a través de sistemas locales de cooperación social e integración económica (Clemens y Ruben, 2001: Pág.69).

Bajo esos principios se propuso también el **Sistema de Asociaciones Rurales Auto Organizadas (SARAO)**, un plan que en principio se inscribe en la política agraria nacional, concebida como un proyecto alternativo de vida, sustentado en la economía social asociativa, que crea fondos colectivos estructurados agrícolas, agroindustriales y artesanales, enfatizando en la aplicación de los sistemas tropicales de producción agropecuaria, con la visión de construir redes de desarrollo. Así lo preveen la Constitución y la Ley

de Tierras. Cada SARAO es un hábitat biogenético, autónomo y circular, que presta servicios básicos y produce semi-intensivamente mayor cantidad, diversidad y calidad de alimentos y otros productos del campo en una extensión de 48 hectáreas. Procura garantizar la seguridad alimentaria de la propia cooperativa, contribuyendo al del Municipio, a través de la libre participación de 24 familias campesinas, funcionalmente organizadas, en una configuración espacial que al ampliarse (mediante la agrupación de cuatro, seis, ocho, diez o doce SARAOS) formarían las aldeas o agropolis cooperativas (Interpretación hecha por Alvarado Chacín, 2004:p.34).

Asumir la intervención social desde esa perspectiva para el INTI ha sido una tarea nada fácil, siendo que conforme a la ley este es el organo encargado de la redistribución de las tierras y la regularización de la posesión de las mismas. Por lo tanto competente para adoptar todas las medidas pertinentes para la transformación de las tierras ubicadas dentro de las poligonales rurales en unidades económicamente productivas; otorgar y revocar los certificados de finca productiva, finca mejorable o fincas ociosas; conocer, decidir y revocar la procedencia de la adjudicación provisional de las tierras, otorgar los títulos de adjudicación permanente; iniciar y decidir los procesos de rescate de las tierras de su propiedad que se encuentren ocupadas irregularmente y ordenar la apertura del procedimiento de expropiación y solicitar la expropiación forzosa ante el respectivo tribunal. El ejercicio de las competencias indicadas requiere de la existencia de un procedimiento, y por tanto determinan la existencia de una relación jurídico-procedimental; en la cual el INTI es parte necesaria (Faría, 2005: Pág.98).

No obstante la finalidad específica del INTI consiste por lo demás en ordenar, expandir, posibilitar e implementar esta política, apoyando las decisiones del gobierno en todo lo concerniente a los programas y proyectos inspirados en el bienestar general, la equidad social, la participación y el

protagonismo social democrático. Para ello se le ha encomendado la tarea del diseño, proceso, e instrumentación de los lineamientos afines con las actividades de la administración pública agropecuaria, el financiamiento, el reparto de tierras, conducir las expropiaciones, su legalidad, la movilización social en la dirección esperada, el control y la evaluación sobre la operatividad de las políticas públicas. Todo conforme a la redefinición del proyecto nacional, cuyo fin es el aumento de la producción, por medio de una agenda estratégica interna, sin la interferencia de políticas económicas neoliberales, restringiendo la autonomía del sector privado en áreas carentes de títulos de propiedad, bajo la óptica de una democracia más inclusiva.

Entretanto, la formulación de políticas públicas y la planificación gubernamental al propiciar garantías institucionales de ocupación, la transferencia de tierras, y cuanto concierne a la atención jurídica, crediticia, financiera, tecnológica, tendiente a mejorar la calidad de vida, y aspira consolidar o procurar mayor continuidad en los programas agrícolas, lo cual debe ser reflejado en mejores indicadores sociales para el medio rural.

En consecuencia, El papel del INTI en el crecimiento del sector agrícola está en función crear un mayor bienestar social, y en esencia tiene por misión el énfasis en la dinámica de las relaciones entre el Estado, el gobierno, y la comunidad campesina. Por otra parte, la responsabilidad social es un mecanismo mediante el cual el INTI busca establecer y mantener una agenda prioritaria para favorecer el desarrollo agrícola, en un marco complementario previsto en los objetivos trazados tanto por la CRBV, como con las leyes específicas que rigen la materia. Estas obligaciones comprenden una serie de programas y actividades estratégicas en base a una gestión que permita adelantar las políticas agrícolas con el seguimiento y evaluación requeridos.

Durante algún tiempo los indicadores mostraban que para el año 2006, un millón 800 mil hectáreas de tierras ociosas o baldías eran impactadas para ponerlas en funcionamiento en forma coordinada, con la asistencia del Estado, bajo el respaldo de sus respectivas cartas agrarias.

Simplificando, se podría decir, que el proceso político actual permite indicar que el Estado está cambiando en favor de los reclamos sociales, y la forma de gestionar la solución a los problemas compromete a los actores gubernamentales en la ruptura definitiva con el esquema de las rígidas jerarquías tradicionales, ordenando las relaciones sociales de abajo hacia arriba, dejando al margen todo cuanto signifique cambios de arriba hacia abajo.

De allí que el concepto de empoderamiento resulte cada vez más importante en el giro del gobierno hacia el desarrollo agrícola, integrando las distintas regiones de Venezuela en un proyecto factible. Este argumento revolucionario ofrece opciones efectivas, sin las interferencias observadas en los diseños e implementación de políticas anteriores, donde los prepositos de distribución de la tierra terminaban en una mayor concentración de la misma, y los recursos para la producción terminaban, por lo general, en corrupción.

Brevemente se podría señalar entonces que la agenda del INTI se mueve en una triple dimensión:

1. La ocupación de los espacios geográfico no determinados legalmente por los particulares.
2. La coordinación de los núcleos de producción agrícola.
3. La interdependencia entre zonas de producción, comercialización, y consumo.

IV.4.- Entre la violencia de la oligarquía y la urgencia de los cambios socioeconómicos

Vale la pena recordar que el tránsito hacia el cambio revolucionario no ha sido fácil. A decir verdad esto tiene múltiples obstáculos, y en el caso que nos ocupa tanto por los medios de comunicación, como los sectores oligárquicos han generado matrices de opinión tendientes a privilegiar a los latifundistas.

En la perspectiva de la teoría del conflicto se podría decir también, que las expropiaciones de las tierras con dudosa titularidad de la propiedad, el INTI realiza los respectivos procesos de avalúo para hacer los correspondientes pagos de las bienhechurías o bienes tangibles comprendidos en el interior de cada finca. Lo ideal es llegar a acuerdos que satisfagan las partes. Sin embargo se dan ciertas excepciones cuando propietarios ilegítimos no presentan documentación certificada, registrada y notariada, que pueda refutar los alegatos del INTI sobre la condición de ser tierras baldías, cuya tutela corresponde a la nación venezolana.

La mala difusión en el manejo de la propiedad rural y de la producción agrícola, ha generado matrices de opinión que incitan a la violencia de parte de quienes expresan sentirse afectados, y carecen de respaldo jurídico de los predios de las tierras ocupados. Incluso los efectos perversos creados por tan nefasta actitud, y llegan hasta la muerte de personas por sicariato a quienes actúen invadiendo predios productivos. Sin embargo la Ley ha sido muy clara, en manifestar que quien ocupe de forma violenta cualquier predio, no tiene derecho a los beneficios legales.

En el campo institucional y dentro de la Asamblea Nacional, de manera particular en la “Comisión de Desarrollo Económico”, se han hecho debates e

interpelaciones, bajo agendas de emergencia y reuniones permanentes, con la intención de impulsar un seguimiento pormenorizado de los hechos delictivos y la irregularidades inducidas por la tergiversación del verdadero sentido social de la política agraria.

IV.5.- Revalorización de la política agrícola en el marco del capital social

En América Latina, como se ha visto, hay un persistente y renovado interés por el problema de los excluidos, que permite analizar muy de cerca la confianza en la capacidad institucional del gobierno, apreciar las dimensiones éticas del desarrollo, y reflexionar acerca del llamado Estado de bienestar, la gobernabilidad de la democracia, el capital social, las políticas públicas, más recientemente las redes de promoción de la calidad de vida, y que opciones de la cultura campesina.

Ente sentido, La calidad de la democracia, el desarrollo humano, el rendimiento de la administración, la ética de la gestión, el desempeño gubernamental, y la nueva ciudadanía, ganan espacio en un proceso de frecuente reinterpretación de la política social, en el marco de lo neopúblico, y de la horizontalidad en las decisiones, líneas primordiales del capital social, un término que tiene una larga trayectoria en la antropología política, ha sido redescubierto por la sociología a principios del siglo XX y ha sido puesto en el escenario de la política actual para explicar el desarrollo de la sociedad a través del nuevo institucionalismo. En tal perspectiva, los trabajos de Pierre Bourdeau, James Coleman y Robert Putnam, valoran las actitudes de desconfianza hacia el quehacer de la democracia, en el marco de las relaciones entre gobernantes y gobernados..

En el caso venezolano se trata de una experiencia social positiva, si se considera que la economía debe ser una estructura dinamizadora del

desarrollo sostenible, junto al Estado, que apuntalen los espacios para la solidaridad y la cooperación, minimizando los conflictos, y aumentando la llamada asociatividad para beneficio del interés general. Esta perspectiva es contingente con la liberación para nuestro pueblo, ante las estructuras de un capitalismo arbitrario económicamente, amenazador políticamente y peligroso institucionalmente, por expresión en el papel de las base sociales y en su calidad, parte de lo que significa un desarrollo integral.

De conformidad al marco interactivo del capital social, el cuadro de las políticas agrarias cambia significativamente al tomar en cuenta la concepción de la nueva economía institucional, destacando la ética entre los valores centrales de lucha contra la pobreza. No obstante, el desarrollo ya no se debe considerar una oferta externa resultado de un libre juego de las fuerzas ocultas del mercado como se propugna dentro del paradigma neoliberal.

Por el contrario, se admite que las políticas y los programas de desarrollo deben tener como objetivo crear un entorno institucional favorable en las relaciones de cercanía y de proximidad entre el pueblo y los centros del poder político, que aumente la circulación de información, mejore el funcionamiento de los costos de transacción, y permita el acceso equitativo a los mercados. Por consiguiente, se presta la mayor atención a la generación de mecanismos que permitan la integración y cooperación de la población rural y la integridad de los sistemas de gobernabilidad de las comunidades locales (Clemens y Ruben, 2001:Pág.72).

En su dimensión amplia, se trata de un tema que hoy recorre el mundo subdesarrollado, de manera específica desde la década de los años ochenta y noventa del Siglo XX, cuando la crisis de la economía liberal, los intentos de achicamiento del Estado, las deficiencias de los partidos políticos, la incompetencia de los gobiernos en la generación y adelanto de políticas

públicas, más otros factores como el desempleo, la marginalidad, la exclusión educativa, la violencia urbana, la corrupción, etc., ponen al descubierto las deficiencias de una democracia de orientación exclusivamente electoral, deficitaria en sus responsabilidades de cumplir con las promesas sociales, y desprovista institucionalmente de los criterios participativos, reclamados durante décadas.

No obstante el núcleo del capital social es una nueva forma de interpretar la política para las mayorías a la luz de flujos participativos, o más propiamente en redes sociales de apoyo comunitario, que facilitan las acciones de beneficio mutuo, con el objetivo de generar apoyo colectivo a proyectos determinados por las iniciativas de las entidades más cercanas a los ciudadanos, asumiéndolos con responsabilidades compartidas sobre el uso de los recursos públicos.

Entonces se deduce de lo expuesto, que la idea está en redefinir los criterios sobre los cuales se valora la funcionalidad de la democracia participativa y protagónica, y para que la política sea exitosa debe lograr resultados satisfactorios, superando las barreras de exclusión. Sencillamente con el nuevo régimen social de las tierras, se trata de ir más allá de las justificaciones de una democracia de pactos elitistas y transacciones restringidas por murallas burocráticas, que han generado un desorden administrativo en perjuicio de los buenos procedimientos y en beneficio de las oligarquías discriminantes de los derechos agrarios de mayorías.

IV.6.- Política agrícola y su atención en los Foros Sociales

Las políticas agrícolas se vienen discutiendo en audiencia mundial y entre las metas comunes destinadas a la protección de los intereses de los pobres, o a mejorar sus condiciones de acceso a bienestar y productividad

ante situaciones de penuria e injusticia, se discute en los grandes Foros Mundiales la problemática agrícola de los pueblos. Bajo estos espacios de audiencia, el gobierno revolucionario en Venezuela promueve proyectos sustentados en grandes inversiones, entendiendo que la situación plantea cambios revolucionarios en profundidad, frente a las débiles políticas prevalecientes en el pasado, cuando las prioridades del Estado y de la política se ponían al lado de las minorías privilegiadas.

IV.7.- La opción distributiva centrada en la gente

Algunas críticas a la administración pública venezolana señalan la poca atención y el apoyo a los pobres. La distancia del Estado respecto de la realidad agrícola y su cercanía con el poder de fuerzas oligárquicas, que han llevado al pueblo a reaccionar en contra de los actores ubicados en los niveles de decisión excluyentes, y quienes establecieron divisiones tendientes a marginar y a excluir a vastos sectores de la población, poniéndolos muchas veces en condiciones límite de supervivencia. En ese entorno de contradicciones y en un Informe Sobre el Desarrollo Mundial (2000-2001) se advierte acerca de la deplorable distribución del poder, siendo que, las desigualdades económicas reforzadas por barreras sociales hacen que a las personas les sea especialmente difícil salir de la pobreza. Cuando las distinciones sociales entre los grupos se utilizan para perpetuar las desigualdades en el acceso a los recursos materiales, se crean rígidas jerarquías sociopolíticas que constituyen poderosas barreras sociales expresamente destinadas a mantener la condición de las personas más acomodadas. Estas limitaciones imponen limitaciones de consecuencias catastróficas (Banco Mundial, 2001: p.123)

Sin embargo, y dentro del aprendizaje revolucionario se viene logrando que la sociedad venezolana participe en proyectos sociales, emprendiéndose

actividades de control de gestión por las propias comunidades, a través del poder popular y los Consejos Comunales. Lo crucial está en promover responsabilidades e incentivar al pueblo para un mejor aprovechamiento de los recursos, evitando con ello su desvío hacia fines diferentes a los previstos en la propuesta original de la agricultura.

De igual forma, el compromiso con la participación exige incluir una estrategia de responsabilidad hacia el desarrollo auto sostenido centrado en la gente, además de los cambios en la forma de pensar la planificación más allá de los parámetros técnicos y burocráticos, con el objetivo de generar políticas flexibles y abiertas, tendientes hacia una vida mejor, lo cual se puede lograr a través de un sistema de redes horizontales de trabajo popular conjunto, que permita un conocimiento apropiado de los problemas, la administración y la evaluación de programas sobre zonas sociales vulnerables. Considerar así el desarrollo social implica reforzar la concepción de la economía agrícola, dándole sentido socialista.

Ahora bien, ello implica reafirmar lo que en términos sociológicos se llama “consenso básico”, o política dedicada a generar confianza, responsabilidad, eficacia gubernamental, disminución de las barreras de transacción, efectividad en los resultados de la política, y mayor compromiso por el interés general. Todo esto en medio de valores comunes internalizados, donde la dignidad humana y el respeto por la subsistencia de los otros se sustente en el consentimiento democrático. De manera que para una mayor prosperidad se debe dar cabida a las demandas sociales, fomentando mejores respuestas a los problemas de los pobres, de los marginados, en correspondencia con las expectativas de un mejor calidad de vida.

La promoción de la calidad de vida vista así, supone la formulación de políticas públicas dirigidas a romper las murallas de la inequidad, y proporcionar una mayor integración social. Enarbolar estas banderas implica, como dice D'Elia, un esfuerzo colectivo que busca preservar la autonomía de las colectividades para hacer efectivo los derechos sociales, entendiendo por autonomía la capacidad de decidir y materializar proyectos de vida de acuerdo con necesidades, lo cual dependerá del acceso y distribución equitativa de oportunidades de tener una buena calidad de vida. Promoción significa elevar o mejorar las condiciones de vida, iniciar o adelantar una cosa procurando su logro, es la acción o efecto de moverse hacia la superación (D'Elia, 2002: Pág. 9).

Conforme a la teoría de la organización, la promoción de la calidad de vida es posible con buenos arreglos institucionales, acatando los parámetros relativos a un desarrollo transectorial, apelando a un arqueo de necesidades, más una lectura de prioridades y atacar con mayor participación los puntos donde las inequidades socioeconómicas son más evidentes. Este planteamiento debe traducirse en una transformación revolucionaria de la realidad existente en el campo.

IV.8.- Política agrícola y desarrollo sustentable

El nuevo modelo socioeconómico venezolano, por otra parte, persigue transformar la democracia y generar actitudes de corresponsabilidad, buscando un desarrollo sustentable, destinado a acompañar el potencial agrícola y la articulación de las cadenas productivas, bajo el equilibrio territorial y ecológico, ofreciendo mayor seguridad en los recursos para las generaciones futuras, garantizando el autoabastecimiento de productos del campo.

El desarrollo sustentable deriva de iniciativas mencionadas en los Foros Mundiales sobre Medio Ambiente y desarrollo, así como de las llamadas “Agendas 21”. La idea nuclear está en las posibilidades de crear estrategias para un adecuado acceso, explotación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, adecuándolos a la planificación, con las expectativas integrales e interdependientes de cogestión para la satisfacción de las necesidades humanas en tiempo presente y futuro, acentuando la coordinación de decisiones gubernamentales, medio ambiente natural y humano, prevención y protección estatal, solidaridad, equidad y participación social, integridad de la biodiversidad y homogeneidad de la organización territorial en el espacio urbano y rural.

En cuanto a los impactos ecológicos de la agricultura se expone dentro del desarrollo sustentable, que la inserción de la actividad agrícola en cualquier ecosistema, implica un cambio importante en el uso de la tierra, que suele originar una amplia variedad de impactos ecológicos. Esto es lo que ha ocurrido en el planeta durante los últimos 10.000 años, desde que se inició la agricultura (Gabaldón, 2006: Pág.253).

De manera que la transversalidad en temas como los de: el ambiente, la sustentabilidad, la territorialidad, la producción agrícola, el crecimiento económico, la gestión pública, la coordinación gubernamental, el marco jurídico regulativo, la ciudadanía, la conciencia colectiva y el bienestar social, son componentes ineludibles del proyecto social, económico y político común del desarrollo sustentable.

Ahora bien aquí cabe un señalamiento ineludible, recalcado por Arnoldo José Gabaldón, referido al hecho de que, es inconcebible un desarrollo que lleve la calificación de sustentable en el cual la agricultura juegue un papel fundamental, desde la perspectiva ecológica, pero también social y económica (Gabaldón, 2006: Pág.245). Analizada así esta cuestión, en las

primeras décadas de la reforma agraria aún no se avizoraban los altos costos del deterioro y el mal uso de los recursos naturales.

Recientemente y debido a las presiones del desarrollo impulsado por el capitalismo y la industrialización de los países de alto consumo, ha aparecido una gran preocupación por lo ecológico y el impacto de lo económico sobre la naturaleza y el ambiente. “Nuestro Futuro Común” (1987) informe publicado por la organización internacional del Medio Ambiente y Desarrollo, define el desarrollo sostenible como “aquel capaz de cubrir las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Citado en Paniagua y Moyano, 1998: Pág.154).

Luego de numerosas interpretaciones, los analistas del tema, coinciden en señalar la complejidad propia del concepto. La dificultad propia para hacerlo operativo radica en el hecho de que los fenómenos integrantes de la sostenibilidad no son invariables. Cambian conforme se transforman las demandas e interacciones entre los grupos que compone una determinada sociedad (Paniagua y Moyano, 1998: Pág.156).

En este caso podríamos proponer en consonancia con la propuesta presente del desarrollo sostenible, los aspectos referidos al concepto, los valores de la democracia, más la gestión adecuada de la propiedad de la tierra y la distribución equitativa de sus beneficios con perspectivas futuras. Este es un enfoque “sociocéntrico” de derecho social tendiente a regular la actividad agrícola, rompiendo los eslabones de la cadena de explotación capitalista del latifundio y la oligarquía rural.

Una agricultura sustentable es, entonces, aquella en que la producción de bienes agrícolas se sucede de manera que la base de recursos naturales utilizada se conserva o se mejora, que es socialmente aceptable puesto que

los diferentes actores que participan en el proceso la conocen, aceptan, y valoran; y que constituye un negocio remunerativo para los diferentes actores del circuito agroalimentario, comenzando por los productores hasta llegar a los consumidores (Gabaldón, 2006: Pág.264). La opción está en garantizar buenos niveles sociales de cobertura y acceso a los bienes del agro, en medio de un sistema inclusivo propio de la democracia horizontal.

De allí que la discusión en torno a la sustentabilidad de la agricultura, implica adherirse a un concepto que, como en el debate sobre los modelos de desarrollo, viene a reconocer, por un lado, el grave deterioro producido en la calidad y cantidad de los recursos naturales y ambientales, y por el otro, la necesidad de una actuación de carácter político para evitar, o al menos mitigar, tales efectos (Paniagua y Moyano, 1998: Pág.160).

Una perspectiva explícita sobre esta materia es la de Gips (1994), quien establece cuatro criterios o metas de sustentabilidad en la agricultura: 1) ser ecológicamente sana, 2) económicamente viable, 3) socialmente justa y 4) tener escala humana¹⁷. Adicionalmente el desarrollo sustentable, en consecuencia, se plantea en la política actual como un reto en las agendas de poder, para tener un desarrollo rural integral. Ahora bien, han sido las oportunidades desaprovechadas del entorno natural, razones para señalar las necesidades de un crecimiento armónico entre lo económico, lo ambiental, y el componente social. Considerando esos planteamientos, la relevancia está en promover un desarrollo sostenible de la agricultura, en correspondencia con una idea de la justicia social para el campo, más allá de la discriminación que termina en políticas equivocadas.

El cuadro crítico viene dado por la sobreexplotación de la naturaleza, el uso irracional de los recursos y la inequidad distributiva, factores aliados a la

17

espiral capitalista y al interés sumergido en la ambición desmedida de las empresas privadas y sus expresiones de ganancia, consumo, la falta de control institucional, el énfasis en la competencia, el exceso de libertades de las empresas transnacionales y la subyacente apropiación indebida de los factores de producción, llámense tierra, mano de obra, materias primas, etc.

En líneas generales, hoy somos testigos de la respuesta revolucionaria que está dando el gobierno venezolano, a través de una agenda que sin privilegiar el crecimiento económico lineal, se sitúa a la vanguardia entre los demás países de América Latina en el rescate de la calidad de vida, llevando la voz de los excluidos y reclamando una salida para los perdedores en el juego tenebroso del capitalismo desmedido. Dentro de este contexto el concepto de sostenibilidad agrupa componentes que desde la perspectiva de Sfeir-Younis, se refiere a: instituciones, recursos humanos, compromiso gubernamental, organizaciones comunitarias/sociales y diseño de programas (Sfeir-Younis, 1998:Pág.28).

Entre tanto, la nueva manera de pensar la política sostenible debe situar el incentivo estatal en los propios trabajadores del campo, haciéndolo partícipes directos de sus propias unidades productivas, y democratizando la función social de la producción. La innovación está en la cooperación y en la creación de una conciencia colectiva de carácter socialista y de igualdad de clases que postula, además, la eliminación de las injusticias derivadas de las relaciones de explotación.

Un elemento adicional reside en el proyecto conocido en nuestro medio venezolano como **Vuelta al Campo**: que persigue disminuir los desequilibrios territoriales existentes en nuestro país, modificando el patrón de poblamiento y articulando un modelo de desarrollo sostenible, que permita a las poblaciones de los grandes centros de producción alcanzar un adecuado

nivel de vida. Esto implica revertir una visión de desarrollo que generó un proceso de ocupación poblacional del país con tendencia hacia la concentración de la urbana de las actividades productivas, en contraste con una gran extensión semi despoblada representada por el resto del territorio rural, aun cuando existe un enorme potencial de recursos.

Asimismo, el proyecto busca apoyar la producción agrícola primaria y agroindustrial, con énfasis en las prácticas conservacionistas y en la reactivación, transformación y dinamización de las cadenas agro productivas que propicien la competitividad, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del medio rural¹⁸.

El proyecto de Vuelta al Campo busca entonces disminuir los desequilibrios territoriales existentes, modificando el patrón de poblamiento y articulando la producción agrícola a un modelo de desarrollo sostenible. Lógicamente todo proceso de transformación despierta polémicas, pero el alto grado de compromiso moral de nuestro pueblo ha permitido al gobierno socialista que se construye en Venezuela, sobrellevar las adversidades ante las posiciones conservadoras y despóticas de las clases dominantes. Las estrategias de la Revolución Bolivariana, para el campo están orientadas a mejorar la producción, frenar la dependencia agrícola, y reconstruir el tejido social para hacerlo más equitativo, a la par de “sembrar el petróleo” para la soberanía agroalimentaria, entendida esta como el derecho del pueblo venezolano a definir sus propias políticas, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional.

No obstante, desde comienzos de 2008 el gobierno afrontó el desabastecimiento de alimentos alentado por la oposición. Entre enero y abril de aquel año fue necesario destinar alrededor de 2.000 millones de dólares a

¹⁸ Interpretación hecha con fuente en el documento “Misión Zamora 2”, Caracas, INTI (MIMEO), 2006.

comprar productos alimenticios en el exterior, un 46% más que en el mismo período del año 2007. Chávez volvió entonces a imprimir velocidad a la revolución agraria e introdujo la noción de *empresas socialistas* en el campo, como respuesta efectiva complementada con una reserva de alimentos, antes inexistente, y la expropiación de fincas ociosas en el occidente del país, por alrededor de 2.400 hectáreas. (Bilbao, 2008: Pág.134).

www.bdigital.ula.ve

V.- CONCLUSIONES

El estudio de la política de desarrollo agrario es sin duda un tema complejo por sus dimensiones geopolíticas, sus elementos económicos y sus implicaciones políticas y sociales. Conforme a los aspectos señalados y en función de los objetivos planteados en la investigación es posible decir que el aporte principal del trabajo está en formular alternativas de direccionalidad institucional y política para darle sentido y viabilidad a un nuevo sistema de la producción nacional en el campo venezolano.

Llegados hasta aquí las conclusiones dejan sentada la idea de que la política pública de desarrollo agrario es un factor que genera discusión permanente por sus dimensiones simbólicas a favor de un nuevo modelo de democracia participativa y protagónica, por el estilo revolucionario que obliga a cambiar de estrategia para diferenciarla de las políticas tradicionales de la Cuarta República, por su dimensión sustantiva que obliga permanentemente a revisar el contenido para un conocimiento sincero de los problemas y alternativas, y por sus dimensiones prácticas y operativas vinculadas a las condiciones de ejecución en la gestión revolucionaria.

Siendo así, el trabajo permite, en síntesis, demostrar que la política de desarrollo agrario en Venezuela es objeto de modificaciones frecuentes, según las condiciones del tiempo político y las expectativas de cada régimen de gobierno por darle sentido a la idea del desarrollo. Como se sabe, en Venezuela estamos en un proceso de cambios desde el año 1998, de tránsito hacia el modelo socialista, donde lo sustantivo, como diría Mézáros, es la posibilidad de transferirle a las mayorías no sólo la posibilidad de participación, sino a la vez la toma de decisiones y la responsabilidad que éstas involucran.

En este plano de pensamiento, las coordenadas políticas de la Revolución Bolivariana permiten dar un salto hacia adelante en la búsqueda por llenar de contenido social los códigos constitucionales y legales aprobados en estos 16 años del proceso político. Ello en función de legitimar un sistema de acceso a la tierra más igualitario y equitativo, con la expectativa adicional de avanzar hacia una política de seguridad alimentaria.

Por otra parte la relevancia del tema permite aseverar en la investigación una afinidad entre la acción revolucionaria dirigida hacia el sector agrario y la tarea de luchar contra la pobreza y el hambre. Algunos datos confirman lo antedicho, veamos: antes del gobierno de Hugo Chávez en 1998, el 21% de la población estaba desnutrida, ahora Venezuela tiene una red de distribución de alimentos subsidiados con tiendas de comestibles y supermercados. En 1980 se importaron el 90% de los alimentos, hoy el porcentaje es menor al 30%. Se han entregado 454.238 créditos a productores rurales. Cinco millones de venezolanos reciben comida gratis, cuatro millones de los cuales son niños y niñas en las escuelas y 6.000 comedores alimentan a 900.000 personas. La reforma agraria y las políticas agrícolas han aumentado la oferta interna de alimentos. El resultado de todas esas medidas de seguridad alimentaria es que la desnutrición es hoy tan sólo de un 5%, y que la desnutrición infantil, que alcanzó el 7,7% en 1990, hoy es del 2,9%. Se mire como se mire, se trata de logros sociales de enorme trascendencia para la salud de la población¹⁹.

En este sentido el gobierno revolucionario ha buscado aprovechar los recursos de la renta petrolera para orientar una inversión considerable hacia el financiamiento del desarrollo agro productivo y la seguridad alimentaria.

¹⁹ Fuente: <http://www.minci.gob.ve/2013/01/los-logros-de-chavez-y-la-revolucion-bolivariana/>

Tal vez los resultados en esta materia no son del todo satisfactorios, pero la Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, ha venido reconociendo los avances del gobierno revolucionario en su tarea de luchar contra el hambre, y es que las políticas de acceso y subsidios a los alimentos a través de medios de organización distributiva y cadenas solidarias de comercialización también impactan positivamente a través de los 22 mil puntos de abastecimiento a lo largo del territorio nacional, atendiendo a unos 20 millones de personas. En el monitoreo de la FAO destaca entonces la disposición del gobierno revolucionario a generar estrategias de largo alcance para buscar soluciones a los problemas de alimentación y la subnutrición. En medio de este panorama en el año 2015 el Presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió el reconocimiento que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) otorga a Venezuela por estar dentro del grupo de los 15 países que han realizado progresos excepcionales por reducir la prevalencia de la subnutrición.

Durante la 38 Conferencia de la organización, que tuvo lugar en Roma este año 2015, Italia, el director general de la FAO, José Graziando da Silva, destacó el compromiso político de esas naciones para lograr resultados tangibles, destacándose que Venezuela está entre los 15 países que han realizado progresos excepcionales por reducir la prevalencia de la subnutrición del 13,5%, en el período 1990-1992, a menos de un 5%, durante el lapso 2010-2012, con lo cual se logró la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referentes al hambre. Además recuérdese como parte de las Metas del Milenio, que tienen como objetivo erradicar el hambre y la pobreza en el mundo, 139 naciones se comprometieron a bajar a la mitad, entre 1990 y 2015, los números de personas con hambre. Sin embargo, solamente 38 países lograron la meta en el mundo y Venezuela está dentro del grupo de naciones que lo hicieron extraordinariamente.

Ahora bien, en esta fase final de la investigación es necesario acotar además, que para el gobierno nacional la situación de las políticas de desarrollo agrario no ha sido tarea fácil, porque el Golpe de Estado del año 2002 fue engendrado en el pretexto opositor de las leyes habilitantes del año 2001, conformadas por los 49 decretos con rango, valor y fuerza de ley, promulgados por el Ejecutivo Nacional, donde aparecía la “Ley de Tierras y Desarrollo Rural”.

Lógicamente todo proceso de transformación despierta polémicas, pero el alto grado de compromiso moral de los actores del proceso político, ha permitido al gobierno revolucionario sobrellevar las adversidades ante las posiciones conservadoras y despóticas de las clases dominantes. Un ejemplo clave está en la capacidad para luchar en medio de la corriente de una historia jalonada por contradicciones capitalistas. En este sentido la dialéctica de la historia nos indica la necesidad de desplazar las formas de relaciones económicas capitalista y transitar hacia formas humanas socialistas, por lo cual el pensamiento y el legado de Carlos Marx, dentro del cual se enmarca la conciencia y la ideología transformadora de las relaciones sociales de producción, lejos de estar muerto, está más vivo que nunca, siendo que dentro de la arquitectura liberadora de su pensamiento se inscriben alternativas políticas derivadas de su portentosa visión ideológica contra la alienación, fuente y parte de una lógica destinada a transformar lo social, a superar las necesidades humanas, a eliminar las desigualdades, y a alejar las dicotomías capitalistas que llevan a las injusticias sociales.

En medio de esta visión de cambio sobresale la guerra revolucionaria contra el latifundio, iniciativa fundamental para contrarrestar el poder despótico de la clase dominante y sus intereses sobre la propiedad de la tierra, representada en la burguesía agraria, que aplica sus propios códigos de dominio para el usufructo de la renta, aumentar su plusvalía, generar acumulación de capital y ahondar el autoritarismo en las relaciones sociales.

En este sentido y valorando este problema como un asunto social, no cabe la menor duda que el latifundio por su estructura y contenido llena de miserias y frustraciones a los trabajadores del campo, específicamente a quienes no son dueños de los medios de producción. Pero a contracorriente el gobierno bolivariano ha venido planteando una lucha sin tregua contra el latifundio, apelando constantemente a las promesas de justicia social, previstas en la Constitución del año 1998 y en las leyes especiales que rigen la materia. Todo en la búsqueda también de eliminar la violencia rural y fomentar la capacidad liberadora de nuestro pueblo. Esta, finalmente, es una tarea urgente frente a las formas de explotación y de producción capitalistas, que bajo el barniz oligárquico se convirtieron en reliquia de la burguesía agraria y terrateniente.

En esta investigación se deja sentado también que en materia de la política del desarrollo agrario las medidas a considerar deben tender por otra parte a fortalecer los ejes de desarrollo, en función de profundizar la formación de una nueva cultura de poblamiento, donde el proyecto “vuelta al Campo” sea una estrategia estructural para ayudar a disminuir los desequilibrios poblacionales en los territorios, lo cual se concatena a un patrón de poblamiento necesariamente articulado geopolíticamente a un sistema de producción agrícola de nuevo tipo, en medio de un modelo planificador del desarrollo sostenible. Siendo así, las debilidades que afectan la política de desarrollo agrario en Venezuela deben ser superadas, empezando por sincerar la cultura del desarrollo rural y las condiciones deformantes bajo las cuales la economía petrolera impacta en la producción de alimentos.

Otras de las disyuntivas para avanzar está en mejorar la producción, frenar la dependencia agrícola, y reconstruir el tejido social para hacerlo más equitativo, a la par de sembrar el petróleo para cosechar la verdadera

independencia y consolidar la soberanía agroalimentaria, entendida esta como el derecho del pueblo venezolano a definir sus propias políticas, así como a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional. A tono con ello se hace necesario revisar los programas de asistencia técnica al campesino y fortalecer las capacidades de la Gran Misión Agro-Venezuela en todos los espacios del territorio nacional.

Medidas adicionales a resaltar en la fase final de la investigación es el tema de los agroquímicos y la regularización de los precios de los insumos, que también son utilizados por algunos sectores dentro de la llamada guerra económica. Un elemento concatenado en la superación del problema se vincula al decreto de *expropiación de Agroisleña*, empresa capitalista y monopólica, que llegó a convertirse en un instrumento de control para subordinar el trabajo de los productores a sus intereses corporativos. Agroisleña demostró tener además fallas serias en las políticas de precios y falta de control biológico de los agroquímicos. En su lugar la Revolución Bolivariana ha creado las tiendas AGROPATRIA, cuyos alcances y funcionalidad apenas comienzan a mostrarse, pero requiere un relanzamiento efectivo según las capacidades nacionales para producir y distribuir insumos.

Conforme a estas necesidades la alternativa es construir un modelo de auto sustentabilidad para el agro venezolano, y por esta razón el gobierno nacional ha considerado necesario romper las ataduras del fetichismo capitalista y orientar así la gestión de las políticas de desarrollo hacia un modelo agroproducente accesible y orgánico, que permita garantizar la limpieza ecológica y tener insumos biológicamente limpios, que deben ser incluidos en el accionar de los productores del campo. Obviamente para tener un desarrollo socialista serio es necesario el cambio de conciencia, pasando a la ofensiva contra la avaricia del capital que hace de las cadenas de comercialización su principal forma de control a los productores del

campo, y fundamentalmente contra el “uso de las armas melladas que nos legara el capitalismo”, como decía el Ché Guevara.

De igual manera es necesario resaltar que a los presidentes Hugo Chávez y más recientemente a Nicolás Maduro les ha correspondido, desde el año 1998, emprender una tarea formidable, en medio de condiciones adversas y muy de la cultura capitalista, como es luchar contra el latifundio, sobreponerse a la guerra económica, contrarrestar el tráfico ilegal de alimentos, controlar la desviación de créditos por parte de sectores inescrupulosos hacia otras áreas de la economía, así como sobrellevar las presiones de los grupos de poder que buscan imponer a toda costa los precios de los productos de primera necesidad. De igual forma controlar la especulación desmedida en medio de los eslabones finales de las cadenas de comercialización y distribución de alimentos.

Sin embargo las políticas de gobierno han sido planificadas para el cambio de esa cultura y dar un giro radical, en medio de la iniciativa de promover nuevas formas de conciencia social encaminadas a abordar los problemas en forma integral, en medio de una dinámica compleja ciertamente, pero guiada por un Plan Nacional potencialmente llamado a cambiar la realidad y a modificar el rumbo de las prácticas del desarrollo con vistas a llenar las expectativas del buen vivir del pueblo venezolano.

En atención a las medidas de inclusión social las políticas de desarrollo agrario deben tener presente además el papel de los pueblos originarios, sobre todo en cuanto a las consecuencias de las decisiones y las áreas a impactar, toda vez que muchas acciones pasan por alto su especificidad cultural, y su desarraigo patrimonial de los territorios rurales donde tradicionalmente han permanecido. Desde esta perspectiva se sabe además que existen algunos pueblos indígenas ubicados en regiones carentes de

servicios elementales y donde prevalecen necesidades básicas insatisfechas, altos índices de violencia y de pobreza.

Desde esta ángulo de los hechos, es necesario generar estrategias de gobierno contra la discriminación y el neocolonialismo, destinadas a preservar el conocimiento indígena ancestral de la agricultura y a reafirmar las condiciones de dignidad que se han ido perdiendo ante la invasión capitalista que impone un sistema de relaciones sociales basado en la dispersión sociocultural que oprime y desarraiga territorialmente a este importante sector social.

Desde otra perspectiva el tema agro productivo busca ser fortalecido mediante la creación de conocimientos, en medio de la transformación del proyecto científico nacional, donde se combinan los niveles tecnológico, productivo y educativo, pero a la vez donde se exige que el progreso y el desarrollo dejen de ser simples etiquetas de marca capitalista para el mercadeo indiscriminado y la comercialización irresponsable, y en su lugar se conviertan en parte de la edificación socialista de la ciencia, para consolidar la nueva visión del desarrollo.

En este marco de acción y del conocimiento experto, la Revolución Bolivariana se plantea democratizar la investigación como una necesidad vital, donde las políticas agro productivas en esta parte del trópico no sean variables abstractas para cerrar la brecha de la producción de alimentos, sino elementos de una tendencia de políticas inteligentes dirigidas hacia un nuevo estilo de alimentación y de vida, que utilizando nuestras potencialidades internas de investigación y desarrollo trace científicamente el camino para ofrecer nuevas formas de conocimiento aplicable a las áreas agrícolas como establecen las políticas públicas, estimulando la formación de una cultura de independencia socio productiva, para de igual manera

fortalecer la conciencia nacional, en el abordaje organizado y eficiente de problemas urgentes como los referidos al aprovechamiento racional y efectivo de la energía, la preservación del medio ambiente, las alternativas frente al uso indiscriminado de los agroquímicos, y el cuidado con las semillas transgénicas y manipuladas genéticamente.

Recuérdese que ideológicamente el mismo es un tema vivo en la Doctrina Social de la Iglesia. La reciente Encíclica del Papa Francisco, dirigida a todos los hombres, y no solo a los miembros de la Iglesia católica, plantea entre sus desafíos urgentes la necesidad de preservar el medio ambiente. Sus críticas acertadas manifiestan el comportamiento suicida del sistema económico capitalista mundial. Desde este punto de vista, el Papa Bergoglio expone la urgencia de avanzar en una “valiente revolución cultural”.

La perspectiva del Papa está en mirar la realidad social campesina de otra manera, apelando a un cambio de costumbres y al diseño de políticas públicas destinadas a crear energías sostenibles. En este orden de exigencias Francisco plantea la necesidad de abrir los espacios de decisión política al tema de la agricultura sostenible y diversificada, además de contribuir a desarrollar energías renovables y poco contaminantes, una mayor eficiencia energética, una gestión más adecuada de los recursos forestales y marítimos, asegurar a todos el acceso al agua, etc.

Ahora bien, un modelo de vida socialista si es homologable a un buen sistema agro productivo con carácter liberador, el cual debe encuadrar la producción agraria en un sentimiento colectivo, entendiendo de antemano la importancia de emprender cambios en profundidad para sobreponerse a los rezagos unidimensionales del capitalismo clasista, transformando todo el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos, y superar las

contradicciones entre los objetivos institucionales de la seguridad alimentaria y la realidad de la producción e importación de productos agrícolas.

Ello debe ser parte de un plan firme y guiado por el imaginario de una conciencia social sabiamente comprometida con un nuevo modelo de país, con los principios de una agricultura sustentable, con el proyecto civilizatorio bolivariano, con el renacer de la libertad social no economicista, con la independencia, la soberanía y la justicia, pero sobre todo con las expectativas humanistas donde debe encuadrar la democracia participativa y protagónica.

Ese es el verdadero compromiso revolucionario y hacia allá se dirige la dialéctica socialista del proyecto emancipador, cuya meta está en desatar los nudos de la cultura rentística petrolera y trascender hacia la cultura del trabajo productivo diversificado y menos burocratizado. Ese debe ser el camino hacia el verdadero socialismo, un modelo político que como ha dicho Fidel Castro, en última instancia, es creación del hombre nuevo, el ciudadano del siglo XXI: un hombre que tenga horror a los lugares comunes y a la arrogancia, que entienda a la libertad como algo inherente a la revolución, que sea enemigo del esquema y amante de la herejía, crítico y soñador (Borge, 2011: Pág.9).

VI.- BIBLIOGRAFIA

- Alvarado Chacín, N. (2004). "Gestión social, pobreza y exclusión en Venezuela a luz de las Misiones Sociales. Balance y perspectivas (2003-2004)", *Revista venezolana de análisis de coyuntura*, Vol./núm.2, Caracas, Instituto de Investigaciones económicas y Sociales Dr. Rodolfo Quintero, FACES, UCV, Julio-Diciembre, Pp. 25-56.
- Ambrosoli, M. (1988). "Agraria, cuestión", en Norberto Bobbio y Nicola Matteucci. *Diccionario de política*. Suplemento. México, Siglo XXI, pp. 5-16.
- Arciniegas, Germán (1990). *América, tierra firme y otros ensayos*. Caracas, Biblioteca Ayacucho.
- Banco Mundial (2001). *Informe de Desarrollo Mundial 2000/2001. Lucha contra la pobreza*. Washington D.C., Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento.
- Barber, W. J. (1980). *Historia del pensamiento económico*. Madrid Alianza.
- Barraclough, S. y Collarte, J.C. (1972). *El hombre y la tierra En América Latina*. Santiago de Chile, Icirca-Editorial Universitaria.
- Bilbao, L. (2008). *Venezuela en Revolución: Renacimiento del Socialismo. De la acción a la idea. Replanteo de la lucha anticapitalista, la noción de partido y las relaciones internacionales*. Buenos Aires, Le Monde diplomatique.
- Blanco, C. (2002). *Revolución y desilusión. La Venezuela de Hugo Chávez*. Madrid, Catarata.

- Boersner, D. (1988). *¿Qué es el socialismo democrático? La socialdemocracia en Venezuela*. Caracas, Nueva Sociedad, ILDIS.
- Borge, T. (2011). *Un grano de maíz. Entrevista concedida por Fidel Castro a Tomás Borge*. Caracas, Editorial el Perro y la Rana.
- Brito Figueroa, F. (1991). *30 Ensayos de comprensión histórica*. Caracas, Centauro.
- Clemens, H. y Ruben, R. (2001). "Nueva ruralidad y políticas agrarias en América Latina. Hacia una perspectiva de gobernabilidad para el desarrollo", *Nueva sociedad*, 174, Caracas, Nueva Sociedad, Julio-Agosto, Pp.66-80.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999, 30 de diciembre). *Gaceta Oficial de la República*, N° 36.860. [Extraordinaria], Marzo 24, 2000.
- Dávila, L. (1988). *El Estado y las instituciones en Venezuela (1936-1945)*. 124, Caracas, Academia Nacional de la Historia.
- D'elia, Y. (Coordinadora), (2002). *Estrategia de Promoción de calidad de vida. La construcción de políticas públicas por la calidad de vida desde una perspectiva de Derecho y equidad*. Caracas, GTZ, Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
- Delahate, O. (2001). *Políticas de tierras de Venezuela en el Siglo XX*. Caracas, Tropykos.
- De la Plaza, S. (1959). *La reforma agraria*. Caracas, Pensamiento Vivo.

Di Tella, T. (Supervisor) (1989). *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*. Buenos Aires, Punto sur.

Espinoza, A. (1992). *Sinopsis Fisiográfica de la región zuliana*. Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Faría, I. (2005). "Procedimientos administrativos agrarios en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario", *Cuestiones políticas*, núm.35, Maracaibo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia, Pp.92-116.

Febres, C. (1993). *Los indicadores sociales en Venezuela*. Mérida, Consejo de Publicaciones, Universidad de los Andes.

Franco, R. (2002). "Globalización, democracia y equidad ¿qué pasa hoy en América Latina?", *Contribuciones*, núm.3, Año XVII, Buenos aires, Honrad-Adenauer Stiftung, julio-septiembre, Pp.49-73.

Gabaldón, A. J. (2006). *Desarrollo sustentable. La Salida de América Latina*. Caracas, Grijalbo.

Gaceta Oficial N° 37.323. *Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario*. Asamblea Nacional, 13 de noviembre de 2001.

Gaceta Oficial N°. 5.771. Extraordinario. *Ley de Tierras y Desarrollo Agrario*. Asamblea Nacional, 18 de mayo de 2005.

Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinario. *Ley de Tierras y Desarrollo Agrario*. Asamblea Nacional, Caracas, jueves 29 de julio de 2010.

Galeano, E. (1982). *Las venas abiertas de América Latina*. México, Siglo XXI.

- George, P. (1966), *Geografía Activa*. Barcelona, Ariel.
- Gips, T. (1984). "What is sustainable agriculture", Manna, Julio-Agosto.
- González, J., y Otros (1977). *Planificación del desarrollo agropecuario. Un enfoque para América Latina II*. México, Siglo XXI.
- Grosso, P. (1997). *LA FAO y la reforma agraria en América Latina: Hacia una nueva visión*. Oficial Servicio de Tenencia de la Tierra (SDAA), Dirección de Desarrollo Rural de la FAO, Mayo.
- Hernández, J., y Martel, A. (1993). "La agricultura posible", en Carlos Blanco (coordinador). *Venezuela, del siglo XXI: un proyecto para construirla*. Caracas, COPRE, PNUD, Nueva Sociedad, Pp.251-269.
- Horowitz, I. (1966). *Revolución en Brasil*. Política y sociedad de Vargas a Goulart (1930-1964). México, FCE.
- Huntington, S. (1997). *El orden político en las sociedades en cambio*. Barcelona, Paidós.
- Kay, C. (2001). "Conflictos y violencia en la Latinoamérica rural", *Nueva sociedad*, 174, Caracas, Nueva Sociedad, Julio-Agosto, Pp.107-120.
- Klikberg, B. (1993). *Pobreza un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial*. México. FCE.
- Klikberg (1993). *La agenda pendiente en América Latina*. Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo, FCE, Pp.95-136.
- Le Coz, J. (1976). *Las reformas agrarias. De Zapata a Mao Tsé tung y la FAO*. Barcelona, Ariel.

Ley del Plan de la Patria. *Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación: 2013-2019*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6118, Extraordinario, 4 de diciembre de 2013.

Martínez, J. (1970). "Sociología del desarrollo agrario y agrícola", en Pablo González Casanova y Otros. *Sociología del desarrollo latinoamericano (una guía para su estudio)*. México, UNAM, Pp.85-133.

Mesa, R. (1974). *La rebelión colonial*. Madrid, EDICUSA OCAMPO, José Antonio (2005). "Economía y democracia", en Bernardo

Oropeza, A. (1944). *Evolución constitucional de nuestra República. Análisis de las constituciones que ha tenido el país*. Caracas, Impresores Unidos.

www.bdigital.ula.ve

Paniagua, Á., y Moyano, E. (1998). "Medio ambiente, desarrollo sostenible y escalas de sostenibilidad", *Revista española de investigaciones sociológicas*, núm.83, Madrid, CIS, Pp.151-175.

Pérez, J. (2005). "Dimensión ética del desarrollo sostenible de la agricultura", *Revista de ciencias sociales*, vol.XI, núm. 2, Maracaibo, Universidad del Zulia, Facultad de ciencias Jurídicas y sociales, Mayo – Agosto, Pp.246-255.

Pipitone, U. (2001). "Agricultura: el eslabón perdido", *Nueva sociedad*, 174, Caracas, Nueva Sociedad, Julio-Agosto, Pp.81-94

Ramonedá, J. (1999). *Después de la pasión política*. Madrid, Taurus. Pensamiento.

- Rangel, C. (1982). *Del buen salvaje al buen revolucionario*. Caracas, Monte Ávila.
- Relenberg, N., y Otros (1979). *Los pobres de Venezuela. Autoorganización de los pobladores: un informe crítico*. Buenos Aires, El Cid Editor.
- Repetto, F. (1994). "Política social entre la democracia y el desarrollo", *Nueva sociedad*, 131, Caracas, Nueva Sociedad, Mayo-Junio, Pp.132-143.
- Rubio, B. (2001). "La agricultura latinoamericana. Una década de subordinación excluyente", *Nueva sociedad*, 174, Caracas, Nueva Sociedad, Julio-Agosto, Pp.54-65.
- Ruiz Tagle, A. (1996). "cooperación y solidaridad. Señas de identidad del socialismo democrático", *Leviatán. Revista de hechos e ideas*. 63, II Época, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, Primavera, Pp.25-40.
- Sánchez, J. (1982). *Del campo a la ciudad. Modos de vida rural y urbana*. Barcelona (España), Salvat.
- Sanoja M. (2001). *Historia sociocultural de la economía venezolana*. Caracas, Banco Central de Venezuela.
- Sanoja Obediente, M., y Vargas - Arenas, I. (2008). *La revolución bolivariana. Historia, cultura y socialismo*. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericanos.
- Sfeir-Younis, A. (1998). "El desarrollo sostenible en las Américas", en Roberto Gutiérrez y Otros. *Retos para el nuevo milenio en América Latina*. Santafé de Bogotá, Tercer Mundo, Pp.25-69.

Soto, O. (2006). *La cuestión agraria en Venezuela*. 2 Tomos, Mérida, Consejo de Estudios de Postgrado, Maestría en Desarrollo Agrario, Universidad de los Andes.

Tablada, C. (2001). *El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara*. La Habana, Editorial Ciencias Sociales.

Villegas, A. (1972). *Reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano*. México, siglo XXI.

www.bdigital.ula.ve